40 años después
Titiriteros y dignidad

Carlos del Frade

40 años después

Titiriteros y dignidad

Carlos del Frade

40 años después. Titiriteros y dignidad.
Carlos del Frade

delfradecarlos@gmail.com
[0341] 155 196 286

Hecho en Rosario en el mes de febrero de 2016.

La edición y el diseño de este libro estuvo a cargo de *Este Carnaval* y las tapas fueron intervenidas por las niñas y niños de *La Banateca,* biblioteca popular de Villa Banana.

estecarnaval@gmail.com
facebook: CAUSA organización popular

Usted es libre de compartir, copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato y/o adaptar, remezclar, transformar y crear a partir del material bajo las siguientes condiciones:

Reconocimiento — Debe reconocer adecuadamente la autoría e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo de cualquier manera razonable, pero no de una manera que sugiera que tiene el apoyo del licenciador o lo recibe por el uso que hace.

NoComercial — No puede utilizar el material para una finalidad comercial.

CompartirIgual — Si remezcla, transforma o crea a partir del material, deberá difundir sus contribuciones bajo las mismas condiciones que el original.

40 años después
Titiriteros y dignidad

Carlos del Frade

Rosario, 2016

Índice

Prólogo 7

Capítulo 1
Del presente. 40 años después
De Mitre a Macri 13
Los ejecutivos. 17
Rivadavia, Kirchner, Macri,
mineras... 25
Los juicios 28

Capítulo 2
De sueños, rebeldías y dignidad
Los Rosariazos 41
Angelelli, Devoto y Brasca 55
Maestros que molestaban 58
La guerra de monseñor Iriarte. . .63
Viaje al paralelo 28 68

Capítulo 3
El caso Larrabure y la construcción
de la necesidad del golpe. 71

Capítulo 4
Reciclajes
Los titiriteros 79
Pío Laghi y el recuerdo de Brasca .82
Civiles 86
El Gato maula 92
Rodenas y La Calamita. 94
La cara oculta de Acindar. 98
El desaparecedor de Haroldo
Conti y la Barrick 104
Otro que inventó la muerte
(Gazari Barroso). 115

Capítulo 5
El origen del narcotráfico
en Argentina. 121
La memoria de los represores . . 123
El negocio paraestatal 125
La conexión boliviana 127
Los contactos de Massera
y Galtieri 129

Capítulo 6
40 x 40.
Números y frases para
pensar los 40 años del
golpe de estado de 1976 133

Epílogo 185
Fuentes 189
Bibliografía. 197
Dedicatorias 205

Prólogo

Consecuencias y causas.

Seis de cada diez desaparecidos eran obreros, empleados y profesionales. Es decir que el 60 por ciento de los que molestaban eran trabajadores.

Y seis de cada diez desaparecidos tenían entre 21 y 30 años. Eran jóvenes.

La principal característica del blanco del terrorismo de estado fueron los trabajadores jóvenes.

Cuarenta años después del inicio del sexto golpe de estado en la Argentina del siglo veinte hay que tener claridad sobre esta consecuencia. Los enemigos para los que usurparon el poder eran trabajadores jóvenes.

La deuda externa, en tanto, entre 1976 y 1983 aumentó en 35 mil millones de dólares y fueron cerradas 20 mil fábricas, aproximadamente. Y de las 1.627 «leyes» todavía vigentes de la dictadura una de ellas marca el perfil de la economía de aquel momento, la ley de entidades financieras, la 21.525 «sancionada» el 14 de febrero de 1977.

Los trabajadores jóvenes debían desaparecer para aplicar un plan económico que priorizara la subordinación a los capitales internacionales y, especialmente, a los movimientos financieros por encima de los productivos.

En esas consecuencias, quizás, puedan verse las causas.

Cuarenta años después, la Argentina encuentra en su presente algunas huellas del Proceso de Reorganización Nacional, no solamente en los desaparecidos, en la búsqueda de los chicos apropiados apenas habían nacido o en esas 1.627 leyes todavía vigentes, sino también en matrices que van devorando las existencias de los más vulnerables, como el negocio paraestatal del narcotráfico.

Uno de los capítulos del presente trabajo es pensar el inicio de los cargamentos de cocaína que comenzaron a llegar al país como resultado de una negociación entre de la dictadura de Videla, en Argentina, y Banzer, en Bolivia.

También hay informaciones sobre las distintas formas de reciclaje que tuvieron los proveedores de la muerte, en organismos estatales y empresas privadas multinacionales, como sucedió con el desaparecedor de Haroldo Conti nombrado jefe de seguridad de la poderosa Barrick Gold, en la provincia de San Juan.

Están los nombres de los civiles que prestaron colaboración con la noche carnívora y los números de los procesados y condenados que son muy pocos en relación a los 80 mil integrantes de las fuerzas armadas que llevaron adelante la ejecución del exterminio, según apuntó en un documento reservado y confidencial el entonces jefe del ejército a principios de la democracia, Río Ereñú.

Cuatro décadas después, la nueva administración nacional, votada por la mayoría del pueblo, ubica en la cima del poder político a un gobierno de centro derecha que ha puesto como funcionarios de los ministerios a empleados de grandes empresas, nacionales y extranjeras, como también de bancos, nacionales y extranjeros. Una composición que responde a las líneas directrices que marcara uno de los principales referentes del grupo Techint, Paolo Rocca, cuando anunció, en noviembre de 2015, el final del estado distribucionista en América Latina y el advenimiento del tiempo de los empresarios.

«La defensa del capital y la empresa privada es el principal deber», dijo, en septiembre de 1977, en la Bolsa de Comercio de Rosario, Ramón Genaro Díaz Bessone, ex comandante del Segundo Cuerpo de Ejército, con jurisdicción en las provincias de Santa Fe, Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes y Entre Ríos. Aquella afirmación era la confirmación que las fuerzas armadas y de seguridad trabajaron para el gran capital. No había alusión a la defensa del ser nacional ni a la Patria, sino al «capital y la empresa privada». Había que matar trabajadores jóvenes en beneficio del «capital y la empresa privada».

Los dueños de la vida y la muerte en los centros clandestinos de detención eran militares y policías pero, en definitiva, se trataba de títeres, macabros, pero títeres al fin.

El problema es y son los titiriteros.

Los delincuentes de guante blanco, aquellos empresarios ante los cuales rendían cuentas de sangre los comandantes como Díaz Bessone.

La extraordinaria lucha de sobrevivientes, Organismos de Derechos Humanos y familiares de desaparecidos ha generado,

en estos cuarenta años, la continuidad de los juicios contra los delitos de lesa humanidad.

Ahora es el momento de seguir por los titiriteros, por los integrantes de ese poder económico que pidió la desaparición de trabajadores jóvenes.

No parece ser sencillo llevar a los juzgados federales a los grandes patrones en el «tiempo de los empresarios», como dijera Paolo Rocca. Es uno de los grandes desafíos del presente, de esta forma de pensar y vivir los cuarenta años del golpe perpetrado el 24 de marzo de 1976 pero ya puesto en funcionamiento desde hacía tiempo como, por ejemplo, lo sufrido en Acindar, en Villa Constitución, el 20 de marzo de 1975.

En estas líneas, en forma paralela, habrá datos e historias que apuntarán a pensar lo educativo, cultural y comunicacional desde las consecuencias en existencia colectiva cotidiana. Aquellos valores de consumismo e individualismo que quiso imponer el modelo de la dictadura están vigentes en la Argentina, cuarenta años después.

Un gran tarea sigue siendo democratizar esos valores que terminan fundamentando proyectos políticos y económicos que solamente favorecen a muy pocos.

Y una vez más, será preciso pensar en por qué eran tan peligrosos aquellos trabajadores jóvenes que fueron el blanco preferido de la noche carnívora.

Estaban enamorados de la palabra revolución y necesitaban que se hiciera carne en la realidad cotidiana de las grandes mayorías.

Dieron la vida, la ofrendaron en beneficio de los demás. Fenomenal demostración del amor colectivo. Ante semejante

entrega, el verdadero poder, el económico, los titiriteros de guante blanco, tuvieron terror e impusieron el terrorismo de estado. La década del setenta no fue solamente un espacio de violencia. También fue un momento de amor y solidaridad que generó semejante brutal represión.

Porque esos trabajadores jóvenes querían ver que en el trono de la vida cotidiana esté la noble igualdad, como apunta la letra del himno libertario que siempre hemos cantado de forma mutilada.

El gran sueño colectivo inconcluso, la igualdad.

Con humildad y firmeza decimos que es necesario seguir peleando por el amor contra la muerte y el poder.

Que la memoria cobija la esperanza y que hacer justicia sobre los titiriteros de guante blanco que movieron a los títeres macabros que produjeron el genocidio no es saldar cuentas con el pasado sino una concreta apuesta hacia el presente y el futuro.

Por eso los invitamos a leer este libro.

Para que la felicidad, como siempre decimos, no sea la propiedad privada de unos pocos.

40 años después, no nos han vencido, como suele cantarse en las calles desde diversas organizaciones sociales y políticas.

Carlos del Frade
Periodista de investigación
diputado provincial de Santa F
por el Frente Social y Popular
Rosario, enero de 2016

Capítulo 1
Del presente.
40 Años después.

De Mitre a Macri

Techint es uno de los dueños de la Argentina. Su principal referente, Paolo Rocca, marcó el futuro próximo a través de una conferencia, días antes de la segunda vuelta que determinó el triunfo de Mauricio Macri el domingo 22 de noviembre, una fecha con historia, como se verá más adelante.

Entre otras cosas, Rocca, en el 56º Congreso de la Asociación Latinoamericana del Acero, sostuvo que durante los doce años del kirchnerismo «aumentó el peso del Estado en la economía del 22% a más del 40% del PBI... El peso del Estado redujo el peso de la iniciativa privada y eso fue malísimo para nosotros, no sólo en la Argentina. Hemos pensado que la riqueza la crea el Estado, pero no es así, sólo la distribuye... ese modelo debe cambiar... El Estado no va a poder gastar lo mismo que en los últimos años, va a tener que achicarse, pero puede hacerlo sin perder eficacia ni

capacidad de promoción del desarrollo... La verdad es que no se la ve en el nivel de inversiones, que quedó estancado en el orden del 20 por ciento a lo largo de los últimos quince años. Esa masa de recursos se transformó en aumento del consumo y en subsidios, en elemento de un «diseño económico pero también político populista en algunos casos con rasgos autoritarios, como se puede encontrar en Venezuela y Rusia... Las políticas económicas van a cambiar pero también el cuadro político, se tienen que encarar problemas distintos: hoy el tema no puede ser redistribuir un surplus (superávit) que se está extinguiendo», sostuvo Paolo Rocca, del grupo Techint, uno de los dueños de la Argentina. Y opinó que el modelo de «más Estado menos industria» va a tener que «ser sustituido por uno en el cual el rol de las empresas aumente para transformarse en el motor del desarrollo».

Inversiones privadas, reducción del estado distribucionista y el tiempo de las empresas por encima de otros actores, es la receta que Rocca quiere imponer a través del voto mayoritario al ingeniero Macri.

Una matriz que tiene un largo recorrido en estos arrabales del mundo.

El 22 de noviembre de 1861, a tres meses de la extraña victoria en los campos de Pavón, las tropas del general Bartolomé Mitre, llevaron adelante una masacre de federales en Cañada de Gómez, sur de la provincia de Santa Fe.

«Las divisiones mitristas a las órdenes de Flores, Sandes, Paunero, Arredondo, Rivas, entran implacablemente en el interior. Hombre tomado con la divisa punzó es lanceado; si no lleva la divisa es incorporado a los invasores o mandado a un cantón de la frontera a pelear con los indios. Venancio Flores, que antes fue presidente de la República Oriental por una revolución de los colorados, es jefe de la vanguardia de Mitre. Se adelanta a Cañada de Gómez y sorprende, el 22 de noviembre, al grueso del ejército federal que sigue esperando órdenes de Urquiza. Flores

pasa a degüello a los más reacios e incorpora a los demás. No se había visto tanta violencia en nuestras guerras civiles, que no se distinguieron precisamente por su lenidad; pero esta ocupación porteña del interior colma la medida. Hasta Nelly y Obes, el ministro de guerra de Mitre se estremece al redactar el parte de la hecatombe: 'El suceso de la Cañada de Gómez —informa al gobernador delegado Manuel Ocampo— es uno de esos hechos de armas que aterrorizan al vencedor... esto es lo que le pasa al general Flores, y es por ello que no quiere decir detalladamente lo que ha pasado. Hay más de 300 muertos, mientras que por nuestra parte sólo hemos tenido dos muertos... Este suceso es la segunda edición de Villamayor, corregida y aumentada... Para disimular más la operación confiada al general Flores se le hizo incorporar toda la fuerza de caballería de la División de Córdoba enemiga'», cuenta José María Rosa en su imprescindible libro *La guerra del Paraguay y las montoneras argentinas*.

Meses antes, Bartolomé Mitre, al inaugurar el Ferrocarril del Sur, el 7 de marzo de 1861, diría que «los ciudadanos de la Gran Bretaña» no eran reconocidos como extranjeros en estas tierras. «...Démonos cuenta de este triunfo pacífico, busquemos el nervio motor de estos progresos y veamos cuál es la fuerza inicial que lo pone en movimiento. ¿Cuál es la fuerza que impulsa nuestro progreso? Señores, es el capital inglés... Desde 1809, quedó sellado entre el comercio inglés y la industria rural del país. Los derechos que los negociantes ingleses abonaron en aquella época a la Aduana de Buenos Aires, fueron tan cuantiosos que fue necesario apuntalar las paredes de la tesorería por temor de que el peso que soportaban las echara al suelo. Esta fue la primera hazaña del capital inglés en estos países que presagiaba la caída de las antiguas murallas y el advenimiento de una nueva época. Verdaderamente, señores, el capital inglés es un gran personaje anónimo cuya historia no ha sido escrita aún... señores brindo por el fecundo consorcio del capital inglés y del progreso argentino»,

decía el creador del diario «La Nación», la Academia Nacional de Historia y el hombre que abrazaría la idea de construir un país con un estado a favor de los intereses extranjeros y las minorías.

En esos pensamientos, llevados a la práctica con la intervención de varias provincias argentinas, el asesinato del Chacho Peñaloza, la guerra al pueblo paraguayo y la masacre de Cañada de Gómez del 22 de noviembre de 1861, Mitre expresaba su idea de libertad y progreso. Los fundamentos de los nuevos tiempos que anuncia Paolo Rocca para los días del ingeniero Macri.•

Fuentes: Discurso de Paolo Rocca del 11 de noviembre de 2015; «La guerra del Paraguay y las montoneras argentinas», de José María Rosa y «El mitrismo y las bases de la Argentina agroexportadora», de Norberto Galasso.

Los ejecutivos

«El país atendido por sus propios dueños. En apenas veinte días, desembarcaron en ministerios y secretarías ex gerentes de Shell, Techint, General Motors, HSBC, Telecom, Grupo Clarín, LAN, Banco Galicia, Pan American Energy, JP Morgan, Citibank, Telefónica, Coca-Cola, Deutsche Bank, Farmacity y Axion, entre otras empresas», escribió el periodista Fernando Krakowiak en el diario Página/12, el domingo 3 de enero de 2016.

Sostenía que «en apenas veinte días, decenas de ejecutivos de las principales empresas del país desembarcaron en los ministerios y secretarías del Estado nacional, pero ya no para llevar adelante sus actividades habituales de lobby sino para hacerse cargo de la gestión pública. El presidente Mauricio Macri designó como integrantes de su gobierno a ex gerentes de Shell, Techint, General Motors, HSBC, Telecom, Grupo Clarín, LAN, Banco Galicia, Pan American Energy, JP Morgan, Citibank, Telefónica, Coca-Cola, Deutsche Bank, Farmacity y Axion, entre otras empresas. Algunos de los flamantes funcionarios trabajaron en esas multinacionales hasta hace pocos días y otros consolidaron su carrera profesional allí y luego pasaron a desempeñarse en otras organizaciones, de donde ahora fueron reclutados por 'cazadores de talentos', como Egon Zehnder y Stigol & Moore. La mayoría no tiene experiencia en la administración pública, pero se sintieron interpelados por un gobierno que se presenta como amigo de los mercados y reivindica la supuesta eficiencia del sector privado como modelo a seguir», apuntaba el principio de la investigación.

Jefatura de Gabinete. El jefe de Gabinete, Marcos Peña, designó como secretario de Coordinación de Políticas Públicas a Gustavo Lopetegui, CEO de la Aerolínea chilena LAN desde 2009 y fundador de la desaparecida cadena de supermercados Eki. También se sumó Mario Quintana como secretario de Coordinación

Interministerial de la Jefatura de Gabinete. Este economista dirigió hasta su asunción el Grupo Pegasus, controlante de Farmacity, Freddo y Tortugas Open Mall, entre otras firmas. Quintana llevó como subsecretaria de Evaluación de Proyectos con Financiamiento Externo a Natalia Zang, ex directora de Finanzas de Farmacity, quien también fue vicepresidenta de Pegasus, CEO de Jazmín Chebar, CEO de Grupo Monarca y directora de la minera Austral Gold. Como subsecretario de Relaciones Institucionales de la secretaría de Asuntos Estratégicos asumió Matías García Oliver, ex director de Asuntos Públicos de Directv. Otro que se ubicó en la jefatura de Gabinete fue Rosendo Grobocopatel, hijo de Gustavo Grobocopatel, presidente de Los Grobo, quien es uno de los flamantes asesores de Marcos Peña.

Ministerio de Energía y Minería. El ministerio está encabezado por Juan José Aranguren, quien dejó su cargo de presidente de Shell el pasado 30 de junio luego de haberse desempeñado 37 años en la petrolera angloholandesa. Además, a su equipo se sumaron otros ejecutivos que venían desempeñándose en las petroleras a las cuales ahora deberán regular. El secretario de Recursos Hidrocarburíferos es José Luis Sureda, quien desde 1999 se desempeñó como vicepresidente de Ventas de Gas Natural de Pan American Energy (PAE), la firma que controlan los hermanos Carlos y Alejandro Bulgheroni en sociedad con los chinos de Cnooc. Como secretario de Planeamiento Estratégico asumió Daniel Redondo, un ingeniero químico que desarrolló gran parte de su carrera profesional en Exxon Mobil, en las filiales de Argentina y El Salvador, donde llegó a ser CEO y presidente de la subsidiaria Esso Standard, y en cargos regionales con responsabilidad sobre América latina y el Caribe. También se sumó Sebastián Kind como subsecretario de Energías Renovables, un ingeniero mecánico que trabajó como especialista en energía eólica en British Petroleum, fue jefe de Energías Alternativas de PAE y presidente de la firma

ítalo-argentina Aires Renewables S.A. A su vez, al frente de la Subsecretaría de Refinación y Comercialización está Pablo Popik, un ingeniero químico recibido en el ITBA que trabajó un año en Repsol-YPF entre 1998 y 1999 y luego pasó a Exxon donde desempeñó diversos cargos en Argentina, Sudamérica e incluso Estados Unidos hasta septiembre de 2012. Los últimos tres años estuvo en la petrolera Axion. La petrolera estatal Enarsa, creada por Néstor Kirchner, está conducida ahora por Hugo Balboa, quien hasta el mes pasado era director del proyecto de expansión de Axion y antes ocupó diversos cargos gerenciales en Shell, Pecom Energía y Sociedad Comercial del Plata.

En los entes reguladores del sector energético, también desembarcaron gerentes del sector privado. Macri eligió como presidente de Enargas a David José Tezanos, presidente de Metrogas y director de Gas de YPF, un técnico eléctrico, que anteriormente trabajó en Wintershall Energía, Total Austral y TGS. En la presidencia del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) estará Juan Garade, un contador público socio en Management Consultants, quien antes de sumarse a esa consultora trabajó casi once años como director de Planificación, Control y Regulación de Edesur (marzo 2001-mayo 2012) y antes de eso fue gerente de Planificación Económica de Edenor (octubre 1992-marzo 1998). A su vez, como director del ENRE irá Ricardo Sericano, quien trabajó en cargos gerenciales de Edenor desde septiembre de 1992 hasta agosto de 2010 para luego sumarse a la consultora RHS.

Petrolera YPF. La petrolera YPF renovó su directorio y una de las principales incorporaciones fue la de Miguel Ángel Gutiérrez. Este ejecutivo se desempeñó entre 1980 y 2001 en el banco estadounidense JP Morgan donde llegó a ser director general de Mercados Emergentes Globales. Fue CEO de Telefónica de Argentina entre noviembre de 2001 y junio de 2003, fecha en la que pasó a desempeñarse como Consejero Delegado de Telefónica Interna-

cional. De marzo 2005 a Noviembre 2011 fue Consejero y miembro del Comité de Auditoría de Telefónica Sao Paulo (Telesp). En la actualidad es miembro del Consejo Asesor de Telefónica para Latinoamérica, y Consejero y Presidente del Comité de Auditoría y Control de la española Abertis Infraestructuras, entre otras empresas. También es socio fundador de The Rohatyn Group, un fondo de inversión para mercados emergentes creado en Estados Unidos en 2003. Otro de los directores que se incorporó a YPF es Carlos Felices, quien ya había trabajado en la compañía como CEO financiero entre 1994 y 2002, cuando la empresa estaba controlada por la española Repsol. Entre julio de 2002 y abril de 2008 trabajó en Telecom Argentina donde llegó a ser presidente y CEO. Una vez que abandonó la firma controlada por los italianos fue vice chairman de Centro de Estudios Financieros hasta mayo de 2012, mientras que los últimos años se desempeñó como gerente general de President Energy (ex President Petroleum), una firma británica dedicada a la exploración y producción de petróleo y gas en Sudamérica.

Ministerio de Hacienda y Finanzas. Si bien hace más de diez años que se dedica a la política, el nuevo ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, hizo sus primeras armas en el sistema financiero como director del banco estadounidense JP Morgan, donde trabajó con Luis Caputo, a quien ahora designó secretario de Finanzas. Caputo trabajó en JP Morgan entre 1994 y 1997 y luego se incorporó a Deutsche Bank, donde estuvo hasta abril de 2008, llegando a ser presidente del banco en la Argentina. En los últimos años se venía desempeñando como presidente del fondo de inversión Axis. Al frente de la Comisión Nacional de Valores, una entidad autárquica dependiente del Ministerio de Finanzas, Prat Gay designó a Marcos Ayerra, otro hombre del mercado financiero. Si bien en los últimos años trabajó como director de Desarrollo Corporativo del grupo Biosidus, una firma argentina

que produce biofármacos, el antecedente clave que lo catapultó al organismo regulador del mercado de capitales fue haber sido vicepresidente del Departamento de finanzas corporativas para América Latina de Chase Securities, un banco de inversión controlado por JP Morgan. Ayerra trabajó once años en el Chase, entre 1987 y 1998. Otra de las incorporaciones clave de la CNV es la de Rocío Balestra, una abogada que trabajó 14 años y medio en Bruchou, Fernández Madero & Lombardi, un estudio que asesora a grandes compañías financieras locales e internacionales. Balestra también se desempeñó como abogada internacional del estudio neoyorquino Shearman and Sterling, que ahora podría ser contratado por Argentina para negociar con los buitres.

Banco Central. Es otro de los organismos que reclutó varios ejecutivos del sector privado. Demian Reidel es uno de los nuevos directores de la entidad. Es un físico recibido en el Instituto Balseiro, con un máster en matemática financiera en la Universidad de Chicago y un doctorado en Economía en Harvard. Comenzó su carrera profesional en el sector financiero en septiembre de 1998 en el área de investigación sobre mercados emergentes en JP Morgan. En marzo de 2001 pasó a Goldman Sachs, donde estuvo a cargo del área de estrategia de deuda externa en mercados emergentes. Fue cofundador de QFR, compañía de manejo de activos financieros basada en Nueva York, donde se desempeñó entre abril de 2007 y septiembre de 2012. Otro de los nuevos directores es Horacio Tomás Liendo (nieto), un abogado que inició su carrera en el estudio Marval, O'Farrell & Mairal, dedicado a defender a grandes empresas. Desde julio de 2007 trabajaba como responsable del departamento legal del banco Industrial and Commercial Bank of China. Como gerente general del Central asumió Mario Flores Vidal, quien se desempeñó como director para Sudamérica y como Head de M&A para América Latina en la agencia Thomson Reuters. El último de los refuerzos provenientes del sector

privado fue Agustín Collazo, flamante subgerente de operaciones del banco, un licenciado en Economía egresado de la Universidad Torcuato Di Tella, con un MBA en la Universidad de Chicago, que se venía desempeñando como director gerente en la administración de derivados de índices accionarios internacionales de Morgan Stanley, New York.

Banco Nación. El nuevo presidente de la entidad, Carlos Melconian, decidió convocar a varios profesionales del sector financiero. Uno de los ejecutivos más conocidos que se sumó al directorio es Luis Ribaya, quien venía desempeñándose como director del Banco Galicia y presidente del Mercado Abierto Electrónico. En las empresas vinculadas al grupo también sobresalen los hombres de la city. Al frente de Nación Servicios quedó Alejandro Nigro, un ejecutivo que comenzó su carrera en el Citibank, luego fue gerente general del HSBC y después se dedicó al asesoramiento de banca de inversión. Como director en la misma firma se incorporó Alejandro Cavallero, quien fue vicepresidente de Citibank entre 1987 y 2000 y gerente de canales alternativos del HSBC entre 2000 y 2002. En los últimos seis años trabajó como CEO de la firma Guía Local LLC. El presidente de Nación Seguros es Juan Horacio Sarquis, un economista recibido en la UCA que hizo toda su carrera en el Banco Galicia, donde desde 2009 se venía desempeñando como gerente de Banca Minorista. El Banco Nación también incorporó a Jorge Lawson, quien, si bien se venía desempeñando como ministro de Comunicación Pública y Desarrollo Estratégico de Córdoba, es un reconocido lobbysta del Grupo Arcor.

Ministerio de Transporte. El ministro Guillermo Dietrich, hijo del dueño de una importante concesionaria de autos del mismo nombre, también incorporó a varios ejecutivos del sector privado. En Aerolíneas Argentinas asumirá Isela Constantini, ex CEO de General Motors. A su vez, el PRO contrató a Egon Zehnder, la

multinacional «cazadora de talentos» dirigida en el país por Marcelo «Grillo» Grimoldi, para seleccionar otros cuadros gerenciales de la firma. En Intercargo, la empresa estatal que presta servicios en tierra a las aerolíneas, pusieron a Mario Agustín Dell'Acqua, ex director de Proyectos de Techint. A su vez, Marcelo Orfila, gerente general de Grupo Monarca entre 2011 y 2014, director de Aeropuertos Argentina 2000 entre 2000 y 2007 y gerente general de Alpargatas entre 1994 y 1997, asumió al frente de Operadora Ferroviaria, la sociedad estatal que gestiona los trenes urbanos del Área Metropolitana de Buenos Aires, los servicios regionales y de larga distancia. Orfila puso como vicepresidente a Diego Kyburg, quien durante los últimos dos años fue gerente de operaciones de Biomac y antes se desempeñó en Logyt Sudamericana, L'Oreal, Home Depot, Alpargatas y Casa Tía. A cargo de la sociedad Administración de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) quedó Guillermo Fiad, un ingeniero de Fundación G-25, con pasado en Duke Energy, Shell, Metrogas y BankBoston.

Otros organismos. La canciller Susana Malcorra viene de trabajar como jefa de Gabinete de la Organización para las Naciones Unidas, pero tiene una larga trayectoria en el sector corporativo como gerente de IBM y Telecom. El caso de Francisco Cabrera es similar, no es una flamante incorporación del sector privado porque se venía desempeñando como ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires, pero el nuevo ministro de Producción transitó la mayor parte de su vida profesional en el Grupo HSBC. Además, trabajó en Hewlett-Packard, en Máxima AFJP y en el diario La Nación. Como secretario de Coordinación del Ministerio de Desarrollo Social, virtual viceministro del área que conduce Carolina Stanley, asumió Gabriel Castelli, un economista ex director de Loma Negra, HSBC y Farmacity, que también fue director nacional de Caritas. La secretaría de Empleo del Ministerio de Trabajo quedó a cargo de Miguel Ángel Punte, ex jefe de

Recursos Humanos de Techint. En el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses que administra los recursos previsionales, Macri puso a Luis María Blaquier, un economista egresado de la UCA que trabajó 13 años como director Ejecutivo de Goldman Sachs. También fue director de Transportadora Gas del Sur, Arcor, Ledesma, empresa propiedad de su tío Carlos Blaquier, y Grupo Clarín, donde se venía desempeñando cuando lo convocaron. Al frente de la Dirección Nacional de Relaciones Institucionales del flamante Ministerio de Modernización quedó Guillermo Baistrocchi, ex vicepresidente de Relaciones Institucionales de PAE, quien también trabajó en AES, Correo Argentino y Socma.

En el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales designaron a Alejandro Cacetta, quien entre 2001 y 2006 fue gerente de negocios y finanzas de la división cine y publicidad de la productora Pol-ka y desde 2009 ocupa el mismo cargo en Patagonik Film Group, cuyos accionistas son Disney, Artear (Grupo Clarín) y Cinecolor. Como Director Nacional de Desarrollo Institucional de la Secretaría de Vivienda y Hábitat asumirá Guillermo Casanova, ex director de Asuntos Corporativos y Legales de Coca-Cola-Femsa. También postularon a María Eugenia Talerico como vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF). Talerico fue integrante el estudio Fernández Alonso y Becar Varela & Richards entre 2006 y 2012. Desde entonces trabaja como profesional independiente en temas de lavado y fue la encargada de defender al banco HSBC justamente ante la UIF, organismo que combate el lavado de activos.•

Rivadavia, Kirchner, Macri, mineras…

Minera Alumbrera vendió durante el año 2015 por un total de 8.177 millones de pesos, ocupando el puesto 68 entre las mil empresas que más facturaron. A un nivel de 22,71 millones de pesos diarios, 1.577 pesos cada sesenta segundos.

Su ganancia fue de 1.031 millones de pesos. Tiene 1.404 empleados en distintos lugares del país.

«Bajo de la Alumbrera es uno de los principales yacimientos metalíferos del mundo que se explota a cielo abierto, en el cual se invirtieron US$ 1.200 millones para su puesta en marcha en 1997. La producción minera anual asciende a 120 millones de toneladas métricas. El material se extrae con cuatro palas eléctricas de gran escala y se transporta a través de una flota de 36 camiones mineros con capacidad para 220 toneladas. Mediante procesos de trituración, molienda y flotación de gran escala, la producción anual de Bajo de la Alumbrera asciende a 400.000 toneladas de concentrado que contienen aproximadamente 100.000 toneladas de cobre metálico y 300.000 onzas troy de oro. También se producen 25.000 onzas de oro doré y 2000 toneladas de concentrado de molibdeno. Las reservas actuales del yacimiento permiten hacer una proyección de su vida útil hasta fines de 2018», dice la empresa de sí misma en su propia página.

Por otro lado, Barrick Argentina, facturó 7.600 millones de pesos, por lo que se situó en el puesto 71 entre las mil firmas que más vendieron durante 2015.

Es decir que facturó a razón de 21,11 millones diarios, 1.466 pesos por minuto, a pesar del desastre ecológico denunciado durante 2015.

Barrick Argentina, a diferencia de Minera Alumbrera, no informó sobre ganancias y, según su propia página, tenía 1.601 empleados, hasta principios de 2013.

«Somos una compañía canadiense que desarrolla actividades

de exploración y explotación minera en distintas partes del mundo. Presente desde 1993 en Argentina, las actividades incluyen la operación de Veladero, la propiedad del proyecto binacional Pascua-Lama (en la frontera entre Argentina y Chile) y diversas áreas de prospección y exploración. La compañía cuenta con oficinas en Buenos Aires, San Juan capital y los departamentos sanjuaninos de Albardón, Iglesia y Jáchal. La sede central de Barrick se encuentra en Toronto, Canadá. La empresa, principal productora de oro del mundo, tiene operaciones en 19 minas y presencia en 10 países. Durante 2013, el 50% de su producción la obtuvo de Estados Unidos y Canadá; el 24,7%, de Australia y Pacífico; el 18,7%, de Sudamérica y el 6,6% restante, de África. En Argentina, la mina Veladero comenzó sus operaciones en 2005, con una inversión inicial de 540 millones de dólares. Está ubicada en la provincia de San Juan, en el departamento de Iglesia, a aproximadamente 350 kilómetros al noroeste de la ciudad de San Juan y a una altura de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Actualmente emplea de manera directa a más de 3.800 personas, entre personal propio y contratado. Pascua-Lama es el primer proyecto minero binacional del mundo, ubicado 10 kilómetros al norte de Veladero. Su nombre reconoce el carácter binacional del proyecto: Pascua, por el nombre del área chilena, y Lama, por la argentina» dice la página de la empresa.

Para el nuevo ministro de Energía y Minería de la Nación, José Aranguren, «el desafío es lograr que la sociedad se enamore de la minería».

«Para ello, vamos a trabajar juntos para recuperar el sentido común, la previsibilidad, y la confianza de la sociedad en que la minería puede. Esto debe hacerse responsablemente, con transparencia y excelencia en la gestión del control ambiental, y generar así verdadero desarrollo en las comunidades», dijo.

Por otro lado, según un informe de las consultoras Ecolatina y Key Market, la minería podría ser uno de los sectores «más

beneficiados por la corrección de la economía durante los próximos años, a partir de la devaluación y la eliminación del cepo». El informe asegura que el nuevo escenario «generará condiciones propicias para la atracción de inversiones y el incremento de las exportaciones. El mayor potencial se concentra en el segmento metalífero que representa cerca de las dos terceras partes de la producción minera local», indicaron las fuentes periodísticas.

De tal manera, la administración Macri, al igual que los gobiernos kirchneristas, seguirán la ruta iniciada hace más de un siglo y medio por Bernardino Rivadavia, que las empresas mineras multinacionales continúen con el saqueo de los bienes comunes sin importar demasiado los costos ambientales y humanos.•

Fuentes: Revista Prensa Económica, número 326, octubre de 2015; Ieco, 24 de diciembre de 2015; páginas oficiales de Minera Alumbrera y Barrick Argentina.

Los juicios

«Hasta ahora se realizaron 153 juicios en los que hubo 660 condenados y 60 personas absueltas. Pero en el año que terminó hubo 19 sentencias contra las 25 de 2014, lo que marca una desaceleración. El objetivo para 2016 es investigar a los civiles, sobre todo al poder económico», escribió Alejandra Dandan, en el diario Página/12, el domingo 3 de enero de 2016.

En 2006 comenzaron los juicios orales de lesa humanidad. A diciembre de 2015, los juicios llegaron a 153 con 660 condenados y 60 personas absueltas. Hay 116 causas ya elevadas a juicio oral que aún esperan fecha de comienzo de debate y otras 237 en instrucción. Durante este año, hubo 19 sentencias contra las 25 sentencias de 2014: los datos indican una desaceleración de las horas de audiencia de los Tribunales Orales Federales, aún teniendo en cuenta que ahora hay 7 megajuicios en simultáneo con debates más largos. Las estadísticas que acaba de publicar la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad del ministerio público muestran parte de los avances y retrocesos del reconocido proceso de justicia por los crímenes de la dictadura en Argentina. Consultados por Página/12, integrantes de los Organismos de Derechos Humanos valoran en términos positivos que durante el 2015 se mantuvieron sostenidamente los juicios en buena parte del país. Y que existieron dos hitos fundamentales: la apertura del juicio a los jueces en Mendoza y del juicio al empresario Marcos Levín en Salta. La comisión bicameral para investigar responsabilidades civiles en el Congreso a partir de marzo, el informe de Flacso, el CELS y el Ministerio de Justicia sobre esos mismos actores asoman como ejes del 2016 para contrarrestar los golpes que recibieron este año las causas a los empresarios. Y también aparece en agenda el inicio del Juicio por el Operativo Independencia. En ese escenario con el nuevo contexto político, los organismos mantienen las alarmas encendidas por la continuidad de las políticas de Estado.

El fin de 2015 marcó varios cierres en simultaneo. Uno se refiere a los números de 2015 y otro más extenso abarca los años transcurridos desde aquel primer juicio oral en La Plata en el que desapareció Julio López. Esa segunda mirada abre un balance sobre los años en los que las demandas de Memoria, Verdad y Justicia —sostenidas incansablemente por los Organismos de Derechos Humanos— fueron tomadas como políticas de Estado. Las primeras declaraciones de Mauricio Macri sobre este eje encendieron señales de alarma al interior de los organismos cuando ante un editorial del diario La Nación que pidió impunidad para los acusados, expresó que «la justicia tendrá total independencia para continuar con su tarea». Los organismos respondieron inmediatamente que eso no bastaba para garantizar una política de Estado. Luego Macri nombró por decreto dos ministros de la Corte, lo que fue masivamente repudiado por los Organismos de Derechos Humanos.

Uno de los datos valorados por las querellas de estos juicios es el sostenimiento constante de los debates en buena parte del país. Este dato encierra otros ejes. Algunos positivos, como la constante producción de prueba, el acceso a nuevos datos de víctimas y de victimarios y las políticas estatales de desclasificación de documentos. Otros negativos, dado que mirados de cerca los juicios también mostraron mayor lentitud, caída de los números de las sentencias, aumento de excarcelaciones y prisiones domiciliarias. Aquí hay que pensar además el bloqueo o resistencias para el avance de las causas a los civiles. Y en términos de superestructura, el retiro o caída de la actividad de la Comisión Interpoderes de la Corte Suprema de Justicia.

Elizabeth Victoria Gómez Alcorta estuvo a cargo de la coordinación del Programa Verdad y Justicia del ministerio de Justicia, que se encarga del monitoreo de las causas. «Entre los puntos salientes de este año hay que marcar el primer juicio a un empresario —señala. Hay que decir además que se mantuvieron sosteni-

damente los juicios en muchas provincias y que se lleva adelante el juicio a los jueces, sin duda es uno de los hitos de 2015. Creo que la presentación del Informe Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad realizado por el CELS, Flacso y el Ministerio de Justicia, de algún modo marca la agenda de 2016, lo mismo que el comienzo del juicio por el Operativo Independencia.»

La constante en la realización de los juicios también es una marca de este año para Pablo Llonto, querellante de las causas de Campo de Mayo. Llonto señala que en ocasiones hubo hasta 7 u 8 debates en simultáneo y detalla como punto saliente de «esa intensa actividad judicial es que va a confirmando que las causas están muy activas y que existe un aporte de testimonios y de documentación que agregan cada vez más material de conocimiento sobre nombres, estructuras e integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad». Esos resultados marcan al mismo tiempo un desafío: «Los datos que surgen de los juicios permiten buscar a centenares de imputados que hasta ahora se desconocían, pero además identificar a otras víctimas. Esto es porque los juicios no sólo buscan condenas sino que actúan como fuente de prueba. De ellos surgen pruebas nuevas para nuevos juicios con nuevas víctimas». Uno de los ejemplos, dice, es el juicio por los crímenes del Vesubio con un crecimiento de 100 por ciento de las víctimas entre 2010 a 2015. Vesubio I se hizo por 156 víctimas; Vesubio II por 202 y Vesubio III, que aún no se realizó, tiene a 358 personas.

Otra riqueza de los Juicios —ahora mirados en plazos más largos— es que aportaron datos para identificar lugares donde los detenidos desaparecidos estuvieron alojados. «De gran parte de los desaparecidos no se sabía en qué centro clandestino habían estado —dice Llonto— y ahora, por primera vez después de cuarenta años, sus familiares pueden tener algún dato.» Eso sucede no solo por la reactivación de los juicios, sino por la dinámica de la oralidad: a diferencia de la instrucción los debates orales están permitiendo a las víctimas hablar de manera más suelta, du-

rante mayor cantidad de tiempo y sin la interlocución de un escriba judicial.

Según los últimos números de la Procuración, sobre 54 imputados del sistema judicial sólo 2 por ciento tiene condena; más de la mitad está procesado y un 34 por ciento se encuentra sometido a las primeras medidas de investigación. Entre los empresarios, el panorama es aún más complicado. Sobre 17 imputados, hay 2 condenados y 1 en juicio oral, pero el universo más numeroso lo integran 5 faltas de mérito. Los golpes más fuertes de este año en estas causas fueron la falta de mérito a Pedro Blaquier de Ledesma impulsada por la Casación, el rechazo a las indagatorias de Héctor Magnetto y Ernestina Herrera de Noble por la apropiación de Papel Prensa, el reciente apartamiento del camarista Eduardo Freiler en esa causa y la falta de mérito a favor de Vicente Massot, dueño del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca. Lo positivo, como se dijo, fue el comienzo del juicio a Marcos Levín.

En este campo se esperan algunas novedades para 2016: la sentencia del juicio a Levín; un dictamen de la Procuración en la causa a Pedro Blaquier para que la Corte revise la falta de mérito de Casación; el inicio de las actividades de la Bicameral del Congreso y el demorado comienzo del juicio por los directivos de la Ford. El nuevo escenario político también aquí produce, sin embargo, las mayores dudas y perturbaciones.

Tomás Ojea Quintana es querellante de la causa Ford en representación de los delegados víctimas de secuestros. Ford se elevó a juicio oral hace un año pero no tiene ni jueces ni fecha de comienzo. «Es positivo que en un futuro —aunque no sabemos cuándo— se abra el juicio oral y público contra los crímenes cometidos por los directivos por Ford», dice el abogado. «El caso ha llevado mucho tiempo pero finalmente logramos que ingresara en el Tribunal Oral de San Martín donde se ha preparado toda la prueba. Sólo queda definir la fecha de comienzo. Eso fue positivo para los trabajadores y el equipo jurídico. Pero eso tam-

bién lleva a lo negativo, porque desde que el expediente entró al TOF no logramos saber quiénes van a ser los jueces que van a integrar el Tribunal para que el juicio se haga. Hay responsabilidades del Consejo de la Magistratura, de Casación y del mismo tribunal, porque hubo jueces que han ido y venido y renunciaron con argumentos que en nuestra opinión no eran aceptables.» Eso genera, dice, «una incertidumbre muy seria entre las víctimas y nos plantean desafíos como saber si la Justicia y este TOF se va a constituir efectivamente para hacer Justicia en un escenario de un gobierno que no está dando señales en particular por las políticas de Memoria, Verdad y Justicia».

David Leiva es querellante en Salta en la causa a Marcos Levín. También destaca la importancia del comienzo del debate aunque adelanta preocupaciones. «Nos preocupó la foto que circuló en los medios cuando Macri se instaló en el Hotel Alejandro I (de Marcos Levín) y el empresario pechó un lugar hasta colocarse a su lado. Nosotros, de todos modos, hemos trabajado y tenemos prueba suficiente en la causa que determina su participación en los hechos que se le imputan y el uso del aparato estatal para perseguir a los trabajadores de la UTA.» El juicio en Salta está todavía en proceso, duró mas de lo esperado, una jueza dejó el puesto y lo mismo sucedió con el abogado de Levín.

Luz Palmas Zaldúa es abogada querellante por el CELS en las causas de lesa humanidad. Señala que el avance en estas causas es un tema prioritario. «En adelante debemos avanzar en la investigación y sanción de los responsables civiles por delitos de lesa humanidad, fundamentalmente los actores económicos. Esperamos la sentencia en la causa que juzga la responsabilidad del dueño de la empresa La Veloz del Norte por la represión sufrida por un delegado gremial durante la dictadura cívico-militar y que finalmente empiece el juicio a los directivos de la empresa Ford, demorado en una jurisdicción, San Martín, que tiene varios juicios con fecha pendiente de inicio. Por otra parte, el Informe Respon-

sabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad: represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado puede tener impacto en las investigaciones en curso y aportar información para abrir nuevas causas. Por último, la labor de la nueva Comisión Bicameral puede contribuir a profundizar esas líneas.»

Liliana Alanis querellante en ESMA de la Asociación Profesionales en Lucha señala: «Estos juicios lentos e incompletos, tienen pendiente además la deuda de atacar a los grupos económicos que organizaron el golpe. Contamos con los dedos los civiles que están siendo juzgados o investigados, se reducen mayormente a los casos de apropiación de menores —las mujeres apropiadoras—, cuando la burguesía nacional fogoneó y participó en el golpe militar».

Un aporte central para las causas de lesa humanidad fueron las políticas de Estado de desclasificación de documentos. La fiscalía ESMA pudo reconstruir las estructuras de la Armada para enmarcar la participación de los pilotos de la muerte, juzgados por primera vez en el juicio que se realiza en este momento. El juicio a los jueces de Mendoza trabaja sobre una prueba de más de 200 expedientes de detenidos desaparecidos que pasaron durante la dictadura de la policía de Mendoza a la justicia federal. Pablo Salinas, del MEDH, es querellante en esa causa. «Los jueces fueron la garantía del funcionamiento del aparato represivo porque cualquier operativo terminaba llegando a manos de ellos a través de esos expedientes que se archivaban en cuestión de días», dijo sobre el valor de esos papeles. «Entiendo que ahora son centrales los alegatos que se realizan en el debate, en febrero comenzaremos nosotros en representación del MEDH.»

La señalización de la Escuelita de Famaillá como centro clandestino de detención y el anuncio del comienzo del juicio por el Operativo Independencia previsto para mayo de 2016 resulta uno de los hechos más importantes para las provincias del norte. «No sólo es importante para Tucumán o Santiago del Estero sino también para Jujuy, Catamarca y Salta», explica Luis Garay, de la Aso-

ciación de ex detenidos de Santiago del Estero. «El juicio por las más de 216 víctimas en el primer tramo y más de 30 imputados abarca una investigación que comienza en 1975 sobre los años de la democracia y que en realidad nunca se terminó. La señalización de la Escuela de Famaillá que fue el primer centro clandestino del país y que estaba totalmente olvidado fue otra de las marcas importantes para este año: por ahí pasaron mas de 2000 personas, 90 por ciento de las cuales están desaparecidas.»

Las condenas por delitos sexuales pasaron de 0 a 15 entre 2010 y 2015. «El avance de estas causas hace dos años era impensable», dice Carolina Varsky de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. «Hoy es factible que ante un pedido, un Tribunal haga lugar a condenas de este tipo.»

Otro emergente del 2015 fueron pedidos de reparación para las víctimas en términos de Memoria y de Verdad. Como sucedió con la fiscalía de Bahía Blanca, la fiscalía ESMA pidió la rectificación de noticias publicadas durante la dictadura por los diarios Clarín, La Nación, Crónica, La Prensa y las revistas Somos, Gente y Para Ti. Los artículos presentaban a las víctimas del terrorismo de Estado bajo la configuración de delincuentes subversivos aportando a la acción psicológica impulsada por el régimen de facto. En esa línea pueden leerse otros pedidos semejantes. Esa misma fiscalía pidió que la Corte declare de Patrimonio Histórico y Cultural el contenido de la causa ESMA, una línea que abre instancias de acceso a la información mas allá del contexto del Juicio. También pidieron que se declare de Patrimonio Cultural e Histórico el Programa de la Escuela va a los Juicios. El dato no es menor: en el marco de la acordada de la Corte que regula y restringe el acceso de los medios de comunicación a la producción de la prueba testimonial de los debates, el Programa funcionó como verdadera puerta de salida de los Juicios a la escena de lo público.

En los primeros meses de 2016 habrá sentencia en el juicio por el Plan Cóndor. Luz Palmas Zaldúa, del CELS, señala el aporte de ese

juicio para el escenario de Justicia en la región. «De dar cauce a las acusaciones planteadas —dice—, se constituiría en la primera sentencia en probar el Cóndor como sistema criminal, como una asociación ilícita. La importancia de este juicio se extiende a la región ya que esperamos que impulse los procesos de Memoria, Verdad y Justicia en los países miembros del Plan, sobre todo en aquellos en donde la investigación y sanción de delitos de lesa humanidad no avanzó lo suficiente o ni siquiera dio sus primeros pasos.»

Entre los retrocesos, los datos de este año marcan una desaceleración en el ritmo de las audiencias de juicios orales. De acuerdo a los datos de la Procuración, el ritmo de sentencias comenzó a descender en 2014 y continuó en 2015. Esto da cuenta de un ritmo a la baja en la celebración de los juicios. Uno de los datos que se analizaron para entender estos números fue la realización de las megacausas: en este momento se hacen siete juicios orales de esas dimensiones con debates más largos y amplios. Sin embargo, sólo 3 de las 7 megacausas en curso tienen demoras con 2 o 3 años de audiencias: La Perla, ESMA y Cóndor.

El último Informe de la Procuración concluye, entonces, que los Tribunales efectivamente tuvieron una postura más laxa, con una baja de audiencias semanales: hay juicios pautados una vez cada 15 días con sólo media jornada de debate.

Este es uno de los principales reclamos de querellantes y Organismos de Derechos Humanos de todo el país. Entre los casos paradigmáticos aparece la jurisdicción de San Martín y el debate por la ESMA Unificada.

«San Martín es el caso mas gráfico», dice Llonto. «Con 13 juicios orales en espera, sólo se hizo 1 en el 2015: el juicio por los hechos en la Comisaría de Villa Ballester que debió haber durado un mes y se extendió durante seis meses. Entre los problemas, está la lentitud de los jueces, pero además hay problemas de integración de los tribunales, fallas en el Consejo de la Magistratura y en la Cámara de Casación.»

Palmas Zaldúa apunta a las dificultades de los tiempos en ESMA Unificada. «Es necesario que se agilicen los tiempos del debate del Juicio ESMA Unificada, que ya lleva más de 3 años, para que antes de concluir el año 2016 tengamos una sentencia. Sería la primera en la que se acredite la existencia de los vuelos de la muerte. Además, esta causa es muy importante para el CELS porque entre las numerosas víctimas por las que aún no hubo condena, se encuentra Mónica Mignone, la hija de Emilio Mignone, fundador del CELS, por el que hasta ahora no hubo ninguna condena.»

De acuerdo a los datos de la Procuración, hay 353 causas en trámite en instrucción o elevadas a juicio oral pero sin fecha de comienzo: 237, es decir, el 67 por ciento está aún en instrucción y 116 fueron elevadas a juicio pero su comienzo no está previsto.

Una de las demandas de los organismos y querellantes es acelerar las causas por la edad de víctimas y victimarios. Una de las herramientas usadas en estos escenarios de crímenes masivos es la acumulación de causas en tramos más numerosos o megacausas. Desde la Procuración, consideran que la tendencia a acumular las causas podría reducir la cifra de trámites pendientes en instrucción. El problema es entender si los criterios que se usaron hasta ahora bastan o hay que imaginar nuevas direcciones. Hasta ahora las causas se acumulan en general por centro clandestino o por imputados, o por fuerzas. «A esta altura del proceso —señalan en la Procuración—, en algunas jurisdicciones quizá haya que empezar a pensar en el aparato represivo local de modo completo y articular a los distintos integrantes de las fuerzas en un mismo debate.»

Un dato en aumento es el número de fallecidos a 40 años de los hechos. De los 2220 imputados en Juicio, 13 por ciento falleció: 60 murieron luego de la sentencia y 239 sin sentencias. Otro dato en esa línea es una preocupación por las domiciliarias. Gómez Alcorta señala como retroceso, el avance de prisiones domiciliarias y excarcelaciones: los juicios orales se están realizando con más imputados excarcelados.

Otro punto del año es la lentitud en la confirmación de las condenas de parte de la Corte Suprema de Justicia: sólo el 24 por ciento de las condenas está firme y el 15 por ciento de las absoluciones. Entre los problemas que eso genera, las querellas apuntan dificultades para concretar las sentencias: si la sentencia a una persona de 60 años incluye el arresto en una cárcel común, el tribunal no formaliza la detención hasta que la Corte la confirme. Lo mismo sucede con las medidas que disponen exoneraciones.

En esa línea, el CELS agrega que la Corte intervino en 102 casos y en todos confirmó la decisión de los tribunales de primera y segunda instancia, ratificando la constitucionalidad de las decisiones judiciales. «Pero los tiempos que atraviesa una sentencia para quedar firme, pasando por Casación y la Corte, son extensos. Como ejemplo podemos mencionar que la sentencia del juicio de ESMA, dictada el 28 de diciembre de 2011, recién quedó firme por la Corte el 12 de mayo de 2015. En el caso de Juan Carlos Falcón, imputado en el juicio de ABO, fue absuelto el 22 de marzo de 2011; la sentencia fue recurrida por algunas querellas —entre ellas el CELS— que presentamos un recurso extraordinario ante la Corte y a casi cinco años, aún está pendiente de resolución.»

Para José Schulman, de la Liga, lo más significativo fue la sentencia del TOF de La Plata que consideró probado en Argentina el genocidio, «tal como lo estipula la Convención pertinente de 1948. En el 2006 —dice—, en el juicio contra Etchecolatz se entendió que los delitos se cometieron 'en el marco de un genocidio', pero la desaparición de Julio López obturó el debate que nunca tuvo razones exclusivamente jurídicas». Si hubo genocidio, dice él, es porque «hubo un bloque social que lo planificó para reorganizar regresivamente a la sociedad. La Liga propone que el 2016 sea el año de los juicios contra el poder económico, convencidos que el único modo de no retroceder es avanzar en ampliar el campo de los acusados».

Liliana Alanis, querellante de ESMA, también destaca este dato: «La victoria conquistada este año fue obtener la primera sentencia por genocidio, conforme lo solicitado por la querella de Justicia Ya! La Plata. En el marco del juicio FuerTar 5, por primera vez se condenó a los genocidas por el delito internacional de genocidio. Esperamos que la misma resolución tome el TOF Nº 1 en la causa ESMA: a las cosas hay que llamarlas por su nombre, en el país hubo un genocidio, los perpetradores son genocidas y así deben ser condenados».

Un eje positivo fueron las políticas emanadas desde el Congreso. La creación de la Comisión Bicameral para investigar responsabilidades civiles. La ley que impide indultar, amnistiar o conmutar penas a los responsables de crímenes de lesa humanidad aprobada por mayoría con la oposición del macrismo. Y el proyecto de declaración que firmaron todos los bloques —incluso Federico Pinedo del PRO—, que declara a los Juicios de lesa humanidad como política de Estado, fueron parte de los logros.

La preocupación central de querellas y organismos es el lugar que asumirá el Ejecutivo con estas políticas. «El impulso a las políticas públicas de sostenimiento, programas, direcciones y articulaciones desde el Ejecutivo Nacional son un pilar fundamental del proceso de juzgamiento», dice Gómez Alcorta. En esa línea, Llonto agrega que «el interrogante político es una preocupación sobre el macrismo porque vemos un Estado seguramente ausente que hoy no da ninguna señal, ni una sola, de apoyar a los Juicios. Esto es preocupante. Es un retroceso a 15 años, a la época de la Alianza en la que algunos de sus integrantes de la UCR hacían mención a la necesidad de Juicio y Castigo pero en los hechos no concretaban nada. Como siempre, nuestra tarea será solicitar, reclamar, ganar la calle, exigir y pensar alternativas legislativas para apurar los Juicios. En esta línea hay que decir que también preocupa mucho el aporte de datos y de documentación que están en manos del Estado a las causas que se llevan adelante por-

que los nuevos secretarios no dan ninguna señal en ese sentido».

La Procuración asumió la coordinación del Sub Grupo de Trabajo sobre Delitos de Lesa Humanidad en el marco de la XIII y XIX Reunión de Ministerios Públicos del Mercosur y Estados Asociados (REMPM). «Como parte de este rol, elaboró una Guía de actuación para los Ministerios Públicos en la investigación penal de casos de violencia sexual perpetrados en el marco de crímenes de lesa humanidad. La Guía fue adoptada por los fiscales y Procuradores Generales del Mercosur, lo cual significa un importante avance en la investigación de estos delitos.» Por otro lado, el área «organizó en el mes de noviembre, junto con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Cancillería, el Coloquio Regional sobre los 40 años del inicio de la Operación Cóndor, donde coordinó un taller de trabajo en el que participaron fiscales de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador y Venezuela con competencia en materia de investigación penal de crímenes contra la humanidad». Durante la reunión, hubo un compromiso para elaborar y compartir una metodología común para el monitoreo del proceso de justicia en cada país, con miras a obtener datos comparables del avance y los obstáculos de los juicios a nivel latinoamericano. •

Capítulo 2
De sueños, rebledías y dignidad

Los Rosariazos

En el '69 aparecieron los grandes despidos en la ciudad industrial. 300 personas se quedaron en la calle por decisión de los dueños de la Empresa Cid. En Celulosa se tomaba la fábrica y en PASA, el sindicato surgido de la propia empresa, comenzaba a radicalizarse, de la mano de socialistas, trotzkistas y peronistas de base.

En mayo del '69, el primer cimbronazo del subsuelo rosarino.

En Corrientes, el asesinato del estudiante Juan José Cabral, despertó la solidaridad en las facultades. Por las calles y por los claustros se escuchaba «Cabral y Pampillón, los mártires del camino de la liberación».

El 17 de mayo, la movilización de estudiantes llegó hasta los edificios del Banco Transatlántico y la Bolsa de Comercio. Allí fueron reprimidos por la policía provincial. En la galería Melipal, las fuerzas policiales asesinan al estudiante de Ciencias Econó-

micas, Adolfo Bello, de 22 años. «Entraron con pistolas y garrotes, parecían enloquecidos. Uno de ellos disparó a quemarropa a la cabeza de Bello», relató uno de los sobrevivientes.

El 21 de mayo se hizo la marcha del silencio. El centro de la ciudad quedó en manos de los manifestantes. Bombas molotov, fogatas, piedras, barricadas. Al querer tomar la emisora LT 8, un grupo de policías los desaloja, asesinando al obrero metalúrgico de quince años, Luis Blanco. Rosario es declarada «zona de emergencia bajo control militar».

Durante cinco horas marchó el cortejo que llevaba los restos de Blanco hasta el cementerio La Piedad.

100 mil personas estuvieron en las calles aquel 23 de mayo.

El niño símbolo

«...Desde dentro mismo de una casita de madera —elevada en la misma zona del drama de la inundación— partió lo que sería el cortejo más multitudinario que registra Rosario en su historia. Manos rudas, pero tiernas de trabajadores de todas las esferas del proletariado, conducían el féretro de un niño símbolo... Luis Norberto Blanco...

«... sobre el féretro, dos coronas de claveles blancos, síntesis de la pureza... Y tras la caja —que encerraba la quietud del ángel abatido— una legión de coronas... blancas, rojas, de suave amarillo... Y presidiendo el cortejo —que iría a cubrir 87 cuadras— una cruz... llevada a manos cambiantes de cinco niños entre los cuales estaba José Potenza, de 15 años...

«A las 11.45 ya con la nave de la iglesia colmada de concurrencia... el rector de la parroquia del Perpetuo Socorro leyó distintos salmos y manifestó la condolencia a los padres, parientes y amigos de este joven que ha perdido la vida en uno de los sucesos más luctuosos, en un momento crucial de Rosario y para el país... Al llegar al portón N° 1 del Ferrocarril Mitre la columna

fue engrosada por una caravana de obreros ferroviarios. En todas las calles se repetían escenas de honda emotividad.

«Córdoba —la gran vía— ofreció el espectáculo más impresionante de todo su recorrido. Todo el vecindario se había volcado a la calle.

«Vehículos de todas las categorías, bicicletas, motos, motonetas, camiones enracimados de juventud obrera, colegiales, jóvenes obreras, formaban una marcha imponente.

«Cada esquina, una pequeña ciudad en el último homenaje al niño inmolado... ofrendas florales en manos de mujeres y niños y una verdadera eclosión obrera... el féretro sobre el cual se encontraba una bandera argentina, gris de tiempo... el clérigo Francisco Parenti dijo una oración fúnebre, que esta sangre vertida, que esta sangre que llegó al cielo no sea en vano... que ella lleve la liberación que todos ansiamos...

«Depositado fue el cuerpo y luego el ingreso de la legión del silencio por las calles que vieron el cortejo más impresionante de que tiene memoria Rosario. Mirar hacia atrás, era contemplar algo que nunca pasó en el largo trajín del cronista...87 cuadras, casi cinco horas de marcha», sostenía la crónica del diario La Tribuna, del 23 de mayo de 1969.

El título de la nota decía: «Más de 100 mil almas en cortejo».

Fenomenal y profunda postal del primer rosariazo, 45 años atrás.

Cien mil personas conmovidas por el asesinato de un chico de quince años.

El segundo rosariazo

Para Héctor Quagliaro, ex secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado y uno de los principales dirigentes de la resistencia peronista desde la CGT de los Argentinos —«nosotros fuimos la primera delegación del interior que se

sumó al conducción de Ongaro»—, «el rosariazo fue un pedazo grande de la historia social. El primero de los rosariazos fue protagonizado por el estudiantado. Hubo lucha popular, teníamos mucha bronca por el asesinato de Bello. Yo vine envuelto en un sobretodo a Rosario, en forma clandestina, junto a Héctor Lescano, el arquitecto Segovia Meyer para la movilización del 21 de mayo. En Maipú y Córdoba hubo una violenta represión».

El segundo rosariazo, «en setiembre lo más homogéneo fue el frente sindical. Allí se notaba por qué Rosario era la capital del peronismo», recalcó el colorado.

El 8 de setiembre de 1969, se declaró un paro por tiempo indeterminado de los trabajadores afiliados a la Unión Ferroviaria. Los estudiantes, en tanto, se preparaban para el tercer aniversario del asesinato de Pampillón. Hacia el 11 de setiembre, se produjeron actos de sabotaje y descarrilamiento de trenes en la zona de Granadero Baigorria, a menos de quince minutos al norte del centro rosarino, y otro en Pergamino, en la provincia de Buenos Aires.

El viernes 12 de setiembre se declara ilegal el paro. La CGT anuncia la huelga general desde el día 16.

«A las 9.30 del martes 16 la epidermis urbana de Rosario no presentaba a la vista de cualquier ocasional visitante ninguna alteración, 30 minutos después la imagen quedaba destruida. Veinte focos insurrectos en los accesos periféricos, seis columnas de obreros y estudiantes en el radio céntrico, en total 10 mil personas —según fuentes policiales— incendiaban en sentido literal y literario la ciudad», describía un cronista de la revista Panorama.

A diferencia de los sucesos de mayo, el rosariazo tuvo en los barrios sus principales escenarios. Cuando la policía rosarina fue rebasada, llegaron, desde Corrientes, dos mil efectivos al mando del entonces coronel Leopoldo Galtieri.

Los diseñadores del cordón industrial se convertirían, en pocos años, en los desaparecedores y los desocupadores, a partir

de la segunda mitad de los años setenta.

Un año después, Agustín Feced era nombrado —por primera vez en su vida—, jefe de la Unidad Regional II de la Policía de Santa Fe, con asiento en Rosario.

Ya era integrante del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército Argentino.

Ya trabajaba para el plan estatal y empresarial que tenía como objetivo aniquilar a las nuevas generaciones de revolucionarios. Ese plan que comenzó a implementarse en 1955 y tuvo en los cursos dictados por los oficiales franceses una de sus primeras manifestaciones.

Fontanarrosa y el recuerdo de aquella ciudad_

A principios del tercer milenio, después de diciembre de 2001, Roberto Fontanarosa, el más rosarino de los argentinos y el más argentino de los rosarinos, nos recibió en su estudio muy cerquita de la Plaza Alberdi.

Le hicimos una entrevista para un programa de televisión de Santa Fe y le preguntamos por su inicio como dibujante de la tapa de la emblemática revista política periodística de Rosario, «Boom», cuando le tocó hacer la portada que anunciaba las crónicas de los Rosariazos.

—¿Cómo era para vos aquella ciudad de 1969? —le preguntamos.

—Es un poco difícil hoy recordar cómo tomaba yo y cómo tomaba la ciudad esa tapa. Lo concreto es que todo ese período de la revista Boom para mí fue muy importante tanto a nivel personal como profesional. Personal porque yo venía de no haber terminado la escuela secundaria, después de haber entrado en publicidades, de hacer un trabajo y hasta te diría una vida muy aislada y muy ajena a lo que ocurría alrededor mío. Entonces, significó encontrarme con un grupo de gente que obviamente

tenía mucha información, que estaba muy pendiente de esa información, que tenía otro grado de compromiso... Rodolfo Vinacua, «el negro» Ielpi, Juan Carlos Martínez, Esvend Segovia, «el gordo» Ceballos, Carlitos Saldi, etc... que produjeron en mí un cambio que me llevó a darme cuenta que no se reducía todo a dibujar, a una página de historieta, a la publicidad o al fútbol. Aquello fue para mí un descubrimiento, considerando los sucesos que se producen después, como el Rosariazo que obligaba a que uno se pusiera al tanto de lo que pasaba, al menos para saber por qué te iban a romper la cabeza por la calle. Por eso, para mí Boom fue desde todo punto de vista fundamental, incluso desde el aspecto técnico, desde el aspecto profesional. Fue como un descubrimiento de todo un entorno y de una profesión íntegramente en un grupo humano que se armó de casualidad pero que a la vista de los acontecimientos y con el tiempo transcurrido creo que hizo una revista que en definitiva quedó como emblemática de Rosario porque no se ha repetido ese fenómeno.

Para mí significó advertir que había una posibilidad de actividad fuera de la publicidad que era un rubro que en principio me había sido ajeno, me gustó y me gusta especialmente en el aspecto creativo porque en la publicidad se trabaja con una enorme cantidad de límites que te los da el producto por la necesidad de mostrarlo, de venderlo... En cambio, todo el aspecto editorial, a pesar de que uno tenía ciertas limitaciones que daba la directiva de la revista, encontré que elevaba mucho el techo de las posibilidades y descubrí que era eso lo que me gustaba. Yo ya había advertido que podía ganarme la vida con el dibujo publicitario, pero esta parte editorial me atrajo y me gustó más.

—¿Qué diferencias encontrás entre aquel dibujante de ayer y esa ciudad del 69, con el presente?

—Con respecto al dibujo, aparecieron muchísimas alternativas de cambio porque de chico quería hacer dibujo de historieta de aventura seria, no de humor, y empiezo a incursionar en el

humor en publicidad, haciendo tarjetas de Navidad o de Fin de año de tinte humorístico, pero no tenía un estilo propio en lo que significaba el dibujo de humor. Tal vez sí para la historieta, porque provenía de la línea de Hugo Pratt y algunos otros, pero en humor no. Leía Patoruzú como leíamos todos, me fijaba en Quino, pero no copié a esos dibujantes... Por eso recuerdo que para los primeros dibujos de la revista «Boom» tuve que improvisar un estilo y le saqué un poco a Garaicoechea, le saqué un poco a Bataglia que dibujaba a Don Pascual en Patoruzú y armé una especie de perfil, que parecía un perfil de alambre, al punto que no lo firmaba Fontanarrosa porque era tan largo el apellido que gráficamente tenía más peso que el dibujo. Firmaba con mis iniciales R.A.F., después empecé a variar y a incorporar más elementos del dibujo para hacerlo un poco más complejo y de más peso, pero fue toda una época de cambios muy rápidos porque fue una investigación ya que no tenía práctica al respecto. Empecé a hacer la práctica sobre la publicación. En lo que refiere a aquella ciudad, uno tenía una relación en la infancia más barrial, a pesar de haber vivido en el centro toda mi infancia y adolescencia, en el edificio Dominicis, de Catamarca y Corrientes, pero aún así no había tantas medidas de seguridad que tomar... se dejaban las puertas abiertas, no se suponía que era una ciudad peligrosa... Después, la cosa se revierte a puntos de tragedia con la dictadura militar, pero la ciudad y el país eran como más pequeños. No estaba la llegada masiva de los medios que nos conectan con todo el mundo, las noticias inmediatas de los sucesos fuera del país. Era todo más acotado o quizás yo vivía dentro de un mundo más acotado que se circunscribía al fútbol, al trabajo, a comprar revistas de historietas, a ir a cines cercanos a mi casa como el Imperial, Empire, Urquiza y todos los que estaban por ahí. La sensación era de una ciudad más pequeña y de un país más pequeño— recordaba el inolvidable Fontanarrosa.

Delia

La vida de Delia Rodríguez Araya es la historia a contramano de aquellos que hicieron de la abogacía una simple carrera de ascenso personal y patrimonial.

Una biografía individual que cuestiona la lejanía del servicio público de justicia en relación a las necesidades de las mayorías.

Una mujer que supo enfrentar los mandatos poderosos de una sociedad machista y prejuiciosa y se hizo de acuerdo a la permanente reafirmación de sus principios.

El nombre de Delia Rodríguez Araya resulta ineludible a la hora de pensar en los recientes juicios contra los crímenes de lesa humanidad cometidos en la zona del Gran Rosario entre 1976 y 1983.

Los jóvenes abogados que hoy acompañan a los sobrevivientes, familiares e hijos de los desaparecidos de estos arrabales del mundo reconocen su compromiso y formación en la inalterable presencia de Delia en cada uno de los militantes que insisten en su necesidad de construir justicia en medio de tanta impunidad y tanto cinismo.

A fines de la primera década del tercer milenio, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, la materia Ética es optativa. Todo una síntesis de los pavorosos vientos individualistas de los años noventa del siglo veinte que todavía se sienten en la vida cotidiana de los argentinos.

Alcanzaría con repasar la vida de mujeres como Delia o de abogados como Juan Carlos Gardella para empezar a suplir semejante agujero en la formación de los nuevos defensores de los hijos e hijas del pueblo.

Pero las historias de Delia o la de Gardella son prácticamente ignoradas en la casa de altos estudios rosarina.

No es casual que se junten estos nombres.

Gardella y Delia fueron echados por la llamada intervención Saráchaga, la decisión de la dictadura del general Juan Car-

los Onganía y su ministro del Interior, Guillermo Borda, de sojuzgar al poder judicial rosarino que había permitido un acto en celebración por los cincuenta años de la reforma universitaria.

Aquella invasión a los tribunales determinó el inicio de una triste dependencia del poder judicial a distintos poderes, ya sea en dictaduras o en democracia.

No hubo muchas declaraciones públicas de parte del Colegio de Abogados de Rosario en torno a la intervención Saráchaga.

Ni tampoco abundaron comentarios, análisis o documentos que pidieran una investigación exhaustiva sobre el increíble robo a los tribunales del 8 de octubre de 1984.

De allí que Gardella y Delia sean referentes de una actitud ética y política que hoy no parece ser moneda corriente entre los profesionales de distintas actividades.

No siempre hay que aceptar resignadamente a los que mandan.

La vida es posible aún por fuera de los lugares habituales de trabajo.

De allí que la existencia de Delia sirva para recrear la historia reciente de los rosarinos y los que habitan el sur de la atribulada y saqueada provincia de Santa Fe.

Delia era una mujer comprometida con su tiempo desde sus convicciones.

Enfrentó con valentía la separación, la renuncia a su cargo en los tribunales provinciales cuando sucedió la intervención Saráchaga, defendió perseguidos y nunca ocultó su pensamiento verdaderamente progresista y profundamente ético.

Fue una mujer atenta a su tiempo.

La historia política la atravesó. Tal como sucede con todos.

Pero a diferencia de muchos, Delia, desde sus propias y profundas convicciones, fue adquiriendo una dimensión política y social que esos hechos reclamaban.

Mantuvo lo individual pero lo puso al servicio de causas colectivas.

Participación política en los años cincuenta a través de la militancia universitaria, cimbronazo intelectual y existencial con la revolución cubana, denuncia y renuncia del sistema judicial rosarino cuando se produjo la intervención de parte de la dictadura de Onganía, compromiso inquebrantable con los presos políticos de principios de los años setenta y durante y después del terrorismo de estado, ejercicio de su cargo de jueza desde esa historia a la que nunca traicionó y frente a la cual jamás quiso permanecer indiferente.

Una abogada atenta, como dicen que son los poetas.

Estaba atenta y siempre lista a sumergirse en algo colectivo aunque los costos de esa decisión fueran muy altos en términos individuales.

Voces

Inés Cozzi

«Nuestros más antiguos nos enseñaron que la celebración de la memoria es también una celebración del mañana. Ellos nos dijeron que la memoria no es un voltear la cara y el corazón al pasado, no es un recuerdo estéril que habla de risas o de lágrimas. La memoria, nos dijeron, es una de las siete guías que el corazón humano tiene para andar sus pasos. Las otras seis son la verdad, la vergüenza, la consecuencia, la honestidad, el respeto a uno mismo y al otro, y el amor.»

Subcomandante Marcos

Hablar de Delia, resulta fácil y difícil al mismo tiempo. Fácil es hablar de Delia como abogada consecuente y militante de los derechos humanos, sobre su entrega desinteresada, su ética, su calidez humana, pero tal vez lo que resulta más difícil es sintetizar en palabras lo qué significó su vida y la huella indeleble que nos dejó a todos los que de una u otra manera nos relacionamos

con ella. Porque Delia poseía las siete guías de la que habla el subcomandante Marcos.

Antes de conocer personalmente a Delia Rodríguez Araya, yo había oído hablar elogiosamente de ella a varios compañeros de la Facultad de Derecho como una profesional que se ocupaba desinteresadamente de la defensa de los presos políticos. Corría la década del '70, y eran las épocas difíciles que precedieron al golpe. Yo militaba en la JS del Partido Socialista de los Trabajadores y estudiaba derecho (en ese orden). Vivía en San Lorenzo, donde daba clases particulares para costear mis estudios y viajaba todos los días a Rosario. Conocía muy bien lo que estaba pasando en el cordón Industrial norte. Los esbirros de la triple A habían secuestrado y asesinado a un vecino de toda la vida y compañero de juegos Roberto De Grandis , un poco más chico que yo y como diría mi hijo «más bueno que el pan». Era el hijo mayor (tenía un hermano menor discapacitado) de una pareja de inmigrantes italianos y su muerte destruyó a la familia y empujó a su madre a la locura.

Y reitero, ya en esa época el nombre de Delia merecía admiración y respeto. Pero fue bastante tiempo después, en las cercanías de la democracia, cuando me acerqué con otros jóvenes a los Organismos de Derechos Humanos, más concretamente la APDH y Familiares que funcionaban en conjunto en la calle Corrientes. Cuando la conocí estaba sentada al lado de otra mujer, las dos muy elegantes y de una belleza singular: una era Delia y la otra Olga Cabrera Hansen, también abogada, ex presa política y cuya historia merecería escribir otro libro.

Y ahí se desarrolló todo el trabajo de reconstrucción de la memoria, organizado y coordinado por Delia. Ella era incansable, siempre estaba disponible, acompañando al equipo en todo momento. Se iban tomando los testimonios, a los familiares y a las víctimas que habían estado prisioneros en las mazmorras de la dictadura, se recolectaban pruebas, se formaban los legajos, se

relacionaban datos y al mismo tiempo se sostenía y acompañaba el dolor de las personas. Esos testimonios eran como piezas fraccionadas que permitían armar el rompecabezas del terror en Rosario e ir individualizando uno a uno a los responsables de ese genocidio. Y ese trabajo era todo a pulmón, no había computadoras ni archivos informáticos que permitieran entrecruzamiento de datos (los testimonios se tomaban en una máquina de escribir bastante usada , original y cuatro copias con carbónico: sí, el viejo y querido carbónico). Oh! no! Era un trabajo de hormiga de todos los compañeros escribiendo, leyendo, cotejando, analizando, y allí estaba Delia, con su mirada aguda, dando consejos, organizando, armando las presentaciones judiciales. Recuerdo que nos decía cuando surgía alguna duda sobre hechos que había que relacionar: «Preguntenlé al gringo (se refería al gringo Aloisio), que es la computadora del subdesarrollo...»

Y todo ese trabajo fue entregado después a la Conadep, y sirvió de base fundamental al Juicio a las juntas, así como al armado de la causa Feced, y a las otras causas hoy en trámite que no podría darse sin ese trabajo de investigación que había coordinado y organizado Delia.

Recuerdo de ese equipo a Adriana Acosta, Cristina Bernengo, Graciela Diez, Ana Moro, Alicia Lesgart, el gringo Aloisio y tantos otros. Fueron momentos duros, pero llenos de fuerza y esperanza. Sentíamos que había que continuar la lucha de nuestros compañeros muertos y desparecidos, y desde nuestras diferentes posiciones ideológicas le dedicamos todo nuestro esfuerzo.

También pusimos todo nuestro esfuerzo en acompañar la formación de Madres de Plaza de Mayo en Rosario, a la que Delia también acompañó y potenció, ya que estaba muy unida afectivamente a las Madres de Rosario, sobre todo con Darwinia. (Ésta siempre decía que Delia era como su hermana).

Cuando fue designada Camarista en Comodoro Rivadavia, sentí alegría por ella, pero una profunda tristeza. Recuerdo estar

con ella y sus dos hijas Micaela y Mariana en su estudio de la calle Sarmiento. Ella estaba por irse y revisaba algunos papeles y comentábamos distintas cosas, pero yo sentía un profundo vacío, porque con su alejamiento sabía que los Organismos de Derechos Humanos estábamos perdiendo a un ser extraordinario, y que el trabajo no iba a ser el mismo.

Por eso, cuando escuché las sentencias de cadena perpetua a los asesinos de la Quinta de Funes y Fabrica Militar, inmediatamente me acordé de Delia y de que sin saberlo con esa sentencia se le estaba rindiendo un homenaje. Para quienes somos agnósticos o ateos, es muy difícil hablar de quienes ya no están, pero lo que sí puedo afirmar es que Delia Rodríguez Araya era de esas personas a quien Bertolt Brecht califica de imprescindibles...

Camila Schwarzstein, *nieta*.

¿Cómo era mi abuela? La verdad es muy complicado responder a eso, literalmente era rara, era de esas abuelas, bah, de esas mujeres, que no hay. Delia era hermosa, de carácter fuerte, graciosa hasta en los peores momentos, luchadora, orgullosa, comprensiva, solidaria, protectora y sensata

Casi todos los días al salir del colegio, iba a la casa de mi abuela. Allí tuve el privilegio de que ella, Darwinia (su querida amiga que a veces estaba) y Ana María (a la cual le debemos tanto), me relataran muchas historias. Me contaban de los desaparecidos, de los nietos, de sus abuelas, de cómo trabajaba, de Cuba, de sus tatarabuelos españoles que llegaron a la Argentina sin un centavo. Todas las historias que ella con su voz bajita lograba contarme me apasionaban mucho. Lo que ellas me contaban luego lo aplicaba en el colegio y me daba cuenta de que no todos tenían la suerte de SABER.

Siempre agradecí mucho que me tocara Delita como abuela. Mi abuela me deja un legado (no es una simple casualidad que desde el día en el que me dijeron que mi abuela iba a morir

siempre que me preguntan que quiero ser cuando sea grande mi respuesta sea «abogada, ecologista o de derechos humanos»). El legado que ella nos deja a todos es que siempre hay que luchar por la verdad y la justicia, cueste lo que cueste. Para ella esto significó durante la última dictadura, dejar de lado su vida personal, amorosa, afectiva, laboral y económica.

Mi abuelita era bajita, rubia, de ojos grandes y azules, rodete y zuecos. Una mujer hermosa e inteligente que podría haber ganado mucho con eso, pero sin embargo cuando le tocó elegir entre lo bueno y lo malo siempre eligió lo primero.

Cuando ella estaba en el hospital, y me dijeron que no se iba a recuperar me preguntaron si quería despedirme de ella. Yo dije que sí, sentía que si no lo hacía iba a quedar algo inconcluso. Fui, ella estaba con oxígeno, dormida. Entre lágrimas le dije: «Abuela te quiero mucho, nunca te voy a olvidar.» Espero que eso se cumpla y mi abuela siga estando conmigo siempre.

Ella era como un libro que estaba lleno de historias que contar y que parecía que nunca iba a dejar de tenerlas, hasta que una vez, ese libro se terminó y con él, se fue mi abuela que de un día para el otro, se apagó y dejó de respirar. •

Angelelli, Devoto y Brasca

«Con un oído en el pueblo y otro en el Evangelio», dijo y practicó de forma cotidiana el obispo de La Rioja, Enrique Angelelli. El 4 de agosto pasado se cumplieron 39 años de su asesinato en una ruta de las tierras defendidas por las montoneras de Facundo y el Chacho. Tenía solamente 53 años. El Pelado tenía una mirada crítica del último peronismo de los años setenta, al igual que otros dos obispos, Alberto Devoto, de Goya, Corrientes; y Antonio Brasca, de Rafaela, provincia de Santa Fe.

Devoto, referente de la lucha de los campesinos contra la explotación terrateniente, y Brasca, organizador de barrios, consejero de delegados de base y denunciante de cualquier tipo de discriminación y abuso; murieron antes de tiempo.

El correntino en otro extraño accidente de ruta, el 28 de julio de 1984 y el santafesino, cosido por el cáncer, el 26 de junio de 1976.

A la muerte de Perón, producida el primero de julio de 1974, Angelelli, Devoto y Brasca emitieron un documento que cuestionaba el giro hacia la derecha de aquella administración nacional y llamaban a un verdadero protagonismo popular.

Aquellas prácticas sacerdotales que iban a fondo contra los mercaderes que habían usurpado el templo de la vida colectiva y enfrentaban a los crucificadores cotidianos, los dueños de casi todas las cosas, merecen ser recordadas en estos días.

Por eso es necesario leer aquel documento de tres notables obispos que tuvo la Argentina en tiempos nada sencillos.

Nuestros pueblos de La Rioja, Goya y Rafaela.

En diversas ocasiones cada uno de nosotros hemos escrito a los cristianos de nuestras respectivas iglesias locales. Hoy queremos hacerlo en forma conjunta, como expresión de comunión intereclesial,

dirgiéndonos a nuestros pueblos de La Rioja, Goya y Rafaela.

Fieles al Concilio y al Magisterio de la Iglesia en Latinoamérica y en Argentina, claramente expuesto en Medellín y San Miguel, que nos guía, orienta e impulsa a la acción, queremos ser solidarios con nuestro pueblo y comprometernos, cada vez más, con él en su proceso histórico, entendiendo que este debe manifestarse hoy con nuestro aporte concreto en el momento actual.

Es misión de la Iglesia asumir la conciencia del pueblo e interpretarla, escuchándolo, captándolo y entendiendo sus expresiones, «porque la Iglesia es la conciencia del mundo». Sólo así podremos unir nuestro aporte al suyo para que pueda expresarse y organizarse, para que sea él, el auténtico protagonista de su destino histórico.

Después de largos años nuestro pueblo ha podido expresarse y ha hecho una opción que es profunda y va más allá de los límites de los partidos políticos. Ha optado por una concepción de vida, un estilo de vida, un núcleo de valores hecho carne en su tradición auténtica y en su historia.

El pueblo argentino ha optado por un camino que le es propio. Ha optado por una concepción liberadora de la vida, que tiene como raíz los valores encarnados en su propio ser. No optó ni por el sistema liberal que hasta ahora lo ha oprimido, ni por la rigidez dogmática de un régimen marxista. Quiere construir su propia vida social, política, cultural y económica abierta al tiempo y a la historia, sobre la base de la justicia, la libertad y la soberanía.

Con conciencia y profunda intuición ha elegido a quienes hoy deben ser los intérpretes fieles de su propio ser.

Ahora bien, para asegurar la continuidad de este proceso ya iniciado, es necesaria una plena fidelidad a todo aquello que constituye la verdadera liberación de todo hombre y de todos los hombres, sin excepción.

Esto no se logrará:

1. Si todos nosotros, como pueblo, no asumimos un real pa-

pel de protagonistas de este proceso de reconstrucción;

2. Si como pueblo no nos mantenemos fieles a nuestros propios movimientos de base, para lograr que se realicen nuestras legítimas aspiraciones y expectativas;

3. Si no estamos dispuestos —con una entrega generosa y sin cuestionamientos estériles— a compartir juntos los inevitables sacrificios y exigencias que lleva consigo todo proceso liberador,

4. Si los que tienen la responsabilidad de servir al pueblo en una tarea de conducción no están dotados de honestidad, de sensibilidad humana, de capacidad para interpretar las expresiones e intuiciones del pueblo, y si no se esfuerzan constantemente por tener una visión clara de los objetivos de la revolución social en nuestro contexto argentino;

5. Si nosotros como cristianos no asumimos con coraje y esperanza las exigencias de nuestra fe en este proceso de liberación.

Lo que implica:

• un serio y real compromiso con los sectores más pobres y marginados —campesinos, changarines, hacheros, peones, obreros— exigiendo el reconocimiento de su derecho a ser incorporados al quehacer nacional y a participar organizadamente en las decisiones a nivel local, regional y nacional;

• vivir en plenitud los valores del Evangelio —justicia, fraternidad, igualdad, entrega de si mismo— y a la vez abierta a todos los valores manifestados en todo hombre de corazón recto;

• mantener un espíritu de crítica constructiva, tendiente a evitar que el proceso de liberación se desvirtúe y se convierta en opresor del hombre.

Que el Espíritu del Señor nos de a todos su Fuerza, para que seamos capaces de hacer todo esto.

Enrique Angelelli
Obispo de La Rioja

Alberto Devoto
Obispo de Goya

Antonio Brasca.
Obispo de Rafaela •

Maestros que molestaban

«Las escuelas son la democracia... Necesitamos hacer de toda la República una escuela», dijo Sarmiento antes de hacerse cargo de la presidencia de la Nación, en agosto de 1868.

Tal vez por eso de que las escuelas son la democracia, el terrorismo de estado mató y desapareció a 606 maestros.

Y la República no fue una escuela, sino un pizarrón negro y mudo.

«En la noche del 24 de marzo de 1976, un maestro caía asesinado en Tucumán. Por el Operativo Independencia, el general Antonio Domingo Bussi, tenía entonces a su mando todas las tropas militares y policiales de la provincia. Un grupo policial militar recibió la orden de asaltar el local del gremio de los educadores, donde vivía Isauro Arancibia, fundador de CTERA.

Cuando Isauro concurrió al sepelio del secretario general de la FOTIA, Atilio Santillán, recién asesinado, le dijeron al oído «maestro, mañana es el golpe, no vuelva al gremio porque lo matan». Tal vez supo allí mismo que él volvería precisamente a su lugar. Que nadie tenía el derecho a derrumbar las puertas de la casa de los maestros. Esperó a los golpistas con dos escopetas de caza en una piecita. Debían ser como las cuatro de la mañana cuando se llevó a un asesino a otro mundo y él cayó con cien balazos en el cuerpo.

No era propietario más que de unos cuantos discos de pasta, un tiralíneas y algo de ropa.

Pero sus hermanas acababan de regalarle un par de zapatos marca Delgado por haber cumplido cincuenta años. Los zapatos no figuraban en el acta policial levantada después del crimen.

En la cuenta suiza del general Bussi, recién hallada y denunciada internacionalmente, y que la cancillería argentina trató de esconder hasta el final, está el par de zapatos. La hora ha llegado. Bussi deberá ser sometido a juicio por delito común (después de haberse salvado por el punto final).

Deberá decir por qué mintió en la declaración jurada de bienes ante la Cámara de Diputados de la Nación, pero también «en cuál de los ceros de la cuenta suiza está el par de zapatos del maestro asesinado», escribió el periodista, historiador y docente tucumano Eduardo Rosenzvaig.

Elvira Márquez era miembro de la comisión directiva del SINTER, profesora de historia, trabajaba como bibliotecaria en la escuela Carrasco y como docente en la escuela número 100 de Granadero Baigorria. Está desaparecida desde julio de 1976. Una mañana, a fines de mayo de ese año, las fuerzas represivas rodearon la escuela Carrasco, en el barrio Alberdi, irrumpieron en ella fuertemente armados, a los gritos. Rompieron a patadas la puerta de la vivienda del portero Ángel, lo sacaron y se lo llevaron detenido.

Al rato llegaron los chicos y muchos padres enterados de lo ocurrido, se los llevaron de vuelta a sus casas, por miedo a que les pasara algo.

Desde ese día Elvira no se presentó más a trabajar. Ángel, que sufrió varios años de prisión contó que «Elvira era una persona extraordinaria, muy dulce, muy querida por los maestros y por los chicos y de una gran firmeza ideológica».

Una compañera recordó: «Debatía con nosotras, era una gran luchadora, muy activa, pintaba las pancartas para concurrir a las marchas. En esa época estábamos organizadas gremialmente».

Eran años de grandes movilizaciones gremiales y estudiantiles. Elvira, como conducción del gremio docente, tenía estrecha relación con los sindicatos obreros del cordón industrial del norte de Rosario, con un intercambio permanente de ideas con sus dirigentes.

Creía que era necesario unificar el sindicato docente con el de los porteros. Consideraba que todos eran trabajadores de la educación y que, en épocas de conflicto, se perdía fuerza, siendo la escuela una unidad, al parar sólo un sector de sus trabajadores.

Elvira pudo escapar de la Triple A y su familia, preocupada, trató de convencerla para que dejara de militar y le propusieron esconderla en la isla, a lo que ella se negó. Creía que su lugar estaba en la lucha cotidiana al lado de sus compañeros. Así rechazó la posibilidad de una salvación individual. Su mamá Norma cree que fue secuestrada entre julio y agosto de 1976.

Ana María Gutiérrez nació el 14 de agosto de 1952. Era maestra, estudiante de odontología, hermana y compañera. En 1977 se vio forzada a dejar su trabajo de maestra en el barrio Casiano Casas. Seis meses después, la llevaron mientras caminaba por la calle. Luego el consabido comunicado de las Fuerzas Armadas daba cuenta del enfrentamiento armado en el que la habrían asesinado. En realidad era la mesa de torturas.

Encontraron su cuerpo en «la Mandarina», aquella de su querida compañera Evita, la del barrio Saladillo en Rosario.

En noviembre de 1999, los compañeros de la facultad levantaron su nombre y su recuerdo.

Raúl García era estudiante de antropología, alfabetizador de adultos siguiendo las enseñanzas de Paulo Freire y miembro de la comisión directiva del sindicato. Participó en la comisión redactora que elaboró los principios de CTERA, en Huerta Grande. Había conformado desde allí un grupo de estudios que con gran calidad ideológica llegó a la conclusión de la necesidad de los trabajos barriales para unir al docente con la comunidad educativa, teniendo como base una escuela abierta y participativa. Se hacían en cada barrio asambleas multitudinarias donde se discutían los problemas escolares y barriales con la participación de los vecinos, representantes de las iglesias, entidades gremiales...

Trabajó como docente en la Dirección de Alfabetizadores en la escuela de Pueblo Nuevo donde incentivó especialmente la puesta en práctica de esta concepción educativa.

«Berlín, 7 de julio de 1969. Querida Silvia, esta mañana, al levantarme e ir al baño a lavarme, mirándome en el espejo me apliqué unos bifes, no muy violentos, por supuesto... vos en París y yo en Berlín. No es posible. Flaca, esto es imposible. Realmente quería despertarme... ¡¡¡qué se yo!!!... Salimos de Ezeiza el sábado último, María Celia, Juan Carlos and me (ya estoy loco con los idiomas)... el despegue, en el jet alguna lágrima. Junto a la ventanilla: un cuadro agridulce en el aeropuerto, Ana, Chachi, Tom, Eduardo, Ester, mami y papi, una serie de tipos amigos de María Celia metían un ruido bárbaro con unas banderas desplegadas... fue agridulce, realmente. Luego la partida, el cuadro que se achica, las nubes, un paraíso de algodón. Después Río, la bahía de Guanabara, dos horas cantando con un brasileño de una fabela... Ahora estoy viviendo con algunos turcos (uno escribiendo a mi lado), jamaiqueños, nicaragüenses, rumanos, una chilena, alemanes, un boliviano, uno de Costa Rica, ¡ah!...y también una india encantadora con sus atuendos típicos. Flaca, esto para mi, que jugaba con los vagos del barrio al béisbol en la calle... Todavía no conozco Berlín pero voy a estar aquí tres meses. Me gustaría que te pegaras un viajecito pronto, así nos vemos... Rejuntate algo y venite, aunque más no sea unos días porque yo voy a tardar bastante en ir para allá: tengo tres meses de trabajo bastante duros en el geriátrico... Bueno, te espero lo más pronto posible, aquí. Un abrazo grandote: tu hermano Raúl».

La carta desde Berlín, Raúl la escribió a los 22 años. Allí comenzó a gestionar un subsidio de una organización alemana para Latinoamérica. Pasado un tiempo y con ese dinero construyó a pulmón una casilla en Pérez que luego se transformó en la escuela más grande de la provincia de Santa Fe, la escuela de Cabín 9. Raúl es el fundador, la casilla aún se conserva. Antes de su viaje a Alemania trabajaba desde los 19 años como maestro en un centro de alfabetización para adultos que funcionaba en

la escuela primaria que está en la plaza de Pérez. Al volver de Alemania estuvo por Chile y Perú...

Con ese mismo espíritu, organizó con los vecinos y la Asociación Barrial de Cabín 9, en Pérez, la creación de un centro cultural. Construyeron el local en el que se desarrollaron esas actividades y en el que funcionó la escuela que finalmente fue habilitada como tal.

Fue asesinado por las fuerzas represivas el 15 de diciembre de 1976, escapando del bar Piggalle, de José Ingenieros y Alberdi, donde se encontraba con la maestra de lenguas vivas, Nora Larrosa.

Sus restos están en el cementerio de Granadero Baigorria. La noticia salió en La Capital el 17 de diciembre de 1976, en primera plana. Dice enfrentamiento. No fue así. Lo acribillaron a menos de un metro de distancia un grupo de civil.

«Hace más de veinticinco años que intento sepultar a Raúl y hasta ahora no lo he logrado... y tal vez no lo logre nunca. La falta de justicia, la impunidad, el agravio que rodearon su muerte, me lo impiden. Como Antígona, aún no cumplí todos los deberes de la piedad familiar», escribió Silvia García, la hermana de Raúl.

«Son necesarios los relatos cargados de sueños, de miedo y de esperanza, son los únicos relatos de verdad humanos. Ya se encargarán, quienes nos siguen, de construir con esos retazos de dolor genuino y de alegrías consistentes la historia que hace falta para apoyar la civilización», decía Silvia.

Es la historia que todos los días, porfiada y obstinadamente, escriben los maestros en estos arrabales del mundo. •

La guerra de monseñor Iriarte

Recién en el año 2006 comenzaron a hacerse públicos los papeles del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto que revelan el seguimiento al que fueron sometidos algunos obispos de la provincia de Santa Fe, entre ellos Vicente Faustino Zazpe y Juan José Iriarte, de la ciudad capital y Reconquista, respectivamente. Los papeles corresponden a la entonces denominada Dirección Nacional de Culto e informan sobre las «actividades del sacerdote Rafael Yacuzzi en Roma con sectores políticos italianos de extrema izquierda» y «la no asistencia de sacerdotes a los actos celebratorios de la fecha patria realizados en la localidad de Villa Ocampo por haber sido llamados por monseñor Iriarte a una reunión en Reconquista». El responsable de los informes era el entonces teniente coronel José Luis Picciuolo que ostentaba el cargo de «director general de culto».

Un hasta ahora desconocido oficial que bien podría aclarar varios sucesos ocurridos no solamente en la provincia de Santa Fe, sino también en el país, como los crímenes de Enrique Angelelli, los padres palotinos y Carlos Ponce de León, entre otras cuestiones. Y, por otra parte, estos papeles que por primera vez aparecen en un medio de comunicación, hablan de la dignidad de un obispo silenciado por sus propios pares, Juan José Iriarte. El cura que le declaró la «guerra» a la dictadura...

Los sacerdotes ausentes

El vicealmirante retirado, Jorge Desimoni, a la sazón gobernador de Santa Fe, recibió una carta del ingeniero Guillermo Vilaseca, por entonces subsecretario de industria de la provincia.

El hombre estaba indignado. El 25 de mayo de 1977 debió hacerse el acto oficial en la norteña ciudad de Villa Ocampo. Pero no hubo ni un solo sacerdote.

«En la iglesia, con concurrencia de escuelas con sus abanderados bordeando el altar, y totalmente colmada, un laico dirigió la entonación del himnos religiosos pues no existía sacerdote para oficiar misa, ya que según se me informó, todos los sacerdotes de las localidades del norte habían sido llamados por monseñor Iriarte a una reunión en Reconquista», explicó el ofendido funcionario.

Vilaseca quería explicaciones sobre la huelga de curas.

No se sabe qué contestó Desimoni. Pero a fojas siguientes se encuentra un papel con el sello «reservado» en donde se puede leer que aquel 25 de mayo el único sacerdote que estaba a disposición de las fuerzas «vivas» era el capellán castrense de la Base Aérea Militar de Reconquista.

Iriarte aprovechó el feriado para reunirse con sus sacerdotes en el colegio «Nuestra Señora de Lourdes», ubicado en la ciudad de Avellaneda, y desarrollar una «pastoral de conjunto».

En aquel documento se decía que «de la conversación mantenida con el obispo... no se encuentra en una posición negativa hacia las FFAA».

Desde el Ministerio de Gobierno de Santa Fe, sin embargo, siguieron buscando razones para la huelga. El 15 de junio remitieron una carta al general Albano Harguindeguy, ministro del interior de la dictadura.

«La actitud asumida por el obispo de la diócesis de Reconquista resulta clara y definida, pues la convocatoria a una reunión con la asistencia de la totalidad de los sacerdotes de su jurisdicción en un día en que la Iglesia debe prestar su adhesión y con conocimiento previo de la realización de actos religiosos incluidos en la programación de los festejos, fue sin lugar a dudas, retacear su presencia y por ende, su participación en las efemérides patrias», se apuntaba.

Agregaban que «es dable destacar la influencia que ejerce sobre el obispo, el cura párroco, enrolado en el Movimiento del Tercer Mundo, Armando Yacuzzi, primo del subversivo Rafael

Yacuzzi (detenido en la localidad de Villa Ana el año pasado) quien se desempeña como secretario del obispado y cuya conducción en la marcha de la diócesis es relevante», delataba el desconocido escriba de la cartera política santafesina. El papel tiene un sello que dice «estrictamente secreto y confidencial».

La guerra de Iriarte

A continuación seguía un informe elaborado por el servicio de inteligencia de la Unidad Regional IX de la policía de la provincia, del 3 de junio de aquel año 1977.

Las conclusiones son impactantes: «Que el señor obispo, Juan José Iriarte, ha iniciado lo que puede llamarse «guerra fría» hacia las Fuerzas Armadas o para ser más concreto hacia la Base Aérea Militar Reconquista» y «se denota una clara ruptura de las relaciones militares-religiosas, sin entrar al choque violento en lo que respecta la jurisdicción».

Apuntan que «el señor obispo con la actitud asumida fija su posición (sin lugar a dudas, contraria al gobierno actual), se basa lo expuesto en que no lo hizo en otro anterior, pese a que hace quince años que se radica en ésta, demostrando claramente que se ha inclinado a la oposición».

Y a la hora de pensar la «probable evolución» del conflicto, el jefe de operaciones especiales de la división inteligencia de la UR IX sostiene en una acabada demostración de sagacidad que «las relaciones militares-religiosas continuarán enfriándose» y que «resta esperar si todos los sacerdotes seguirán al obispo en su actitud (completamente fuera de lugar en los momentos actuales)», afirmaba el oficial de La Santafesina S.A.

La persecución contra Yacuzzi

Iriarte no tuvo paz durante todo el ´77.

El teniente coronel José Picciuolo, Director General de Culto, le remitió una carta el 6 de diciembre de aquel año. «Como Vuestra Excelencia Reverendísima conoce, desbaratado el proceso subversivo, sus ideólogos y dirigentes de choque, abandonaron nuestro país para reagruparse en diferentes centros en el extranjero», comenzaba diciendo la carta.

«La idea consecuente es la de abrir un nuevo frente de batalla, ahora desde el exterior, tratando por todos los medios de desfigurar la imagen argentina», sostenía en clara sintonía con la argumentación de la dictadura a pocos meses de la realización del Mundial de fútbol en la Argentina.

«Días pasados una delegación de montoneros procedentes de París llega a Roma con el objeto de mantener contacto con sectores políticos italianos de extrema izquierda. En la conferencia de prensa que brindaron el 22 de noviembre próximo pasado participa integrando esa delegación, Rafael Yacuzzi, sacerdote que puesto a disposición del PEN, por decreto número 427 del 14 de mayo de 1976, fuera autorizado a salir del país con destino a Italia (27/5/1977).

«En la inteligencia de que el citado sacerdote se desempeñaba en jurisdicción de vuestra excelencia reverendísima, es que me permito solicitarle la siguiente información: si aún permanece incardinado a esa diócesis y en su caso, cuál es su situación canónica en la actualidad», exigía el teniente coronel.

Iriarte no contestó la carta.

Desde la Dirección General de Cultos, en tanto, siguieron persiguiendo a los obispos y sacerdotes que se oponían al terrorismo de estado.

Tres décadas después, desde el seno mismo de la Conferencia Episcopal Argentina o desde las cúpulas de las diócesis y arquidiócesis santafesinas, todavía no se ha hecho un documento

que hable con nombres y apellidos de los sucesos, dignidades y complicidades acontecidos en aquellos años.

Por ahora, los documentos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto que comienzan a circular ya están diciendo de la dignidad de obispos hasta hoy desconocidos como monseñor Iriarte. •

Viaje al paralelo 28

«En el norte santafesino, donde crecen los palmares, allí se encuentra un pueblito que se llama Los Amores. Dicen que no era un jardín ni tus mujeres son flores: para mi sos lo más lindo, pueblito de Los Amores», son los versos que se repiten en cada convocatoria popular muy cerca del paralelo 28, límite entre las provincias de Santa Fe y Chaco.

Desde la escuela secundaria 560 aún sin nombre, impulsaron las «jornadas por la memoria y la militancia» y en 2008 lograron que la plaza del pueblo llevara el nombre del maestro Alberto «el Indio» Galarza, uno de los 30 mil militantes revolucionarios desaparecidos. Hijo de un obrero de La Forestal, Alberto nació en Tartagal, también en la geografía del departamento más grande de Santa Fe, Vera. Se recibió de maestro normal en 1968, cuando tenía solamente 19 años. Estudió Psicología en Rosario y de regreso al norte, ya militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores, comienza a enfrentarse con las burocracias sindicales de diferentes organizaciones.

«En 1974 su rumbo lo lleva hacia Los Amores para dar clases en la escuela primaria. Sus compañeros de trabajo lo recuerdan por su perfil bajo en la relación con ellos, silencioso y refugiado en el aula, usando siempre un poncho rojo para enfrentar el frío. Fiel a su estilo, se relaciona con peones de estancia estimulando el espíritu de la organización. Con dos agrupaciones, Los toros orejanos y Los pueblos Olvidados viajaron a Rosario a participar el VI congreso del Frente Antimperialista y por el Socialismo en el club Tiro Federal… allí en ese marco festivo de 25 mil personas el Indio ingresa al estadio con su peonada vestida en ropa tradicional», cuentan las memorias que circulan en la escuela de Los Amores.

El pueblo de Los Amores, capital del olvido, del tordo y la nutria, inundado en un 90 por ciento y con una calle transitable, solicita a las autoridades correspondientes una inmediata solución al problema de la inundación, construyendo para ello un puente sobre la ruta 3 que permita a las aguas seguir su curso natural hacia el arroyo Los Amores y por esa vía al Paraná... entre los otros anhelos de la comunidad de Los Amores se destacan los siguientes: la instalación de agua potable en la escuela número 46 cuyos trámites pertinentes ya encaró la comisión de ex alumnos, la instalación de una escuela albergue que permitirá la educación de los hijos de peones rurales, cosecheros y peones golondrinas, iniciativa ésta que es llevada adelante por los maestros de la localidad— escribía la Asociación de los Pueblos Olvidados el 26 de julio de 1974.

Cuarenta y dos años después, el nombre de Alberto Galarza desde la plaza de Los Amores sigue exigiendo lo mismo.

En 1995, por ejemplo, Carlos Reutemann, entonces gobernador y hoy senador nacional apoyando a Mauricio Macri, prometió hacer una escuela secundaria nueva en un mes. Dos décadas después las pibas y los pibes, las maestras y los profesores, ruegan al Gauchito Gil y otras tantas entidades que los techos de las viejas casonas del ferrocarril levantadas a principios del siglo veinte no se les caigan encima mientras usan un solo baño y se las arreglan para prender los equipos de la FM Andares cuando hay tensión eléctrica. En esa escuela secundaria donde el agua potable aparece en bidones que generan furor en esas chicas y esos chicos que no conocen el sabor del agua potable porque los 32 años de democracia todavía no le trajeron ese lujo.

Para la directora de la escuela secundaria de Los Amores, Elizabeth Maidana, hay una relación directa entre la muerte por peritonitis de su querido ex alumno Ovidio Fernández, ocurrida el 27 de febrero de 2014, y la lucha que llevaba adelante el maes-

tro Galarza denunciando la situación de los pueblos olvidados.

En viaje hacia el paralelo 28, la existencia de las pibas y los pibes demuestra la insoportable levedad de la democracia permitida. •

Fuentes: Entrevistas del autor, material de la escuela secundaria de Los Amores.

Capítulo 3
El caso Larrabure y la construcción de la necesidad del golpe

El Caso Larrabure, el asesinato que no fue

El 23 de agosto de 2015 se cumplieron cuarenta años del descubrimiento del cuerpo del entonces mayor del Ejército, Argentino del Valle Larrabure, en un barrio de la periferia rosarina.

Las fuerzas armadas, parte de la justicia federal y grandes medios de comunicación impusieron la idea de que el oficial había sido torturado y luego asesinado por el Ejército Revolucionario del Pueblo.

Fue la mentira más aberrante de la historia contemporánea.

Sobre ella creció la justificación del terrorismo de estado.

El expediente original de la causa dice con absoluta claridad que no hubo tortura ni asesinato.

Ese indispensable documento de obvio interés público descansa en la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario.

En caso de no hacer público este expediente, los integrantes de este órgano judicial estarían muy cerca del delito de ocultar

información de nítido interés colectivo al pueblo argentino.

He aquí, por primera vez, un resumen de algunos fragmentos de aquel expediente que demuestran que no se trató de un asesinato.

Los hechos

El 10 de julio de 1974, el Ejército Revolucionario del Pueblo produjo la toma de la Fábrica Militar de Villa María, en la provincia de Córdoba. Allí fue apresado el subdirector del establecimiento, mayor Argentino del Valle Larrabure. La guerrilla lo necesitaba como técnico para la fabricación de explosivos.

El 19 de agosto de 1975, el mayor Larrabure se suicidó estrangulándose con un cordel en la cárcel del pueblo donde se encontraba, ubicada en calle Garay 3254, en Rosario.

El Ejército difundió que se lo había torturado. «Acostumbrado a torturar y fusilar a todo combatiente que cae en sus manos, el Ejército quiere justificar su miserable actitud atribuyendo falsamente a los revolucionarios los mismos métodos que él utiliza», contestó el ERP.

El sábado 23 de agosto, el cadáver del oficial fue encontrado en un zanjón ubicado en inmediaciones de calle Ovidio Lagos y Muñoz, poco antes de la intersección con la ruta 178, en las afueras de la ciudad cuna de la bandera.

Alguien había llamado a la comisaría 18ª y sostuvo que «hay un bulto que les va a interesar».

El 4 de setiembre de 1975 el cadáver fue entregado al entonces teniente coronel Casals y las alhajas que eran de Larrabure fueron a manos del coronel Juan Pablo Saa, jefe del servicio de inteligencia del batallón 121.

Por aquellos días el comandante del Segundo Cuerpo de Ejército con asiento en Rosario y jurisdicción sobre las provincias de Santa Fe, Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes y Entre

Ríos era Roberto Eduardo Viola. El 9 de setiembre lo reemplazaría Ramón Genaro Díaz Bessone.

El diario La Nación tituló que «oficiales del Ejército informaron que el coronel Larrabure fue ahorcado por extremistas después de entonar el himno nacional».

Comenzaba a articularse una de las mayores mentiras de la historia contemporánea de los últimos cuarenta años.

El expediente judicial jamás habló de torturas, mala alimentación y mucho menos de asesinato.

Sin embargo, desde los grandes medios de comunicación se impuso la falsificación de la realidad.

Aquella madrugada

Era el 11 de agosto de 1975 cuando René Alberto Vicari fue secuestrado cuando se disponía a ingresar a su oficina en calle San Juan 2460, en la ciudad de Rosario.

—Policía Federal. Nos tiene que acompañar. Hubo un asalto en un banco y tenemos que averiguar —le dijo uno de los tres hombres que lo rodearon mientras le apuntaban con un revólver.

Lo subieron en su propio automóvil Renault Break e iniciaron una marcha que pasó por el Parque Independencia, tomaron por avenida Godoy hasta que le vendaron los ojos.

—¡Pará, pará! Acá está la camioneta —escuchó Vicari.

—Ahora te vamos a cambiar de coche —le indicaron.

Lo metieron en un cajón de madera y recomenzaron el viaje. Notaba que era un terreno barroso.

—Bueno, ahora te vamos a poner una inyección porque tenés que hacer un viaje muy largo...

A los pocos segundos, Vicari perdió el conocimiento.

Cuando despertó, el comerciante estaba en una pequeña habitación amueblada con una cama, un banquito y un inodoro de plástico.

Le contaron que había sido secuestrado por el Ejército Revolucionario del Pueblo.

—¿Cuánto quieren por mi rescate?.

—Mil millones de pesos —fue la respuesta.

Lo llevaron a un sótano.

Allí Vicari notó que había evidentemente otro detenido, que tosía mucho y expectoraba y se quejaba para que bajaran el aparato de radio y que no prendieran el extractor de aire.

En la noche del día 14 a la madrugada, aproximadamente a las 3 horas, escuchó un fuerte grito, e inmediatamente que era abierta la puerta de la otra habitación que se hallaba en el sótano.

Descendieron varias personas. Durante un largo rato escuchó conversaciones nerviosas.

Todos fumaban mucho.

Después vino un médico. Aquella mañana, Vicari se dio cuenta que estaba solo. Larrabure ya no estaba. Ya nadie cantaba el himno nacional.

A las horas, sus captores se llevaron todos los trozos de soga, cables, hojas de afeitar y cualquier objeto punzante. No querían más sorpresas.

Aquel grito que escuchó fue ahogado, como un quejido.

El descubrimiento del cuerpo muerto de Larrabure desató un movimiento desacostumbrado.

Algo raro había ocurrido.

Sus secuestradores estaban preocupados, seriamente preocupados.

El 4 de setiembre de 1975, Vicari, al notar que no había nadie en el predio, saltó por arriba de una pared de madera. Subió la escalera hacia la planta alta y al no ver a nadie, salió corriendo por una calle de tierra.

La invención del asesinato

«Larrabure, Argentino del Valle - su muerte».

Así decía el expediente que se había tramitado en el Juzgado Federal Número 1 de Rosario, a cargo del doctor Pedro Alegría Cáceres. Llevaba el número 27.513 y luego se le habían acumulados el 27.522 y 27.526.

No hablaba de asesinato.

En agosto de 1979, el entonces coronel José Herman Llera, a cargo del denominado juzgado de instrucción militar número seis, dependiente del Ministerio de Defensa en la Dirección General de Fabricaciones Militares, recibió una notificación desde Rosario.

En aquella carta se informaba que no estaba «agregada la partida de defunción del occiso» y explicaba que la inscripción de la defunción de Larrabure fue ordenada por el juez nacional de primera instancia en la criminal y correccional federal número cuatro de la ciudad de Buenos Aires, doctor René Daffis Niklison.

Esa nota es una doble confesión: cuatro años después de encontrado el cuerpo de Larrabure la mismísima burocracia del terrorismo de estado que había hecho del caso un símbolo y una permanente excusa para secuestrar y torturar opositores políticos y sociales a la dictadura, decía que se trataba de «una muerte» y ni siquiera dudosa y, por otra parte, señalaba que desde el primer momento la reconstrucción política del caso fue llevada adelante desde Capital Federal, a más de trescientos kilómetros en donde fue encontrado el cuerpo del oficial del Ejército Argentino.

No hay referencias a ningún asesinato.

La palabra homicidio fue impuesta por los jueces federales de Capital Federal, Ramón Ojeda Febre y el ya mencionado Daffis Niklison, cuando le ordenaron a su par rosarino, Aguirre Stegmann, calificarlo como tal.

Esa invención de la realidad se produjo el 24 de agosto de 1975, menos de un día después que el cadáver fuera encontrado en un baldío rosarino.

Es un dato relevante: el pronunciamiento de los jueces Febres y Niklison se hacen al mismo tiempo que se practicaba la primera autopsia, a las ocho de la mañana.

«La muerte de Argentino del Valle Larrabure fue producida por asfixia por estrangulación», dice el expediente y también apuntan que se encontraba en un «buen estado nutricional».

Larrabure, ¿fue estrangulado o se ahorcó?

El informe de la autopsia no lo dice. No lo aclara.

Si lo hacen los jueces Febres y Niklison.

Así empezó la historia oficial del supuesto asesinato de Larrabure.

En setiembre de 1975, otro informe elaborado por los médicos forenses Avelino Do Pico y Guillermo Osman Dick, determinó que «no surgen lesiones producidas por el paso de corriente eléctrica», como ya había salido a decir el Ejército Argentino.

El 27 de setiembre, la justicia federal todavía en democracia, sigue con dudas. Las autopsias no hablan de asesinato.

El Ejército y el gobierno nacional encabezado por la señora María Estela Martínez de Perón, en cambio, multiplicaron la idea de un cobarde homicidio practicado por una célula del Ejército Revolucionario del Pueblo.

En los papeles puede leerse que aquel primer análisis que en tiempo record fue interpretado por los jueces de Buenos Aires, se estaba haciendo a la misma hora que los mencionados magistrados dictaminaban el asesinato, a las ocho de la mañana.

El médico legista de la Policía Federal, doctor Horacio José Marinoni, comenzó el examen del cadáver a esa hora pero con un detalle no menor: no contaba con los medios ni el equipo de ayudantes que llevaron otros profesionales. Marinoni destaca la nutrición de un sujeto normal con respecto a su talla. Y el profesional dice algo más: su primer informe «fue hecho condicionado al resultado de la autopsia forense y de los exámenes complementarios que luego se requirieron, habiendo actuado

con escasos elementos para su examen con los antecedentes que se brindaron en ese momento».

En síntesis, la autopsia practicada en el cuerpo de Larrabure jamás ofreció como conclusión la certeza de un homicidio, al contrario, era un cadáver que presentaba indicios de buena alimentación y buen cuidado sin la menor marca de tortura o golpe alguno.

Larrabure no estaba siendo castigado ni tampoco mal alimentado. No se lo iba a matar. Eso se desprende de las autopsias practicadas el 24 de agosto y confirmadas hasta fines de setiembre de 1975, según precisan las fuentes consultadas para esta investigación. Esto figura en el expediente judicial. Fueron aquellos dos jueces porteños, Febres y Niklison, los que impusieron la teoría del homicidio mucho antes de practicarse el primer examen.

Larrabure no fue asesinado.

El Ejército y la Policía Federal en complicidad con aquellos magistrados inventaron la historia oficial del supuesto homicidio.

Sirvió para impulsar el genocidio.

Nada más y nada menos. •

Capítulo 4
Reciclajes

Los titiriteros
21 de marzo de 2013

«... Ahora, en todos los órdenes tienen confidentes que los informan de cualquier procedimiento regular o irregular. Es inconcevible (sic) que estos hechos ocurran, tal es así que ni bien toma intervención un funcionario equis en un procedimiento saben como (sic) y cuando (sic) ocurrió, sorprende de tal manera que no dejan pasar un minuto sin moverse en forma conjunta», dice indignada la señora Irma F. de Ciccone, jefa del Departamento Provincial del Trabajo de la Inspectoría San Lorenzo, en una nota del 5 de noviembre de 1971 al entonces presidente del área, Benito Cantelli.

La carta es una de las tantas pruebas del seguimiento sistemático que se hacía sobre las organizaciones obreras desde los años sesenta en la región del Cordón Industrial del Gran Rosario, San Lorenzo y Villa Constitución.

Decretos y órdenes que tenían como objetivo la persecución a los trabajadores de las grandes empresas asentadas en la geografía sur santafesina y que generó una burocracia esencial para la desaparición de personas a partir del 20 de marzo de 1975, con la invasión a Villa Constitución pagada por José Alfredo Martínez de Hoz, gerente de Acindar y otras empresas y profundizada desde el 24 de marzo de 1976.

«Atento a lo ordenado por esa superioridad respecto al organismo denominado INTERSINDICAL con jurisdicción en esta zona (San Lorenzo) cumplo en informar lo siguiente de acuerdo a las constancias obrantes en Jefatura de Policía y de conocimientos obtenidos por la suscripta a travez (sic) de procedimientos seguidos con el fin de lograr datos concernientes a dicha entidad...», comenzaba diciendo el parte informativo de la señora Ciccone.

Herencia de los cursos de inteligencia que dieron los instructores franceses contratados por el estado argentino a fines de los años cincuenta y que elevaron a Alcides López Aufranc en titular del SIDE, primero, general represivo del Cordobazo, en segundo término y luego presidente de Aincar, en tercer término en plena democracia; esos partes eran consecuencia de los «manuales de contrainsurgencia» difundidos por la dictadura de Onganía a partir de 1976 y que conformaron la primera red de centros clandestinos de detención que florecieron en la región de la mano del general Juan Carlos Sánchez y del ex gendarme, Agustín Feced. El hombre que con total claridad ideológica diría en el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas en 1985 que él vino a hacer lo mismo que hizo el coronel Varela en la Patagonia: matar obreros díscolos. Y que en el máximo punto de la perversión se hizo llamar Rubén Carlucci, el mismo apellido de una trabajadora desaparecida de Capitán Bermúdez, para cobrar su jubilación en plena democracia alfonsinista.

En ese parte de la funcionaria provincial se lee sobre las particularidades de una acción gremial del 24 de marzo de 1971.

«A la hora establecida, los obreros hacen abandono de sus tareas, afectando a las siguientes fábricas de San Lorenzo, Molinos Río de la Plata, afectando a 180 operarios. Respecto de esta medida la gerencia no conforme con que los operarios permanecieran dentro de la propiedad fabril, siendo las 9.20 horas, se apersonan a Jefatura y solicitan la colaboración policial para solicitar a la misma su intervención a fin de que haga retirar al personal que se encuentra dentro del establecimiento, ante esta intervención policial, deciden trasladarse hasta la vereda enfrente del establecimiento...», describe Ciccione.

Una verdadera confirmación de la matriz del golpe: los grandes empresarios le ordenan a la policía que inicie la represión.

Eso es lo que se está juzgando en la llamada causa San Lorenzo en los tribunales federales rosarinos. La responsabilidad de las grandes empresas como verdaderos titiriteros de guante blanco de los macabros títeres que fueron las fuerzas de seguridad y armadas. Por eso es curioso que en 30 años de democracia haya jueces que desdoblen el juicio para seguir favoreciendo los intereses patronales. Por eso es necesario decir que la identidad trabajadora de la región merece ser acompañada, recordada y defendida para que no queden invictos los deseos de los verdaderos impulsores del genocidio. •

Pío Laghi y el reemplazante de Brasca

El domingo 22 de julio de 2012, el periodista Horacio Verbitsky publicó una nota titulada «Buenos Oficios», en el diario Página/12. En ella aseguraba que «el ex dictador Jorge Videla dijo que el ex nuncio apostólico Pío Laghi, el ex presidente de la Iglesia Católica de la Argentina Raúl Primatesta, y otros obispos de la Conferencia Episcopal asesoraron a su gobierno sobre la forma de manejar la situación de las personas detenidas-desaparecidas. Según Videla la Iglesia «ofreció sus buenos oficios» para que el gobierno de facto informara de la muerte de sus hijos a familias que no lo hicieran público, de modo que cesaran la búsqueda. Esto confirma el conocimiento de primera mano que esa institución tenía sobre los crímenes de la dictadura militar, como consta en los documentos secretos cuya autenticidad el Episcopado reconoció ante la justicia hace dos meses (por mayo de 2012). Pero además muestra un involucramiento episcopal activo para que esa información no trascendiera tampoco por comentarios de los familiares de las víctimas, de cuyo silencio la Iglesia era garante».

Más adelante, Verbitsky remarca dos puntos bajo los subtítulos: «El rol de Laghi» y «La eucaristía», donde se menciona a Brasca y Collosa.

Estos son los fragmentos mencionados:

El rol de Laghi

La minuta para el Vaticano también muestra el conocimiento de la Iglesia sobre el secuestro de las religiosas francesas Alice Domon y Léonie Duquet. Sin embargo, cuando la superiora de las monjas en la Argentina, Evelyn Lamartine, y la religiosa Montserrat Bertrán recurrieron a Laghi, el nuncio las miró «como si fuéramos bichos asquerosos, y nos dijo: 'Nosotros no

sabemos nada, por algo habrá sido'. Montse se arrodilló y le rogó que hiciera algo. El se la sacó de encima, instintivamente, describe Evelyn, que entonces pensó: 'Dios no se olvida de lo que dijiste'». Su testimonio fue recogido por María Arce, Andrea Basconi y Florencia Bianco, cuya investigación fue publicada por Clarín en 2007. Un obispo y una madre superiora llegaron desde Francia para interesarse por Alice y Léonie, pero Primatesta ordenó desmentirlo y explicar que sólo venían a pasar Navidad. En 1995, bajo la conmoción de las revelaciones del ex capitán Adolfo Scilingo sobre el asesinato de prisioneros arrojados al mar, la esposa del secuestrado periodista Julián Delgado, María Ignacia Cercós, contó que el Comandante en Jefe de la Armada Armando Lambruschini consultó con Laghi acerca del destino de 40 detenidos-desaparecidos en la ESMA, que su antecesor, Emilio Massera, le había entregado al retirarse. Lambruschini no quería matarlos pero temía que si los dejaba en libertad contaran lo padecido en la ESMA, tal como ocurrió, y le preguntó a Laghi qué hacer. Según Cercós, el concimiento de Laghi sobre lo que sucedía en aquel campo de concentración llegaba hasta la nómina de los prisioneros que aún quedaban con vida. Ante el pedido de María Ignacia, Laghi consultó esa lista y «me dijo que Julián no estaba entre ellos. Quiere decir que tenía pleno acceso a la información». En aquel momento, el propio Massera defendió a Laghi de tales «noticias calumniosas» y dijo que se preocupó en forma permanente por la suerte de «los llamados desaparecidos». El problema es que Laghi había elegido la estrategia opuesta: negar que hubiera conocido la índole y la extensión de las violaciones a los derechos humanos. Dijo que «no tenía ni micrófonos ni espías que fuesen a los cuarteles a ver lo que los militares hacían». Sus amigos Oscar Justo Laguna (quien al morir este año estaba procesado por la justicia federal de San Nicolás, por haber mentido en su testimonio sobre el asesinato de su colega Carlos Horacio Ponce de León), Alcides Jorge Pedro Casaretto, Carlos

Galán, Domingo Castagna y Emilio Bianchi di Carcano sostuvieron que declaraciones como la de María Ignacia Cercós podrían «reinstalar entre nosotros no ya la violencia de las armas sino la de la venganza». La esposa de Julián Delgado dijo entonces que durante años estuvo agradecida a Laghi por sus gestiones. «Pero ahora sé que no puedo perdonarle su silencio cómplice. Me siento un monstruo por haber escuchado esas cosas sin reaccionar.»

El propio jefe máximo de aquella Junta Militar, sin el menor asomo de crítica, confirma tres décadas después el asesoramiento de Laghi sobre el secreto más horrendo y peor guardado de la dictadura.

La Eucaristía

Recuerdos coincidentes tienen muchos sacerdotes que en aquellos años frecuentaron a Laghi. Uno de ellos, Hugo Collosa, de Rafaela, le narró al periodista Carlos del Frade que Laghi visitó esa ciudad santafesina luego de la muerte de su obispo, Antonio Alfredo Brasca, incendiado por un cáncer en 1976. La enfermedad se adelantó a las Fuerzas Armadas, que lo tenían en su lista corta de aversiones. En el Obispado se reunían las agrupaciones laicas que militaban en los barrios más humildes y las del peronismo revolucionario, que tenían algunos miembros en común, entre ellos un sacerdote. Brasca se había manifestado en apoyo del movimiento de Sacerdotes por el Tercer Mundo junto con los obispos Enrique Angelelli, Ponce de León y Alberto Devoto. «Laghi vino a maltratarnos», dice Collosa, quien ya no es sacerdote. «No tenía ninguna intención de discutir el perfil del nuevo obispo ni mucho menos que se siguiera la línea de Brasca. Lo llevamos a almorzar en un comedor para chicos de la ciudad y allí, a varios sacerdotes, nos contó de los vuelos de la muerte, de los secuestros, las desapariciones y las torturas. Es decir que ellos ya sabían lo que estaba pasando con lujo de detalles desde

mucho antes que 1978. Y hablaba con fundamento de lo que hacía cada una de las tres armas. Nosotros ya habíamos sufrido el secuestro del padre Raúl Troncoso que militaba en barrio Fátima, y estábamos muy preocupados. Después lo mandaron a Cassaretto que hizo una pastoral totalmente distinta a la de Brasca y bien cercana a los sectores dominantes de la ciudad». La primera entrevista de Videla con el periodista cordobés se interrumpió cuando lo trasladaron al Hospital Militar para tratarse de una incipiente bronquitis. Formaba parte de la comitiva que buscó a Videla «un hombre canoso que venía, cáliz y alba en mano, a darle la Eucaristía». Es decir que pese a las sucesivas condenas por los más graves delitos, la Iglesia Católica no consideró necesario excomulgarlo, pena eclesiástica que impide la recepción de los sacramentos y se aplica a los pecados graves. El no considerar como tales los delitos de Videla certifica la prolongación en el tiempo de la complicidad eclesiástica con ellos. •

Civiles

El Batallón de Inteligencia 601 se creó en el año 1964 y a partir de ese momento comenzó a ser el cerebro de la represión en la Argentina.

La lista de más de 4.300 nombres que entregó en el año 2010, el Archivo Nacional de la Memoria a un juez de Capital Federal incluye los nombres de militares y civiles que colaboraron por el terrorismo de estado a partir del 24 de marzo de 1976.

La totalidad de las identidades pueden revisarse en el dossier que acompaña al número de la revista Veintitrés del pasado 18 de febrero de 2010.

Estos nombres ratifican lo actuado por todos y cada uno de los Organismos de Derechos Humanos en la zona del Gran Rosario desde hace más de veintisiete años que hacia 1986 denunciaron a muchos de los que hoy salen a la luz pública.

Es necesario que la justicia federal tome en cuenta a estas personas civiles que bien podrían aportar más datos sobre la ingeniería de la represión en la zona sur de la provincia de Santa Fe. Resulta curioso y sugestivo que Agustín Feced revistiera como personal civil de inteligencia y su rol haya sido el de analista cuando se desempeñaba como jefe de la policía rosarina durante la noche carnívora.

También aparece el del ex técnico de las divisiones inferiores de Rosario Central, Edgardo Andrada, el otrora maravilloso arquero del club de Arroyito y la Selección Nacional al cual Pelé le hizo su famoso gol número mil.

Militares y civiles

Entre los 345 militares que aparecen en el dossier surgen los nombres de Juan Daniel Amelong, como teniente primero; José Alberto Bernhardt, también en su grado de teniente primero; Jor-

ge Fariña, como teniente coronel; Roberto Fossa como capitán; Pascual Guerrieri, como teniente coronel; Domingo Marcellini como teniente coronel; Edgardo Alcidez Pozzi como coronel; Víctor Hugo Rodríguez como teniente primero; Eduardo Sarmiento como teniente coronel; Alfredo Sotera, como coronel; todos vinculados con la represión ilegal en la zona del Gran Rosario, aunque no están discriminados por zona.

En la segunda lista aparece la «nómica del personal civil de inteligencia que prestó servicio en el batallón de inteligencia 601 entre los años 1976 y 1983».

Allí, curiosamente, surge el nombre de Agustín Feced en el rol de «analista». Por supuesto que en esos tiempos el ex comandante de gendarmería no era civil sino que el jefe de la policía rosarina.

También aparece Raúl Guglielminetti como integrante del área «producción», un hombre vinculado a la invasión a Villa Constitución en marzo de 1975 y que supo sobrevivir hasta los primeros tiempos de la democracia recuperada en 1983.

Pero lo más interesante surge de la lista de los civiles que participaron de las actividades del destacamento de inteligencia directamente dependiente del segundo cuerpo de ejército con asiento en Rosario.

Muchos de esos nombres fueron denunciados por los Organismos de Derechos Humanos cuando ningún ente estatal colaboraba con ellos.

Una serie de identidades que pueden develar muchos de los interrogantes que todavía subsisten a casi treinta y cuatro años del inicio de la noche carnívora.

<u>Nómina de Personal Civil de Inteligencia que prestó servicio en el Destacamento de Inteligencia 121 entre los años 1976 y 1983.</u>

Aguilar, Rubén Alberto, dactilógrafo.

Alasino, Rolando Sergio, agente reunión.
Alcuri, Rubén Eduardo, agente seguridad.
Alisi Diris, Fabián A., dibujante.
Andrada, Edgardo N., agente reunión.
Bello, Eduardo D., dactilógrafo.
Bonfils Sadi, Armando, radioperador.
Bossi, Juan Carlos F., agente reunión.

Brunel, Luis Alberto, programador.
Bueno, Gustavo Francisco, agente reunión.
Bustos, Jorge, agente reunión.
Cabrera, Juan Andrés, agente reunión.
Caraccia, Ricardo Hugo, fotointérprete.
Caracotche, Horacio E., asesor militar.
Cardozo, Hugo Alberto, agente reunión.
Carre, Raúl Jorge, agente reunión.
Cazeneuve, Aldo José, agente reunión.
Chriesteler, Anita Rosa, agente seguridad.
Cocimano, Ricardo Luis, radioperador.
Costanzo, Eduardo R., agente reunión.
Copparo, Hugo Enrique, agente reunión.
Cruz, Raúl Alfredo, agente seguridad.
Dalfino, Rafael, auxiliar apyicia.
De León, Saúl Segundo, agente reunión.
De Nicola, Alberto D., agente reunión.
Della Ceca, Juan Carlos, dactilógrafo.
Demirdjian, Miguel Ángel, agente seguridad.
Ducca, Ricardo Antonio, agente reunión.
Edes, Leopoldo Julio, dactilógrafo.
Favia, Daniel Ricardo, agente reunión.
Fioretti, Pedro Santos, auxiliar contaduría.
Florentín, Alicia Rosalía, agente seguridad.
Frenna, Adriana Ester, agente reunión.
Fulgueira, Walter José, radioperador.

García, Jorge Raúl, operador SCD.
Garella, Oscar F.A.R., dactilógrafo.
Garella, Ricardo José, conductor.
Godoy, Osvaldo Joaquín R., programador SCD.
Gómez, Carlos Walter, agente seguridad.
González Pinto, Heriberto, Act. Especial ICIA.
González, Raúl Héctor, auxiliar apoyo ICIA.
Grosso, Eduardo Antonio, programador auxiliar .
Gruboy, Eduardo Luis, operador SCD.
Gutiérrez, Juan Domingo, mecánico.
Hernández, Osvaldo Víctor, asesor jurídico.
Herrera, Domingo Faustino, agente reunión.
Igoillo, Daniel Fernando, agente reunión.
Isach, Carlos Gabriel, agente reunión.
Isach, Rodolfo Daniel, agente reunión.
López, Ariel Antonio, agente seguridad.
Martínez, Gabriel Alberto, agente reunión.
Molina, Miguel Ángel, agente reunión.
Montenegro, Osvaldo J., agente seguridad.
Monti, Alberto, dactilógrafo.
Morilla, José Elvio, agente reunión.
Mule, Osvaldo Godofredo, dactilógrafo.
Navarro, Sergio Oscar, dactilógrafo.
Nicolás, Santiago Roberto, agente seguridad.
Nota, Carlos, dactilógrafo.
Nucifora, Héctor Pedro, perfograbador.
Ojeda, Roberto C., auxiliar contable ICIA.
Orefici, Eduardo S. agente reunión.
Orellana, Victuriano S., agente reunión.
Osorio, Juan Carlos, agente seguridad.
Ozcari, Héctor, peón.
Pagano, Walter Dionisio, agente reunión.
Pangia, Raúl Joaquín, agente censura.

Paradot, René Aníbal, agente seguridad.
Pascuali, Humberto A., agente reunión.
Pavesio, Claudio Luis Juan, radioperador.
Peirano, Luis José, agente reunión.
Pelliza, Alberto Enrique, agente reunión.
Pérez, Jorge Walter, act. Especial ICIA.
Pérez, Mónica Feliza, agente reunión.

Pérez, Gustavo Eduardo, dactilógrafo.
Perugini, Gualter A., agente seguridad.
Pettorossi, Osvaldo Luis, auxiliar reg y archivo.
Pettorossi, Carlos, perfograboverificador.
Porra, Ariel Zenón, agente seguridad.
Ramos, Ángel Paulino, agente seguridad.
Rebechi, Eduardo, agente reunión.
Roca, Carlos Eduardo, agente reunión.
Rock, Hellmut Otto, radioperador.
Rock, Claudio Andrés, radioperador.
Rodríguez, Néstor E., peón.
Rojas, Manuel Rubén, agente seguridad.
Romero, Carlos Daniel, agente reunión.
Roscoe, Walter Roberto, agente reunión.
Salegas, Oscar Armando, agente censura.
Scacco, Jorge Omar, agente seguridad.
Sciascia, Oscar Raúl, agente censura.
Scilabra, Francisco José, agente reunión.
Sfulsini, Carlos Antonio, agente reunión.
Solé, César Ramón, agente reunión.
Spezzi, Cayetano Julio, peón.
Spezzi, Eduardo Julio, agente seguridad.
Spezzi, José, conductor.
Spezzi, Roberto Salvador, dactilógrafo.
Tardío, Ricardo Emilio, dactilógrafo.
Tarrió, Osvaldo Aníbal B, agente reunión.

Troncoso, José Luis, agente reunión.
Ubiedo, Adriana Beatriz, analista universitario.
Valero, Jorge Santiago, dactilógrafo.
Vázquez, Alfredo, auxiliar personal.
Vázquez, Daniel Alberto, perfograboverificador.
Vegas, Néstor José, agente seguridad.
Vernuccio, José María, agente seguridad.
Vila, Juan Carlos, teletipista.
Vogliano, Fernando, dactilógrafo.
Vragnisan, Juan José, agente seguridad.
Wirsch, Alicia Aracelli, agente reunión.
Zambelli, Juan Carlos, fotógrafo.
Zangara, José Felipe, agente reunión.
Zárate, Alfredo, auxiliar contable ICIA.

Fuente: Revista veintitrés, año 12, número 607, del 18 de febrero de 2010. Basado en la lista elaborada por el Batallón de Inteligencia 601 y entregada por su actual titular, César Milani, al juez Ariel Lijo, a través de Ramón Torres Molina, titular del Archivo Nacional de la Memoria. •

El Gato maula

El miércoles 5 de marzo de 2008, Rosario fue tenido en cuenta por el diario español El País.

El título de la nota fue «La doble vida de Andrada» y allí se leía que «el portero argentino al que Pelé marcó su gol número 1.000, acusado de haber sido un represor durante la dictadura argentina».

La nota fue escrita por el corresponsal Rodolfo Chisleanschi y sostenía que «el 19 de noviembre de 1969, el pulso futbolístico de Brasil se detuvo por un instante. En el viejo Maracaná, el árbitro Manoel Amaro acababa de pitar un penalti a favor del Santos contra el Vasco da Gama y Pelé se disponía a lanzarlo para intentar conseguir el gol 1.000 de su carrera. Enfrente, un portero argentino, Edgardo Gato Andrada, estaba dispuesto a aguarle la fiesta. Se estiró hacia su izquierda, adivinó el destino del remate, pero no llegó a rozar el balón y se quedó golpeando con rabia el suelo mientras los flashes buscaban a O Rei», describía la crónica.

Agregaba que «han pasado casi cuatro décadas de aquello. Andrada, un excelente portero que fue ídolo del Rosario Central antes de partir hacia Brasil, volvió a Argentina a finales de 1976, en tiempos de la dictadura militar que comandaba el general Jorge Videla. Entonces se sumó a las filas del Colón de Santa Fe, en el que hace algunos años le eligieron como el mejor arquero que haya pasado por el club, y se retiró en 1982 en el Renato Cesarini, un pequeño equipo de la misma provincia».

Pero ahora existen sospechas de que no sólo se dedicó a ponerse bajo los palos en los últimos años de su carrera. «El Gato Andrada integró la patota [fuerzas paramilitares] que secuestraba gente en Rosario», le acusó el ex represor Eduardo Constanzo, procesado por crímenes contra la humanidad. En su declaración ante el juez Carlos Villafuerte Ruzo, hace dos semanas, Cons-

tanzo abundó en detalles y sostuvo que Andrada participó del operativo que terminó con la desaparición y la muerte de los militantes peronistas Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereira Rossi el 14 de mayo de 1983.

«No quiero hablar. Es una cosa que no tiene ni ton ni son, Constanzo miente. Yo estuve en el Ejército, pero no así», se defendió El Gato. Pero algunos datos juegan en contra del ex portero, que actualmente tiene 69 años y trabaja para el Rosario Central como coordinador de la cantera en la zona sur de la ciudad.

Andrada niega haberse jubilado como integrante de los servicios de Inteligencia del Ejército como señaló Constanzo en su declaración judicial, aunque todavía no ha aclarado cuál fue su actividad en las fuerzas armadas. Y otra denuncia, en este caso anónima y realizada en 1997 ante el juzgado de San Martín, provincia de Buenos Aires, ya lo señalaba como integrante del comando que secuestró a Cambiaso y Pereira Rossi en la cafetería Magnum, en pleno centro rosarino.

«Desde hace años, en Rosario hay un fuerte rumor sobre la participación de Andrada en la represión», asegura Ana Oberlín, abogada de la agrupación HIJOS, organización de derechos humanos formada por hijos de desaparecidos, asesinados o presos en la dictadura. Incluso algunos ex compañeros del Gato en el club Colón sostienen: «Nunca hablábamos delante de él, ni siquiera de dinero, porque sabíamos que lo contaba todo a los dirigentes».

Andrada «está ahora a la espera de una citación que se producirá en los próximos días. Como una ironía del destino, el mismo hombre que hace 39 años quiso ganar la gloria evitando el gol número 1.000 de Pelé deberá ahora echar mano de sus viejos reflejos para permanecer en el olvido. Porque, si el juez Villafuerte Ruzo logra certificar las acusaciones de Constanzo, no habrá reconocimiento, sino vergüenza en su entrada en la historia», concluía la crónica. •

Rodenas y La Calamita

El 30 de mayo de 2004, Eduardo Alberto Benzadón aseguró ante los tribunales federales de Rosario que su padre, Samuel Raúl Benzadón era el titular del predio conocido como La Calamita desde el año 1968 o 1970, a través de una compra efectuada en un remate judicial.

Allí existía una bodega y en el predio «había construido una casa, un galpón de cemento y otro de chapa, como así varias habitaciones para la bodega donde se metían los vinos, eran lugares cerrados herméticamente».

Benzadón aclaró que las actuales construcciones son las mismas con que se encontraron a finales de los años sesenta.

«Esa propiedad más o menos desde el año setenta al ochenta fue alquilada a Rodenas, el que era presidente de Central. La alquiló para uso personal. Con él firmamos contrato de alquiler sellado y todo, pero hasta este momento no lo pude encontrar. Recuerdo una vez que fue el administrador de nuestras propiedades, más o menos en el año '73 o '74 y no se pudo arrimar a la propiedad porque a tres cuadras de la misma, lo paró gente armada y le dijeron que no podía seguir y mencionó que iba a cobrar el alquiler y le dijeron que bueno que ya se lo iban a llevar, el administrador nuestro era Dalmacio Monserrat que aún vive... Sólo ocurrió ese episodio que no fue normal, pero fuera de eso, nunca nos enteramos de nada hasta que empezó a salir en los diarios que esa propiedad podría haber sido un centro clandestino de detención. Actualmente mi padre, hará más o menos tres años, me pasó dicha propiedad a mi y yo ahora se la he alquilado al señor Omar Caballero», recordó Eduardo Benzadón.

Agregó que su padre «en la época de Alfonsín» fue llamado a declarar ante el tribunal de la provincia por la propiedad de esta casa y «en dicho momento acompañó el duplicado del contrato de alquiler de dicha casa al señor Rodenas».

En la segunda declaración que efectuó ante los tribunales federales rosarinos el 23 de febrero de 2006, Benzadón añadió que la superficie del predio es de casi 150 mil metros, mientras que La Calamita en si tiene alrededor de cinco mil metros.

Recordó que había un galpón luego derrumbado alrededor del año 2001 y que «la casa fue alquilada al señor Rodenas» por su padre «en la época de los militares» aunque desconoció el uso que le dio el fallecido ex dirgente de Rosario Central y del peronismo a ese predio.

Pero hay otra historia vinculada a La Calamita, Rodenas y los negocios derivados de la sangre derramada.

La contó un ex comisario de La Santafesina SA, Luis Galanzino.

El ex oficial fue desplazado de la policía provincial durante la primera administración del ingeniero Obeid. Desde entonces denuncia a su entonces subsecretario de Seguridad Pública y hoy titular de Defensa Civil, el ex teniente coronel José Bernhardt, como el oficial que trasladaba a los detenidos ilegales de Santa Fe, durante el terrorismo de estado, hasta el ya mencionado centro clandestino que funcionaba en Granadero Baigorria, La Calamita.

Galanzino llegó a efectuar esa denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington. Actuales funcionarios del gobierno provincial desprecian la denuncia porque creen que Galanzino miente para ocultar sus propias acciones contrarias a los más elementales derechos humanos.

«Es de público conocimiento que Bernhardt trabajó para el Servicio de Inteligencia del Ejército. El participó en los traslados de los detenidos de Santa Fe hasta La Calamita. Eso es real», afirma Galanzino.

«Bernhardt hacía los traslados y también creo haber demostrado la relación existente entre él, el entonces ministro de Gobierno, Roberto Rosúa y la jueza Alejandra Rodenas. ¿O no se sabe que Osvaldo «Tito» Rodenas, histórico dirigente de Rosario

Central, era quien tenía La Calamita. El tema este nace entre el coronel Juvenal Pozzi y el dirigente empresario Natalio Wainstein. Este último le presenta Rodenas a Pozzi para que el estadio de Central sea confirmado como la sede del Mundial '78. Y una de las condiciones fue que Rodenas le alquilara a Pablo Benzadón, La Calamita y luego se la pasara a los militares. Y ahí se hicieron las torturas», terminó diciendo.

Como si todo esto fuera poco, uno de los más caracterizados y perseguidos hinchas de Central, Marcelo «Vitamina» Barberis, relató una experiencia personal que vuelve a poner la pelota en la difícil cancha en la que convivían los intereses del terrorismo de estado y ciertos dirigentes del club de Arroyito.

«En los ambientes chicos le baten Tarantela a Vesco. Yo quise hacer la unidad, entonces le planteé a Vesco y a Rodenas que con la experiencia de ellos más las ganas y juventud que teníamos nosotros, armar una sola lista sin ir a elecciones y no dividirnos. Vesco estuvo treinta años porque justamente dividió. Dividir para triunfar, dicen... Entonces Rodenas me dijo que lo vaya a ver a Tarantela», comentó Vitamina, el mismo que se encadenó frente a la Asociación del Fútbol Argentino para denunciar el saqueo del patrimonio del club de sus amores.

«Qué hacés... dejemos de hinchar los huevos, tanta pelea y Central siempre va para atrás. Vayan ustedes dos arriba y listo. En ese momento, Vesco me dice: ¿Vos sos peronista? Sí, le dije... Viste cómo es, por tradición en mi familia. Y cómo podés estar al lado de un peronista que entregaba peronistas para que los maten en los paredones... como podés estar al lado de ese Rodenas»...Yo vine a hablar de la unidad, de Central. Y me fui mal. Y me volví a lo de Rodenas. Tito, le dije: Ya fui. Me preguntó si era peronista. Le dije que sí. Y qué más te dijo. Nada, que vos entregabas peronistas para que los maten en los paredones. Imaginate que Tito estaba hemipléjico y yo en algo que respeto de Tito es algo muy importante. No es que entregó, tal vez no

pudo salvar, salvó lo que pudo. Porque en esa época era jodido, era medio sálvese quién pueda. Salvó lo que pudo y a muchos no lo pudo salvar. El veneno que se agarró le terminó de liquidar la cabeza. Y ese qué puede hablar si los bienes de los desaparecidos se los escrituraba a los militares. Y entonces yo dije dónde mierda me metí. Dónde estoy metido. En el medio de un tiroteo nada que ver... Yo quiero que Central tenga 60 mil socios...», apuntó Barberis que a pesar de vivir cuatro años afuera de la ciudad por distintas amenazas recibidas, sigue soñando con un club grande, bastante lejos de historias densas y pesadas. •

La cara oculta de Acindar

El 20 de marzo de 1975, cuatro mil efectivos procedentes de diferentes lugares del país entre los cuales había policías provinciales santafesinos, policías federales, pesados de las organizaciones sindicales de derecha y bandas de delincuentes comunes reclutados para la ocasión, invadieron la ciudad obrera de Villa Constitución, al sur de la provincia de Santa Fe.

Según el ex oficial de la Policía Federal, Rodolfo Peregrino Fernández, se trató de un operativo de la Triple A y contó con el apoyo del gobierno nacional de entonces a través del Ministro del Interior, Alberto Rocamora y fue pagado por las gerencias de las grandes fábricas de la zona, Acindar, Metcon y Marathon, entre otras, a razón de 200 dólares para cada uno de aquellos que detuvieron 200 delegados de fábrica y convirtieron al albergue de solteros de Acindar, en aquel momento gerenciada por José Alfredo Martínez de Hoz, en uno de los primeros centros clandestinos del país.

Por primera vez, a través de la documentación que aquí se exhibe, perteneciente al servicio de la Policía Federal, Adrián Cazaubón, queda demostrado cómo Acindar y, en su momento, la Unión Ferroviaria, le dieron trabajo a estos represores.

Y, por otro lado, esta comprobación habilita al juez federal Norberto Oyarbide que sigue la investigación sobre aquellos sucesos de Villa Constitución, para que pida la declaración de los entonces funcionarios de la empresa Acindar y busque más evidencias sobre las identidades de aquellos que conformaron en su momento la Triple A y años después, las Tres fuerzas armadas, como lúcidamente lo denunciara Rodolfo Jorge Walsh.

De la Triple A a Acindar

Las credenciales demuestran identidades y pertenencias.

Hablan del pasado abierto como consecuencia de la impunidad que supo tejer el poder económico como verdadero titiritero de la masacre desatada contra los trabajadores en los años setenta, aún desde antes del 24 de marzo de 1976.

La llamada Asociación del Personal de Dirección de la Industria Siderúrgica, fundada el 20 de setiembre de 1971, le otorgó la tarjeta al afiliado Adrián Mario Cazaubón y le otorgó el número de afiliado terminado en 11620. Y dice con exactitud el papel plastificado: «ACINDAR S.A. Empresa a la que pertenece».

Por su parte el Ministerio de Bienestar Social a través de la Caja Nacional de Previsión de la Industria, comercio y actividades civiles, expidió la «certificación de cesación de servicios» del mencionado Cazaubón cuyas tareas eran desempeñarse como «Jefe Protección Planta» bajo un convenio «excluido» en la zona de Rosario.

La causa de la cesación fue «renuncia» el 7 de setiembre de 1977 y el último pago que recibió consistió en 196.697 pesos en calidad de sueldo y 121.067 pesos más como aguinaldo.

El empleador certificante, dice el documento oficial, era ACINDAR INDUSTRIA ARGENTINA DE ACEROS S.A., con domicilio en avenida Ovidio Lagos 4250. La certificación está firmada por Lelio Ángel Galassi, de la división personal de la acería.

Otra credencial, emitida por la Policía Federal Argentina, en Buenos Aires, el 31 de enero de 1974, dice que Cazaubón «es custodia personal del señor presidente de la Unión Ferroviaria, está autorizado a portar armas, por el término de un año, a contar de la fecha».

Y un tal Leopoldo Díaz le firmó otro carnet como integrante del Servicio de Informaciones Anticomunistas (SIA) que vencía el 31 de diciembre de aquel año 1974 e informaba que Cazaubón «presta servicio como auxiliar de enlace (sec. Capital)». Este Servicio estaba inscripto en la denominada COARA.

También el señor Cruz Alcides Machado, socio gerente de

ORINPRI SRL, «autorizado por la delegación Rosario de la Policía Federal Argentina», según el decreto 1.063 del año 1976 y la resolución 1902 del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Santa Fe, sostiene que Cazaubón «se desempeña como inspector de objetivos de esta empresa».

Adrián Mario Cazaubón, nacido el 3 de septiembre de 1934, casado y padres de dos hijas a quienes abandonó en los años setenta, era integrante de una de las tantas bandas de derecha que primero conformaron la Triple A y luego siguieron brindando servicios en sindicatos y empresas que financiaron la represión desde principios de los años setenta contra los trabajadores que no respondían a los intereses y mandatos de la burocracia.

Estos documentos que, por primera vez se publican, demuestran que Acindar, la empresa cuyo gerente era José Alfredo Martínez de Hoz y que financió la invasión a Villa Constitución el 20 de marzo de 1975, le dio trabajo a Cazaubón en los primeros años de la noche carnívora de la dictadura y comprueban cómo la acería fundada por la familia Acevedo había invertido en represores para mantener a raya sus empleados.

«Mi papá tenía guardada una manopla de hierro que quedó en un armario de la casa y hasta en su momento llegamos a descubrir una credencial de la Triple A...» comenta de una de las hijas de Cazaubón ante este cronista.

La mamá de las chicas tuvo que hacerse cargo de la familia sin ningún tipo de comunicación o ayuda económica. Lo hizo con una gran valentía mientras su ex marido era uno de los tantos integrantes de los grupos de tarea antes y durante la dictadura.

Cuarenta años después del inicio de la matriz del golpe más sangriento de la historia argentina, los papeles y los documentos de Cazaubón revelan que todavía existen pruebas concretas y materiales de quiénes fueron aquellos 4 mil efectivos de distintas fuerzas que ocuparon la ciudad obrera del sur santafesino.

Todos ellos pagados por organizaciones sindicales de derecha, distintos gobiernos y, por supuesto, por empresas como Acindar.

Estos nombres y papeles plastificados deberían interesarle al juez federal Norberto Oyarbide que está investigando el rol de la empresa en la feroz respresión desatada aún antes de la asunción de la Junta Militar encabezada por Jorge Rafael Videla.

El militante nacionalista

La amarillenta página 5 del viejo diario «La Razón», del domingo 8 de agosto de 1954, daba cuenta de «un raid de pintores», el viaje «a México de tres jóvenes a caballo», sostenía el recuadro acompañado por una fotografía.

«Impulsados por un auténtica vocación de artistas, tres jóvenes argentinos iniciaron esta mañana un raid a caballo con destino a México, con el exclusivo fin de plasmar en sus telas los paisajes más sugestivos y atrayentes del viaje. Son ellos Adrián Mario Cazaubón, de 20 años, dibujante y a la vez alumno de la Escuela Nacional de Cerámica; Juan Roberto López, de 32, de igual actividad y Pedro Héctor Gutiérrez, de 24, dedicado a la confección artística de flores», sostenía la noticia.

«Para realizar esta arriesgada empresa llevan cinco caballos —dos de ellos donados por el intendente de Morón—, una carpa, algunas ropas, más de un centenar de pinceles, témperas, óleos, paletas que emplearán durante su raid que abarca, además de Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Panamá, Puerto Rico, Nicaragua, Honduras, Guatemala y México», agregaba la información.

El artículo añadía que las alternativas del viaje serían transmitidas por onda corta y que la partida se hizo desde la Plaza del Congreso. «Desde el monolito que señala el kilómetro cero emprendieron el viaje, rindiendo previamente homenaje a la Jefa

Espiritual de la Nación, para lo cual depositaron una ofrenda floral en el busto que perpetúa su memoria en la Confederación General del Trabajo», terminaba diciendo la crónica de La Razón.

En una carpeta azul con anillos, Cazaubón le puso una etiqueta con el título: «Recuerdo del Operativo Cóndor».

Habían pasado doce años de aquel viaje a caballo a México.

Era el 28 de setiembre de 1966, bajo la dictadura del general Juan Carlos Onganía.

Cazaubón fue conmovido por aquella acción de los 18 «comandos» que intentaron tomar las Islas Malvinas. La revista Panorama editó un suplemento gratuito con muchas fotografías que hoy, casi medio siglo después, se pueden encontrar en la web.

Pero desde la carpeta azul de Cazaubón surge el original con el clásico aroma que deja el paso del tiempo sobre los papeles. Son fotografías en blanco y negro y la tapa muestra el momento en que «se cierra la portezuela del DC-4 de Aerolíneas Argentina, LV-AGG, donde van los comandos. Sentada, se ve a la única mujer del grupo», informa la revista.

El título de la publicación era «Operación Comando en las Malvinas».

Luego, a doble página, la fotografía de aquellos muchachos nacionalistas mostrando la bandera argentina en medio del frío malvinero.

Dice el texto de Panorama, «los integrantes de la Operación Cóndor: 'Estamos unidos porque creemos que eludir un compromiso es cobardía. Estamos luchando y lucharemos. O concretamos nuestro futuro o moriremos con el pasado', tal fue la proclama de los jóvenes que organizaron la operación comando», remarcaba el escrito.

Cazaubón, militante peronista y nacionalista, siguió juntando y pegando recortes de la Operación Cóndor en su carpeta azul.

Allí estaba el nombre del jefe de aquella acción, Dardo Cabo, que luego sería desaparecido durante la dictadura; y también

aparecía como subjefe, Alejandro Giovenco, alguien que después fuera denunciado como integrante de las patotas de la UOM y la Triple A. Casi la síntesis de los enfrentamientos de la década del setenta.

Pero entre esos papeles de diario, Cazaubón resalta un nombre los que viajaban en el avión hacia Tierra del Fuego, Carlos Villar, nada menos que el jefe de la Policía Federal y, en su momento, el jefe operativo de la Triple A, luego ajusticiado por Montoneros.

La última información que tienen los familiares es que murió y fue enterrado en el cementerio de Villa Gobernador Gálvez, al sur de Rosario. •

El desaparecedor de Haroldo Conti y la Barrick

Miembros de la asamblea de Derechos Humanos y de las agrupaciones ambientales de la provincia reconocieron al imputado por la desaparición del escritor. Hoy intenta obtener una cátedra en la Universidad Católica de San Juan.

Rubén Osvaldo Bufano, ex integrante del Batallón 601 y acusado de ser uno de los responsables del secuestro y desaparición del escritor Haroldo Conti, coordinó las tareas de la seguridad privada de la Barrick Gold en el yacimiento Veladero, en la provincia de San Juan, a partir de 2006, confirmaron fuentes sindicales y profesionales de aquella capital cuyana. Hoy, el ahora empresario del rubro intenta obtener una cátedra sobre «inteligencia y seguridad» en la Universidad Católica de San Juan, según confiaron militantes de Derechos Humanos, al diario Tiempo Argentino, el 6 de diciembre de 2010.

El reciclaje de Bufano, también acusado de haber participado en la llamada Masacre de Fátima, en Pilar, provincia de Buenos Aires, se inscribe en la lógica de la policía particular de la multinacional minera que, en estos días, volvió a ser denunciada por «perseguir» y «escuchar los llamados telefónicos» de los ambientalistas de la Unión de Asambleas Ciudadanas.

Ramón Gómez Medero, integrante de la Unión de Asambleas Ambientales de San Juan, sostiene que «la cuestión de la policía privada de la Barrick es un secreto que circula. En realidad, la mano de obra barata y sucia que trabaja para la empresa es la mismísima policía provincial. Pero el trabajo del seguimiento, las escuchas y las amenazas contra nosotros proviene de este tipo de expertos.» Agrega que, cuando se hacían las movilizaciones en contra de las mineras a cielo abierto, Barrick tenía su oficina en pleno centro sanjuanino. «Desde allí hemos visto personas muy altas y rubias que no eran de acá y que formaban parte de esa seguridad privada. Los informes que nosotros tenemos nos

dicen que se trata de hombres que formaron parte de conflictos bélicos internacionales, más precisamente que estuvieron en la guerra de Irak. Parece una película de ciencia ficción pero no lo es», dice Ramón.

Gómez Medero explica que «el llamado D-2 de la policía provincial le sirve a la minera, es decir que la seguridad pública está al servicio de la transnacional, pero este es un esquema que no sólo se da en San Juan, si no también en Catamarca, Chile y Perú donde recientemente se hizo una película al respecto que se llama *Operación Diablo*».

Para el militante, fundador de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de la capital cuyana, Eloy Camus, también autor del libro *Historia de víctimas del terrorismo de Estado. San Juan, Argentina*, Bufano llegó a la ciudad de la mano de Jorge Escobar, «el Fujimori de Menem, empresario exitoso que iba a generar un buen gobierno. En ese momento junto a un cabo del Ejército, Obredor, Bufano fundó OVYS y con esta empresa de seguridad empezaron a recibir los beneficios del gobierno de Escobar, que le daba a proteger las empresas del Estado, las privatizadas y de algunos sanatorios, como ADOS, entre otros establecimientos. Bufano está apañado por ese poder menemista que existe todavía en San Juan». Y agrega que Bufano «camina libremente por las calles de San Juan como si fuera un señorón a pesar de que muchos sabemos de su pasado. Por eso es fundamental seguir profundizando la democracia para perder el miedo y recuperar nuestra dignidad. No es casualidad que se reciclen represores para reciclar aparatos represivos. Es vital seguir adelante con la reconstrucción de la memoria y también es necesario poner en cuestionamiento al poder judicial que se hace el bobo ante estas situaciones de impunidad.»

La presencia de Bufano en los planteles de seguridad privada de la Barrick reactualiza la historia de La Forestal, otra transnacional dedicada a la explotación de los recursos naturales, que

durante los años veinte del siglo pasado armó a su propia policía, la «gendarmería volante», también llamada «Los Cardenales», con el apoyo del gobierno de Santa Fe.

La Barrick tiene el nombre comercial de Minera Argentina Gold. En 2009 facturó 2200 millones de pesos, a razón de $4243 por minuto, colocándose en el puesto 71 entre las 1000 empresas que más venden en el país.

En el informe *Nunca Más*, de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, se lee parte del legajo 77 que refiere a la detención de Haroldo Pedro Conti, autor de *Sudeste*, *En vida*, *Alrededor de la jaula* y la célebre *Mascaró*. El 4 de mayo de 1976 «fue aprehendido cuando retornaba a su domicilio de Capital Federal a medianoche, junto a su compañera Marta Beatriz Scavac Bonavetti y el bebé de ambos. Allí tenía que aguardarlos un amigo. Al arribar a la vivienda, el amigo se encontraba ya maniatado, había un grupo de individuos vestidos de civil, quienes golpearon brutalmente a la pareja y la encerraron allí mismo, mientras se peleaban por el reparto del botín: los sueldos de ambos, percibidos esa mañana, efectos patrimoniales de toda naturaleza, dejando escasamente los muebles de gran tamaño. Robaron los originales de todas las obras de Conti y documentación personal», sostiene el documento.

Más adelante, el informe expresa que «los diarios de fecha 13 de noviembre de 1982 dieron cuenta de la detención, en la ciudad de Ginebra, Suiza, de tres argentinos, quienes declararon pertenecer a grupos secretos de represión política, autores de secuestros extorsivos cuyos rescates cobrarían en aquel país donde resultaron aprehendidos y que manifestaron estar en condiciones de proveer información sobre el destino de Conti». En base a las fotografías «difundidas en su momento de los individuos detenidos en Suiza (Bufano, Martínez y otros), la señora Scavac reconoció que el «amigo» que se hallaba en el domicilio antes de que llegaran las fuerzas que capturaron a Conti y que

decía llamarse Juan Carlos Fabiani (quien había concurrido a casa de Conti una semana antes del secuestro solicitando asilo por sentirse perseguido por la policía a causa de su militancia política), era el detenido Rubén Osvaldo Bufano —perteneciente, según sus declaraciones, al Batallón 601 del Ejército—. Los hijos de Conti —Marcelo Haroldo y Alejandra— del primer matrimonio, también reconocieron dichas fotografías, ya en sede judicial, como pertenecientes al 'amigo' a quien veían en la casa de su padre cuando le efectuaban visitas...»

«En seguridad y en inteligencia, a mí el Ejército argentino me formó muy bien. Yo le debo todo lo que sé, le debo toda mi vida. Renegar de ese pasado sería renegar de mi vida», dijo Rubén Osvaldo Bufano al Diario de Cuyo, el jueves 22 de agosto de 1996.

Aquella declaración fue consecuencia de la denuncia que hiciera el entonces diputado nacional por el socialismo, Alfredo Bravo, sobre la actividad del represor en democracia a través de su empresa Oeste, Vigilancia y Seguridad (OVYS) que prestaba sus servicios a la Asociación de Obras Sociales (ADOS) y a Edessa, la firma que se había quedado con la privatización del suministro de electricidad en la provincia de San Juan en tiempos del gobierno de Jorge Escobar.

«Bufano fue la cara visible de la empresa OVYS en los '90. Esa firma custodió el sanatorio Almirante Brown el día que la psicóloga María Rosa Pacheco de Balamaceda fue vista por última vez. Ella desapareció el 2 de junio de 1996», escribió el periodista Daniel Tejada en el Diario de Cuyo. Dos meses después, llegó el repudio público de Bravo a la presencia de Bufano.

El 24 de junio de 2004, la cara del secuestrador volvió a aparecer en el diario. Se pedía su captura como presunto partícipe de la llamada Masacre de Fátima, producida el 20 de agosto de 1976, cuando 30 personas alojadas en la Superintendencia de Seguridad Social de la Policía Federal fueron trasladadas en camiones y en un punto de la Ruta 8, a la altura del kilómetro 62, en un

paraje conocido como Fátima, en el partido bonaerense de Pilar, las fusilaron. El caso estaba siendo investigado por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral. En junio de 2004, entonces, ordenó la detención del agente del 601. Pero la causa tampoco prosperó.

Por vericuetos judiciales, Bufano gambeteó la causa, siguió en libertad y de regreso a San Juan encontró un buen puesto laboral: se convirtió, a través de la empresa Custo, en uno de los responsables de la seguridad privada de la Barrick Gold, que en octubre de 2005 había iniciado la explotación del yacimiento de oro, plata y cobre de Veladero, a 4000 metros de altura. El dato fue confirmado por dirigentes de la Asociación Obrera Minera de la Argentina, delegación San Juan y por profesionales de la ciudad y la región del noroeste argentino.

Tres empresas de seguridad privada son las que prestaron sus servicios a la poderosa Barrick: Custo, Prosegur y la actual El Guardián, a cargo del ex policía provincial Raúl Morán.

«Custo era una empresa que decía venir de Suiza. Allí, una de las personas que manejaba todo era Bufano. Lo conozco muy bien», dijo un dirigente de la Asociación Obrera Minera de San Juan a este cronista. Para cerciorarse del dato llamó a otro ex integrante de una fuerza de seguridad, también vinculado a la seguridad privada de la minera canadiense. Y es curioso, porque Bufano estaba en Suiza cuando fue detenido en 1982 y donde otros sobrevivientes de la dictadura también lo reconocieron como un infiltrado en distintas organizaciones políticas que trabajan desde el exilio.

Profesionales que hoy trabajan en la capital sanjuanina y en el noroeste argentino reconocieron al imputado de haber participado en el secuestro de Haroldo Conti como uno de los principales coordinadores de la seguridad privada de la Barrick en el yacimiento de Veladero.

Según el ex legislador provincial Diego Seguí, «cuando cualquiera quiere ir por el camino minero, o la llamada servidumbre

minera, no lo puede hacer, porque la empresa de seguridad privada de la Barrick impide el paso. Viene una requisa minuciosa y sólo se puede pasar si la autorización proviene de la empresa cuya sede no está en el cerro sino en la ciudad capital a casi 150 kilómetros de distancia. Ese es un camino provincial pero el control lo tiene la empresa».

Agrega que durante 2009 se llevó adelante una causa judicial que investigaba el origen de camionetas 4x4 que se vendían en Mendoza a precios extraños. «En realidad se trataba de vehículos robados, reducidos y que luego se rearmaban para ser vendidos en la provincia vecina. La investigación determinó que el origen de este material era el yacimiento de Veladero. Pero la justicia no llegó a nada, porque cuando la jueza que llevaba adelante la investigación quiso acceder al establecimiento, la seguridad privada de la firma no la dejó entrar. Es decir, un poder por encima de la propia justicia provincial. Fue un escándalo, pero no pasó más nada», agregó Seguí.

El periodista del diario Huarpe, Ernesto Simón, dice que no se sorprendería si reaparece Bufano como jefe de seguridad de la Barrick. «Recuerdo que Bufano era propietario de dos estaciones de servicio Raza, en pleno centro sanjuanino. También es conocida su participación en los sucesos relacionados con la desaparición de la psicóloga Pacheco. El problema es que Bufano actúa detrás de alguna otra persona, porque sabe que su pasado se conoce. Debe andar bien camuflado», apunta.

La jueza de ejecución penal de la provincia, Margarita Camus, integrante del Centro de Estudios Legales y Sociales, señala: «Hace más de cuatro años que pedí informes sobre las causas judiciales que lo involucran a Bufano y para mi sorpresa saltó que la orden de detención que se había librado en su contra estaba sin efecto». Dice que el reciclaje de Bufano se dio a través de la agencia de seguridad OVYS, la protección de los sanatorios y clínicas como ADOS y que su nombre volvió a estar sobre el

tapete con la desaparición de la psicóloga Pacheco. «Una mujer que trabaja con chicos que sabían del negocio del narcotráfico acá en San Juan. Bufano fue investigado, la causa quedó en nada y realmente tuvo ribetes escandalosos. Lo que tiene que quedar claro es que toda esta gente siguió haciendo lo que hacía antes. Ninguno de ellos se puso un comedor...», ironiza Camus.

Mientras la minera factura más de 4200 pesos por minuto, Bufano, experto en seguridad e inteligencia, camina con tranquilidad por las calles céntricas de San Juan. Sabe que la multinacional está custodiada por expertos muy parecidos a él mismo.

Tiempo después de aquella nota, la jueza Alicia Vence, del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de San Martín N° 2, procesó, sin prisión preventiva, a tres ex directivos de la empresa Ford, por la causa en la que se investigan los secuestros de 24 obreros de esa automotriz, ocurridos entre marzo y agosto de 1976.

En tanto, en San Juan fue detenido Rubén Bufano, acusado de ser uno de los responsables del secuestro y desaparición del escritor y periodista Haroldo Conti y de haber participado en la llamada Masacre de Fátima en Pilar. Actualmente, era el responsable de seguridad de la minera Barrick Gold.

«Bufano es un personaje de los tantos personajes oscuros que han pasado por esta bendita 'Barrica' y este gobierno que tenemos en San Juan. Era el jefe de la seguridad de quienes controlaban la seguridad y los controles de la Barrica, estaba a cargo de la empresa Pro Segur, fue la primera empresa que se contrató. En el momento en que esto sale a la luz, hace cuatro años empezamos a saber de esta persona. Antes sabíamos su nombre pero no el personaje siniestro que era. Se manejaba de una manera muy cómoda, con total impunidad, paseaba por las calles de San Juan muy tranquilo pero desde hace algunos años cuando se empezó a investigar y a saber lo que realmente había pasado se hizo una investigación, vino Carlos del Frade me acuerdo y esta

persona dejó de andar por los lugares habituales por los que andaba normalmente. Acá las informaciones en San Juan son muy escasas y como todos sabemos nos limitan mucho la información. Solo sabemos que fue detenido pero no tenemos detalles porque en los medios de acá no se informó», declaró José Leiva, de la Organización Sindical Mineros Argentinos (OSMA-CTA), en una entrevista con la Agencia ACTA.

La balada del reciclado

27 de mayo de 2013

—Uno se pregunta si no es una tarea inútil la nuestra, eso de escribir fatigosamente, de atornillarse a una silla sin saber si vamos a trascender ese acto individual y llegar a un público. A veces ocurre que las ganas de escribir son como una enfermedad y uno escribe para curarse. He dicho muchas veces que yo no escribo la Historia sino las historias de las gentes, de los hombres concretos. Escribo para rescatar hechos, para rescatarme a mí mismo.

Podría decirles más: creo que toda mi obra es una obsesiva lucha contra el tiempo, contra el olvido de los seres y las cosas. Uno siente que envejece, que se va y quiere que algunas cosas, de alguna manera, permanezcan. Es una cuestión, diríamos, metafísica, y determina todo lo que escribo —dijo alguna vez uno de los mejores escritores de lengua española, Haroldo Conti, desaparecido el 5 de mayo de 1976.

Treinta y siete años después, permanecen los relatos de Haroldo y también permanecía la impunidad de uno de sus aparentes secuestradores. El jueves 16 de mayo pasado, Rubén Osvaldo Bufano, un ex agente de Inteligencia del Batallón 601 del Ejército, fue detenido en su domicilio de la calle Santa Rosa, del Barrio Centinela II, en Rivadavia, San Juan, y trasladado a la Capital Federal, donde fue puesto a disposición del juez federal Gonella.

Se lo acusa a Bufano, entre otros cargos, de haber participado en una asociación criminal que secuestraba empresarios para pedir rescates a fines de los '70 y comienzos de los '80. De hecho, fue una vez capturado en Suiza al intentar cobrar el rescate por Fernando Combal, y luego extraditado a la Argentina, donde se lo excarceló por «falta de méritos» y finalmente se lo desprocesó, con fallo de la Corte Suprema. En el informe de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, «Nunca Más», Bufano aparece como uno de los responsables del secuestro de Haroldo Conti asumiendo la personalidad de un compañero de militancia, hecho desmentido por Marcelo Conti, uno de los hijos de Haroldo en diálogo con este cronista.

En el año 2010, este cronista escribió que Bufano coordinó las tareas de la seguridad privada de la Barrick Gold en el yacimiento Veladero, en la provincia de San Juan, a partir de 2006, confirmaron fuentes sindicales y profesionales de aquella capital cuyana. Hoy, el ahora empresario del rubro intenta obtener una cátedra sobre «inteligencia y seguridad» en la Universidad Católica de San Juan, según confiaron militantes de Derechos Humanos.

El reciclaje de Bufano, también acusado de haber participado en la llamada Masacre de Fátima, en Pilar, provincia de Buenos Aires, se inscribe en la lógica de la policía particular de la multinacional minera que, en estos días, volvió a ser denunciada por «perseguir» y «escuchar los llamados telefónicos» de los ambientalistas de la Unión de Asambleas Ciudadanas.

Ramón Gómez Medero, integrante de la Unión de Asambleas Ambientales de San Juan, sostiene que «la cuestión de la policía privada de la Barrick es un secreto que circula. En realidad, la mano de obra barata y sucia que trabaja para la empresa es la mismísima policía provincial. Pero el trabajo del seguimiento, las escuchas y las amenazas contra nosotros proviene de este tipo de expertos.» Agrega que, cuando se hacían las movilizaciones en contra de las mineras a cielo abierto, Barrick tenía su ofici-

na en pleno centro sanjuanino. «Desde allí hemos visto personas muy altas y rubias que no eran de acá y que formaban parte de esa seguridad privada. Los informes que nosotros tenemos nos dicen que se trata de hombres que formaron parte de conflictos bélicos internacionales, más precisamente que estuvieron en la guerra de Irak. Parece una película de ciencia ficción pero no lo es», dice Ramón.

Para el militante, fundador de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de la capital cuyana, Eloy Camus, también autor del libro «Historia de víctimas del terrorismo de Estado. San Juan, Argentina», Bufano llegó a la ciudad de la mano de Jorge Escobar, «el Fujimori de Menem, empresario exitoso que iba a generar un buen gobierno. En ese momento junto a un cabo del Ejército, Obredor, Bufano fundó OVYS y con esta empresa de seguridad empezaron a recibir los beneficios del gobierno de Escobar, que le daba a proteger las empresas del Estado, las privatizadas y de algunos sanatorios, como ADOS, entre otros establecimientos. Bufano está apañado por ese poder menemista que existe todavía en San Juan». Y agregaba que Bufano «camina libremente por las calles de San Juan como si fuera un señorón a pesar de que muchos sabemos de su pasado»

La presencia de Bufano en los planteles de seguridad privada de la Barrick reactualiza la historia de La Forestal, otra transnacional dedicada a la explotación de los recursos naturales, que durante los años veinte del siglo pasado armó a su propia policía, la «gendarmería volante», también llamada «Los Cardenales», con el apoyo del gobierno de Santa Fe.

Barrick Argentina respondió a través de Dante M. Ramos, por entonces director de Asuntos Corporativos, diciendo que «la empresa de seguridad Custo prestó servicios de seguridad en la operación minera Veladero durante los años 2004 y 2005. Durante eses período, ninguna persona llamada Rubén Osvaldo Bufano prestó servicios a Barrick en nombre de dicha compañía. Y,

hasta donde es de nuestro conocimiento, la misma no pertenecía a dicha compañía en aquel entonces». El párrafo es muy interesante porque revela el estrecho conocimiento de parte de la Barrick de la vida laboral y profesional de Bufano. Un saber que solamente puede ser hijo de una relación aceitada.

Hoy la Barrick, suspendida en Chile por su contaminación, sigue funcionando en la Argentina con el apoyo de la presidenta de la Nación y el gobernador de San Juan. Durante 2012 facturó 6.221 millones de pesos y ganó 2.409 millones de pesos netos. Una utilidad de más de 278 mil pesos por hora.

Según José Leiva, secretario general de la Organización Sindical Mineros Argentinos, de San Juan, «Bufano es un personaje de los tantos personajes oscuros que han pasado por esta bendita «Barrica» y este gobierno que tenemos acá en San Juan. Bufano era el jefe de la seguridad de quienes controlaban la Barrica, estaba a cargo de la empresa Pro Segur, fue la primera empresa que se contrató. Se manejaba de una manera muy cómoda, con total impunidad, paseaba por las calles de San Juan muy tranquilo pero desde hace algunos años cuando se empezó a investigar y a saber lo que realmente había pasado se hizo una investigación y esta persona dejó de andar por los lugares habituales por los que andaba normalmente», sostuvo Leiva.

La impunidad de Bufano parece haber llegado a su fin. La cuestión es la impunidad de los demás represores reciclados y aquellos que los manejan, los verdaderos titiriteros. Esos intereses para los que no hay mucha diferencia entre dictaduras y democracias.

Fuentes: Investigación periodística del autor de esta crónica; carta de la Barrick del 7 de diciembre de 2010; agencia ACTA, de la CTA; entrevista a Marcelo Haroldo Conti, el martes 21 de mayo de 2013 en el programa «Radiohistorias», de Radio Universidad de Rosario y diarios regionales. •

Otro que inventó la muerte (Gazari Barroso)

En agosto de 2008, escribimos: «Julián Gazari Barroso era uno de los represores más buscados del Segundo Cuerpo de Ejército. Fue dado por muerto durante años, pero detectado en el departamento que declaró como su domicilio, en Capital Federal, apenas finalizada la dictadura. Fue detenido por orden de la Justicia Federal en marzo pasado e indagado por su rol como jefe del área Operaciones del Segundo Cuerpo de Ejército, entre 1976 y 1977, primero bajo las órdenes de Ramón Genaro Díaz Bessone y después de Leopoldo Fortunato Galtieri. El militar retirado está imputado en tres causas por las desapariciones de Sonia Beatriz González y Rubén Tito Messiez, y por ser miembro de una asociación ilícita».

—Ay, Julián para qué le dije que estabas... —se lamenta la señora del otro lado de la línea. Son las 12.36 del sábado 14 de julio de 2007. El cronista llama desde Rosario al (011) 47859675, el domicilio del «coronel» Julián Gazari Barroso, jefe del área Operaciones del Comando del Segundo Cuerpo de Ejército con asiento en Rosario y jurisdicción sobre las provincias de Santa Fe, Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes y Entre Ríos, entre 1976 y 1977.

Hay unos segundos de silencio...

—Hola, ¿quién habla? —pregunta una voz cansada, casi cascada que denota un hombre mayor. Me presento como periodista de investigación y le digo que su nombre está en la Justicia Federal rosarina vinculado con los delitos cometidos durante los días de Ramón Genaro Díaz Bessone como comandante de Segundo Cuerpo.

—Es la primera noticia que tengo —dice el «coronel».

—Sin embargo usted hizo presentaciones judiciales en el año 1987 para no venir a declarar a Rosario y estableció como domicilio la sede del Comando, en Sarmiento al 1300.

—Nunca se me acusó de nada...

—Pero usted está imputado en las causas.

—Mire... una vez el presidente del Partido Comunista habló de que había detenidos por la subversión en tal lugar y nosotros ordenamos investigar y no había nada... Desde entonces nunca tuve noticias de algo así.

—Sin embargo usted formaba parte del Comando del Segun-

do Cuerpo en tiempos de la dictadura...

—Pero ahora vivo en Buenos Aires... En fin, es la primera noticia que tengo sobre este tipo de cosas... La verdad es que no se si habrá todavía algún papelito dando vueltas por ahí... Nunca tuve ninguna acusación —repite quien fuera el titular del área Operaciones en los tiempos más duros del terrorismo de Estado.

—A usted se le imputa haber participado de la desaparición de Sonia Beatriz González.

—¿Quién...? No me suena para nada...

—¿Usted va a venir a declarar a Rosario cuando se lo cite?

—Eso no lo decido yo... Pero si me llaman, seguramente iré... Es la primera noticia que tengo. En algún momento estuvieron respondiendo Luciano Jáuregui, que en paz descanse, y también Galtieri... (Ahora se escucha la voz de la mujer que le dice: —No hablés más, Julián. Y el «coronel» que le contesta: —No pasa nada).

—¿Usted dice que jamás participó de hechos aberrantes?

—En absoluto. Siempre me he comportado bien, durante toda mi vida.

—Sin embargo usted es consciente de que se produjeron hechos aberrantes mientras trabajaba en el Comando del Segundo Cuerpo de Ejército.

—No les diría así... Se cometieron algunos excesos de parte de alguna gente de las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad.

Ahora el «coronel» pide el nombre del cronista, dice no tener computadora y solicita el número de teléfono del entrevistador. Se los doy.

Gazari Barroso no está muerto ni perdido como se decía desde hace años en los Tribunales Federales de la ciudad de Rosario. Nadie lo quiso encontrar... por lo menos hasta ahora.

De huéspedes y anfitriones

«B. A. Homestay es una organización fundada por María Luisa Etiennot desde hace más de 15 años, brindando alojamiento en la Argentina a estudiantes, profesores y empresarios; ya sea en casas de familias o con alquileres temporarios», dice la página oficial de la empresa que se ofrece como anfitrión de visitantes extranjeros el domicilio del ex jefe de Operaciones del Comando del Segundo Cuerpo de Ejército, Julián Gazari Barroso.

La firma sostiene que «durante este tiempo» dieron «alojamiento a unas 1.300 personas que han sido hospedadas en 350 casas de familia», una de ellas el hogar del militar.

«B. A. Homestay está compuesto por un grupo de profesionales interdisciplinarios que reúnen 15 años de experiencia y prestigio en el área de intercambios internacionales», asegura el sitio web www.bahomestay.com.ar

En el apartado dedicado a los anfitriones, se puede leer: «Si usted tiene comodidades en su casa y desea enriquecer su experiencia y la de sus hijos, puede contar con B. A. Homestay para que lo contacte con extranjeros que además de conocer nuestro país, desean conocer su gente y su cultura viviendo con una familia argentina. A través de B. A. Homestay, usted se asegura recibir personas de acuerdo con sus expectativas y la posibilidad de un responsable de residencia permanente en el país. Desde hace más de 15 años, que B. A. Homestay ayuda a cambiar las vidas de más de 350 familias argentinas que han recibido más de 1.300 estudiantes y profesionales. Si quiere ser una de las familias que trabajan con B. A. Homestay o quiere más información sobre esta posibilidad; no deje de contactarse con nosotros o nosotros

nos contactaremos con usted si nos envía el formulario en línea, o el archivo del formulario por correo (no todos los datos son necesarios, pero cuanto mayor información nos brinde mejor le podremos ayudar)».

Con respecto al alojamiento en casas de familia, B. A. Homestay sostiene: «Le permite al huésped compartir con una familia argentina sus costumbres, pudiendo así comprender mejor nuestra cultura; como así también practicar el idioma y recibir de la familia toda la contención y cuidados necesarios para que capitalice dicha experiencia».

El servicio incluye, entre otras cosas, «selección personalizada de cada familia para el huésped; sugerencias para una mejor convivencia; asistencia a los alumnos y familia ante cualquier duda que tengan sobre la convivencia» y «feedback de los huéspedes y las familias».

Prometen «una evaluación» de todas las actividades con el objetivo de «medir la satisfacción del estudiante y poder realimentar» el proceso de mejora continua.

En ninguno de los puntos en los que piden evaluar al potencial anfitrión existe la posibilidad de identificar el domicilio de un represor. Queda claro que eso debería ser función de la Justicia Federal y otros organismos nacionales.

Sin embargo, la empresa ya sabe desde hace un tiempo qué tipo de personaje es Gazari Barroso porque ha recibido la inquietud de varios huéspedes. La respuesta fue mudarlos de casa. •

Capítulo 5
El origen del narcotráfico en la Argentina

El narcotráfico comenzó siendo un negocio paraestatal de la dictadura argentina a partir de las relaciones tejidas desde el Segundo Cuerpo de Ejército, con asiento en Rosario y jurisdicción sobre las provincias de Santa Fe, Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes y Entre Ríos. Eran los tiempos de Leopoldo Fortunato Galtieri, Jorge Videla y Emilio Massera, por un lado; y los altos oficiales del ejército boliviano que luego desatarían la dictadura del 17 de julio de 1980, general Luis García Meza y coronel Luis Arce Gómez.

Así se desprende de la declaración de un ex integrante del Servicio de Inteligencia del Ejército argentino realizada en Brasil en el año 2009 y que, por primera vez, es publicado en esta nota. De tal forma, los primeros envíos masivos de cocaína a través de la ruta 34 fueron la consecuencia de un acuerdo que venía estableciéndose, por lo menos, desde los tiempos del Mundial de 1978, entre funcionarios de las dictaduras de Hugo Banzer y Videla.

Esta es la historia que sigue desarrollándose por estos días en las geografías de Buenos Aires, Rosario y Córdoba, entre otros centros urbanos. Y como todo gran negocio capitalista, de arriba hacia abajo y con complicidades en los diferentes nichos de corrupción de los distintos gobiernos. •

La memoria de los represores

El 10 de diciembre de 1998, el entonces comisario principal José Rubén Lo Fiego, fue puesto a disponibilidad por la resolución 879 del gobierno provincial. Estaba imputado de 68 delitos de lesa humanidad y fue el principal torturador del Servicio de Informaciones de la Unidad Regional II, entre 1976 y 1979. El «Ciego» o «Mengele», habló en tres ocasiones con este cronista entre setiembre y diciembre de 1997 en su despacho del área Logística, en el subsuelo de la ex Jefatura de Policía, justo en la ochava de Santa Fe y Moreno. No está arrepentido de nada y sus diálogos con los periodistas apuntan a relativizar su siniestra historia personal.

Lo que sigue es un resumen de aquellos encuentros.

—Vamos a ahorrarnos algunas cosas. Sé quién es usted. ¿Dónde están los cuerpos de los desaparecidos y qué hicieron con los chicos nacidos en cautiverio? —fue la pregunta que sintetizó la primera entrevista.

—No sé nada de eso —contestó Lo Fiego en su despacho adornado con un poster del equipo de Central ganador de la Conmebol de 1995.

—Me gustaría saber quiénes fueron los apoyos políticos y económicos que los manejaban a ustedes.

—No se consiguió todo a través de la tortura. Acá mucha gente jugaba al superagente y en todos lados había un terrorista. Colaboracionismo. Hubo mucho colaboracionismo. Trate de grabar esa palabra en su memoria. Más allá de lo que usted piensa. Lo peor de todo es la conspiración de los idiotas —dice en referencia de otros oficiales de la policía.

—Había una presión insoportable de parte del comando. La formación la obtuve por las mías. Ahora hay una cultura light. Acepto la tortura, pero no el robo ni la droga —admitió el 9 de diciembre de 1997, en comparación con otros policías. —Tampoco

soy un matasiete —agregó ese día mientras tomaba mate haciendo alusión a una palabra que surgió en la literatura nacional en *El Matadero*, el cuento de Esteban Echeverría en el que denunciaba las atrocidades de la policía rosista, «la mazorca».

Esta crónica fue publicada en nuestro libro «El Rosario de Galtieri y Feced», del 2000 y también formó parte del primer tomo de «Ciudad blanca, crónica negra. Historia política del narcotráfico en el Gran Rosario», publicado durante el mismo año.

Lo Fiego daba a entender que él se lavaba las manos de la sangre de los torturados y que luego escribía los partes al Comando del Segundo Cuerpo de Ejército, en los días de Ramón Genaro Díaz Bessone y Leopoldo Fortunato Galtieri, sin necesidad de recurrir a algún tipo de apoyo químico. Sin embargo, algunos de sus compañeros de torturas sí necesitaban «de la blanca que venía del Comando», tal como lo sugirió en aquel encuentro. •

El negocio paraestatal

En forma paralela a aquellos recuerdos de Lo Fiego, Gustavo Bueno, ex oficial de la policía rosarina desde 1971 a 1975, fue convocado al Comando del Segundo Cuerpo de Ejército en 1977.

Luego lo enviaron a un área de «preconflicto entre la Argentina y Chile.

Hacia 1978 volvió a Rosario «para ejercer actividades de inteligencia en el Destacamento de Inteligencia 121, en el sector llamado AEI —Actividades Especiales de Inteligencia—, donde había estado desde 1975.

Bueno, en medio de estas idas y vueltas, trabajó durante dos años junto al entonces coronel Oscar Pascual Guerrieri en el llamado Grupo de Operaciones Especiales (OE).

Muchos años después, en el contexto del juicio por delitos de lesa humanidad, Gustavo Bueno (integrante del Servicio de Informaciones del Ejército Argentino, dependiente del segundo jefe del Destacamento de Inteligencia 121, el entonces teniente coronel Pascual Oscar Guerrieri) confesó que el alto jefe militar estaba en el negocio paraestatal del narcotráfico. Lo hizo ante el doctor Otmar Paulucci, presidente del Tribunal Oral Federal Nº 1 de Rosario, en la ciudad de Belem, estado de Pará, en la República Federativa de Brasil, el lunes 30 de noviembre de 2009.

La primera mención a esta declaración apareció el domingo 13 de diciembre de 2009 en el diario Rosario/12 a través de una nota del periodista José Maggi. Ahora, por primera vez, se publica la copia en castellano de los dichos de Bueno en la sede policial brasileña:

—...Sí, Guerrieri estaba vinculado al tráfico de cocaína. Estaba vinculado a Arce Gómez y García Meza. Había una interna en la época de elección de Galtieri, que desplazó a Viola. Había plata que trajeron de los cocacoleros de Bolivia. Tenía que liberar el norte de Argentina. Otro del acuerdo era Noriega, del que

se encargaron otros servicios de otros países. El organizó cosas muchas veces en mi contra. En Rosario fue en varias veces —sostuvo Bueno quien goza de un tratamiento muy especial en Brasil, según constató el juez Paulucci.

El 2 de diciembre de 2009, Bueno agregó que «en principio, Oscar Guerrieri dijo que el grupo especial tenía por objetivo combatir a los Montoneros. Que el declarante entró en conflicto con ese grupo porque no aceptó los desvíos de conducta de Guerrieri. Que el declarante desempeñaba actividades de contrainteligencia y, en ese trabajo, investigó al teniente coronel Oscar Pascual Guerrieri y a otros, por supuesto involucramiento con oficiales del ejército boliviano relacionados al tráfico. Que se quedó trabajando en el sector de Actividades Especiales de Inteligencia hasta noviembre de 1979... y que en noviembre de 1979 salió de la Argentina al entender que el coronel Guerrieri quería ejecutarlo... que en 1979 el declarante salió a pie de Rosario, dejando su arma y su credencial y vino a Brasil...».

Guerrieri se desempeñó desde el 6 de diciembre de 1976 hasta el 26 de enero de 1979 en el Destacamento de Inteligencia 121 del Comando del Segundo Cuerpo de Ejército con asiento en Rosario. Fue ascendido a teniente coronel el 31 de diciembre de 1976. Revistaba como segundo jefe, un escalón por debajo de Edgardo Alcides Juvenal Pozzi, titular del Destacamento de Inteligencia. Fue condenado por crímenes de lesa humanidad a perpetua porque quedó establecido que tenía «absoluto dominio de la puesta en marcha de los operativos, sobre las líneas concretas que debía seguir la inteligencia represiva, sobre la 'evaluación' de los secuestrados y su permanencia en los centros clandestinos de detención, sobre la metodología y lugar de cautiverio y, en definitiva, sobre el destino final de las víctimas». Era el mayor «Jorge» en la Quinta de Funes, descripta en *Recuerdo de la muerte*, de Miguel Bonasso. Junto a él, en aquellos días, estaba «Gustavo» que no era otro que Gustavo Bueno. •

La conexión boliviana

Roberto Suárez Gómez, el llamado «Rey de la cocaína», proveedor nada menos que de Pablo Escobar Gaviria, «acusó a la coalición de gobierno de Paz Estensoro y Banzer Suárez, además de todos los anteriores gobernantes del país desde finales de la década del setenta, de ser y haber sido cómplices del narcotráfico bajo la protección de la CIA y la anuencia del gobierno de los Estados Unidos de América, supervisada por medio de su embajada en el país», cuenta su ex mujer, Ayda Levy, en su libro *El Rey de la Cocaína. Mi vida con Roberto Suárez Gómez y el nacimiento del primer narcoestado*.

La mujer sostuvo, además, que «en el mes de febrero de 1980 viajaron a la ciudad de Buenos Aires, el ex ministro de Agricultura Marcelo Ibáñez, Klaus Altmann y un agente de la CIA, de apellido Perou, para reunirse con los miembros de la Junta Militar que gobernaba la Argentina desde 1976. Su misión era lograr el apoyo de nuestros vecinos al golpe de Estado que se gestaba en Bolivia. Los emisarios cumplieron su mandato a cabalidad. La junta de comandantes, dirigida por el general Jorge Rafael Videla, dio su total respaldo al proyecto. Las alas del tenebroso Plan Cóndor se extenderían hasta nuestro país», expresó Ayda Levy.

La señora explica que el principal argumento que desarrollaba su marido era que «al ser Bolivia un país monoproductor minero, ante la caída del precio del estaño en los mercados internacionales la coca era el único recurso estratégico renovable que le quedaba al gobierno para sacar al país del subdesarrollo y saciar el hambre del pueblo». Estaba completamente seguro de que podíamos pagar en treinta y seis meses la deuda externa del país que, por esos años ascendía a tres mil millones de dólares americanos. Finalmente, para tratar de convencerme, me dijo: «Los gringos siempre manejan un doble discurso y tienen una falsa moral. Te doy sólo dos ejemplos para comprobar la veracidad de

lo que te estoy diciendo: los cigarrillos que fabrica la tabacalera Philip Morris y las armas que fabrica Smith & Wesson, que se venden sin control en los Estados Unidos, matan anualmente a más gente que la cocaína», se puede leer en otro párrafo del libro mencionado.

El testimonio de Ayda Levy y las confesiones de Lo Fiego y Gustavo Bueno dan cuenta de una serie de relaciones que ve-

nía estableciendo la dictadura de Videla con sus pares bolivianos desde antes del narcogolpe del 17 de julio de 1980.

Contactos que tuvieron su mayor desarrollo alrededor de la llamada zona franca boliviana en el puerto rosarino. •

Los contactos de Massera y Galtieri

«Los comandantes en jefe de las Armadas de la Argentina y Bolivia, almirante Eduardo Emilio Massera y vicealmirante Gutenberg Barroso Hurtado, respectivamente, presidieron en la mañana de ayer el acto de recepción en la zona franca de Bolivia, en el puerto de Rosario, del buque *Libertador Simón Bolívar*, escribió el diario La Prensa, el 25 de abril de 1978.

Se leyó un mensaje del entonces presidente del país hermano, Hugo Banzer Suárez, donde destacaba que «es el primer barco boliviano que surca el océano, llevando en el corazón de sus tripulantes la esperanza de un pueblo que a pesar de todas las adversidades, jamás renunciará al derecho de volver soberanamente al Pacífico».

Junto al almirante Massera estaba el comandante del Segundo Cuerpo de Ejército, Leopoldo Fortunato Galtieri.

«América tiene un significado en el mundo de hoy, con una Europa convulsionada con el terrorismo que ya pasó por acá; donde hay un Medio Oriente también convulsionado entre grupos y grupos, en los que yo diría que nadie sabe quién es quién. Latinoamérica significa una cosa nueva. Una cosa más profunda...», filosofó Massera ante los periodistas.

Por su parte, el vicealmirante boliviano Barroso Hurtado sostuvo: «Nada habría sido más significativo para mi país que recibir al buque transporte *Libertador Simón Bolívar* entrando en aguas y puerto bolivianos. Ello no pudo ser, como lo esperaba América a los casi cien años del encierro asfixiante que sufre mi patria. Pero frente a la incomprensión que todavía ensombrece el horizonte del destino continental, felizmente surge la palabra amiga, el respaldo solidario, la tierra que se brinda...», agradeció el oficial de la armada de la dictadura de Banzer Suárez, aquella que ya comenzaba a comercializar los productos de Suárez Gómez, el «rey de la cocaína», tal como lo expresó su mujer Ayda Levy.

La zona franca de Bolivia en el puerto rosarino fue el resultado de un convenio suscripto el 4 de junio de 1969 por el que se cedieron 55 mil metros cuadrados y que tenía previsto realizar el primer embarque en febrero de 1973 consistente en 25 mil toneladas de algodón hacia Japón. Después vendrían exportaciones de azúcar a los Estados Unidos, madera a Europa y minerales.

Uno de los principales impulsores de los acuerdos en torno a la utilización de la zona franca en el puerto rosarino era Waldo Cerruto Calderón de la Barca que sería luego embajador durante la narcodictadura de Luis García Meza y Luis Arce Gómez.

Otro de los que fogoneaba los encuentros con los referentes rosarinos de la dictadura argentina era el entonces director general de Política Exterior de Bolivia, el embajador de Hugo Banzer, Javier Murillo de la Rocha.

El 6 de julio de 1976, el vicealmirante retirado, Jorge Aníbal Desimoni, a cargo del gobierno de la provincia de Santa Fe, recibió a representantes de la dictadura de Hugo Banzer Suárez para hacer entrega formal de la zona franca del puerto rosarino.

Entre ellos estaba Raúl Tejerina Barrientos, agregado militar, uno de los principales integrantes del Plan Cóndor, corresponsable del asesinato del General Juan José Torres, cometido en Buenos Aires el 2 de junio de 1976 y señalado como uno de los más hábiles cerebros del negocio paraestatal del narcotráfico, según señalan las excelentes investigaciones de Martín Sivak (*El asesinato de Juan José Torres: Banzer y el Mercosur de la muerte*) y Román Lejtman (*Narcogate*).

Los negocios de Banzer con la dictadura argentina fueron continuados y profundizados durante los tiempos de la narcodictadura de García Meza. Por eso hubo reciclaje de funcionarios y, en forma paralela, la zona franca del puerto rosarino siempre apareció como excusa para desarrollarlo como cabecera de playa.

Por eso la confesión del ex servicio de inteligencia del Ejército argentino, Gustavo Bueno, termina siendo la confirmación

del inicio del negocio paraestatal del narcotráfico desde la región del Gran Rosario.

No fue casualidad que a principios de 1979, Leopoldo Galtieri saltara al Primer Cuerpo de Ejército y luego a la presidencia en reemplazo de Roberto Eduardo Viola.

Galtieri no solamente tuvo el apoyo de los grandes empresarios del sur de la provincia de Santa Fe sino también del narcoestado construido por las dictaduras de Banzer y García Meza.

Quizás por eso Galtieri sostuvo, alguna vez: «En Bolivia yo decido a quién y cuándo poner en el poder y cuándo sacarlo».

Quizás por eso Pascual Guerrieri, el nexo entre ambas dictaduras, en uno de sus alegatos en los juicios de lesa humanidad llevados a cabo en Rosario, ofrecía sus servicios, su larga experiencia y preparación para combatir al narcotráfico.

De allí que la confesión de Gustavo Bueno prueba que el negocio del narcotráfico es, desde su origen, paraestatal y que, como muchas actividades económicas ilegales del presente, comenzó en los tiempos del terrorismo de Estado. Desde una geografía estratégica que no por casualidad sufre las consecuencias de tanta impunidad acumulada durante años: la región del Gran Rosario. •

Capítulo 6

40 x 40
Números y frases para pensar los 40 años del golpe de estado de 1976

1. 20 mil fábricas fueron cerradas en esos días.

«El empresariado argentino ha crecido y está decidido a aceptar el desafío que significa la reconstrucción de la república. Por ello estamos aquí reunidos, para conocer el pensamiento de las fuerzas armadas y poder así reflexionar sobre la naturaleza de sus designios, determinando la dimensión exacta de nuestra responsabilidad empresarial», dijo un exultante representante de la Federación Gremial de la Industria y Comercio de Rosario, José Luis Pinasco, en octubre de 1977 al recibir a Díaz Bessone.

El militar no se quedó atrás: «Los empresarios forman uno de los primeros sectores que constituyen la nación día a día. Acaso por eso fueron uno de los blancos predilectos de la agresión

criminal de las hordas marxistas. Por eso la responsabilidad moral es la otra gran vertiente de esta eminente función social, y comienza dentro de la misma empresa. Allí los derechos ceden su lugar a los deberes. Defender la empresa y la propiedad privada contra agresores de toda índole es el primer deber», sostuvo en una clara conciencia del rol de los militares como celadores del gran capital.

2. 30 mil detenidos desaparecidos.

Walter Klein, socio de Martínez de Hoz, años después, fue mucho más contundente frente a la embajada de los Estados Unidos: «Quédense tranquilos, todos los activistas gremiales de Villa Constitución ya están bajo tierra».

Rodolfo Peregrino Fernández, ex comisario de la Policía Federal relató ante la Comisión Argentina de Derechos Humanos, en 1983, que «otra represión notoria de la Triple A fue la ejercida contra los activistas sindicales de Villa Constitución».

Esa «operación fue dirigida por el comisario Antonio Fiscchietti, alias El Padrino o Don Chicho. Fiscchietti fue reclutado para integrarse en la AAA siendo delegado de la Policía Federal Argentina en la provincia de Tucumán».

Sostuvo que «las patronales de las industrias metalúrgicas instaladas allí, en forma destacada el presidente del directorio de Acindar, ingeniero Arturo Acevedo, establecieron una estrecha vinculación con las fuerzas policiales mediante pagos extraordinarios en dinero».

Remarcó que «el presidente de Metcon, por ejemplo, retribuía con una paga extra de 150 dólares diarios al oficial de policía que dirigía su custodia personal, por un servicio de vigilancia no superior a las seis horas de duración».

Acindar «pagaba a todo el personal policial, jefes, suboficiales y tropa, un plus extra en dinero, suplementario al propio plus que percibían ya del Estado esos efectivos. El pago estaba a cargo del jefe del Personal, Pedro Aznarez y del jefe de Relaciones Laborales, Roberto Pellegrini».

Agregó que «Acindar se convirtió en una especie de fortaleza militar con cercos de alambres de púas. Los oficiales policiales que custodiaban la fábrica se alojaban en las casas reservadas para los ejecutivos de la empresa...».

3. 923 procesados en los juicios de delitos de lesa humanidad.

«...estas organizaciones trabajan sin tener en cuenta el tiempo, el tiempo para ellos es secundario, no nos extrañemos que empiecen, no ahora, sino en una fecha relativamente corta, larga, pero van a volver porque les queda todavía... por empezar que ha sido histórico, una etapa de venganza personal, una venganza personal, como ocurrió con ese teniente coronel que fue a reprimir allá en el sur, en la Patagonia trágica y después lo mataron acá en el centro de Buenos Aires... Varela y lo mató un terrorista extranjero...», declaró Agustín Feced el 11 de setiembre de 1984 ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas.

Feced se sentía la continuidad de Varela, el represor de los huelguistas del año '21 en la Patagonia. Una clara definición del objetivo del terrorismo de estado.

4. 500 chicos secuestrados

Leyla Perazzo era la jefa de la policía de menores durante la dictadura en la ciudad de Rosario, bajo las órdenes de Agustín Feced. Con la democracia llegó a ser la titular de la Policía de la Provincia de Santa Fe, durante una de las administraciones de Jorge Obeid. En una entrevista a principios del año 2000, sostuvo que nunca se va a olvidar de la cara de Cati. «Convivíamos con las niñas. La vi sufrir por esa niña, cuidarla. El juez la autorizó a llevarla a su casa. Si no, se hubiera muerto», remarcó Perazzo en diálogo con este cronista. «Es un episodio muy difícil de borrar. La he visto llorar cuando el juez le ordenó entregar esa nenita a la familia», agregó.

Perazzo defendió a las celadoras de la policía de menores durante la dictadura porque «hicieron un trabajo como seres humanos más allá del oficial, asumieron roles...».

«Yo estuve en la peor época... dos o tres años. En general las chicas (por las celadoras) salían a pedir ropa para los pibes. Los llevaban al médico. Hasta una persona como Feced, en una cuestión como la de los chicos, no se metió, dejó que los resolviera la justicia», indicó.

La policía «recibía un chico del comando y lo anotaba. Ese era un aspecto. Después estaban los grupos de tareas», diferenció la abogada.

«Llegamos a tener como sesenta, me acuerdo», confesó la funcionaria.

¿Quiénes eran esos sesenta chicos que ingresaron en la policía de menores de Rosario durante la dictadura? Esa pregunta, hasta ahora, sigue sin responderse.

5. 318 intendentes fueron dirigentes de la UCR durante la dictadura.

«El padre García me tuvo engañada tanto tiempo. Me decía que Sergio estaba bien, que como se había recibido ese año de agrónomo lo tenían trabajando de agrónomo en el campo, que estaba perfectamente y que de un momento a otro iba a estar con nosotros. Y me decía siempre ya falta menos, falta menos, ya va a llegar y un día, víspera de navidad, las navidades eran terribles para mi y siguen siendo, me dice Señora póngase contenta, vaya a su casa, prepárele la camita, ventílele toda la ropita, prepárele la comida que más le gusta porque esta navidad Sergio la pasa con ustedes. Yo me fui enloquecida a mi casa y empecé a hacer todo lo que él había dicho. Y me dispuse a esperarlo... y Sergio no llegó. El padre García era el secretario del obispo Bolatti y él se encargaba de dar falsas noticias a los familiares de los desaparecidos a cambio de regalos que él mismo nos pedía. Me acuerdo que un día me pidió un maletín de cuero y yo en ese momento no contaba con dinero porque había abandonado todas mis actividades, yo trabajaba en el comercio con mi esposo y me dediqué únicamente a buscar a Sergio, entonces no contaba con dinero y juntando las moneditas y fui y le compré el maletín y se lo regalé. Le llevaba vinos finísimos y como yo, desfilaban las madres porque a todas nos tenía igual. Hasta que un día me convencieron sobre lo que estaba pasando y yo nunca más le llevé regalitos pero tampoco tuve más audiencias», nos dijo la maravillosa Nelma Jalil, madre de la Plaza 25 de Mayo de Rosario antes de partir hacia la pampa de arriba.

6. 169 intendentes eran dirigentes del PJ durante la dictadura.

Ángel Dambrosio era el secretario de gobierno de Rosario una vez recuperada la democracia. Un día fue llamado por el gordo Flarte, a cargo del Ministerio de Trabajo en la ciudad. Tenía que arreglar el tema de la justicia provincial.

«Era una reunión de la justicia provincial, se hacía en el estudio Cerrutti. Con él tenía una buena relación porque había sido abogado de unas cooperativas de seguros que tenían seguros contratados y como él era abogado de todos los choferes de empresas de transporte, teníamos muchos juicios laborales. Ya en aquel entonces tenía un juzgado donde escribía desde el primer decreto hasta la sentencia. Pero teníamos una buena relación porque el 'Gringo' en el sentido cotidiano era un tipo que no te jodía... Cuando voy a la reunión, estaba el 'Gringo', nos saludamos. Había toda una serie de personajes, la mayoría de ellos desconocidos para mí, en un momento dado, Cerrutti se levanta y deja el lugar principal de su escritorio para que se siente alguien, era el dueño del sindicato que lo había puesto a Vernet, era Miguel Gómez, se sentó ahí. Estaba el gordo Flartes, Reynaldo, yo y dice: «Bueno, como se dieron los resultados en la provincia nosotros tenemos que armar una justicia de acuerdo a los votos», fue la primera y la última reunión que fui, no fui más, pero sé que los jueces fueron designados así... Me parece que el tema de la justicia en la provincia de Santa Fe es pavoroso, empieza en el '68, transcurre en esta anécdota que te cuento de Miguel Gómez y concluye en Usandizaga y Reuteman diciendo que hay que designar jueces amigos...»

El relato del primer secretario de gobierno de Rosario en democracia es una síntesis de lo que sucedió en las otras provincias del litoral.

7. 35 mil millones de dólares aumentó la deuda externa entre 1975 y 1983.

José Rubén Lo Fiego, alias el Ciego o doctor Mortensen, fue imputado por 68 delitos de lesa humanidad cuando se desempeñaba como el principal torturador del Servicio de Informaciones de la policía rosarina en los tiempos de Agustín Feced.

En su legajo personal consta que el 26 de julio de 1979 fue «felicitado por la superioridad por el procedimiento realizado en la Empresa fabril Petroquímica Argentina Sociedad Anónima».

A renglón seguido fue felicitado el 18 de agosto de 1977 por el comandante del II Cuerpo de Ejército, Leopoldo Fortunato Galtieri, «por el resultado de las investigaciones realizadas que permitieron los éxitos obtenidos por las fuerzas legales en los últimos días».

Oscar Mullet, uno de los principales referentes empresariales de PASA, fue uno de los impulsores de la Federación de Industriales de Santa Fe a finales de 1979 en sintonía con la dictadura militar.

8. 600 empresas transfirieron su deuda privada al estado en julio de 1982.

«El objetivo del proceso de Reorganización Nacional es realizar un escarmiento histórico. En la Argentina deberán morir todas las personas que sean necesarias para terminar con la subversión». Jorge Rafael Videla, palabras dichas en Washington y reproducidas por Crónica el 9 de septiembre de 1977.

9. 1.180 integrantes de las fuerzas armadas y seguridad fueron desprocesados por la Obediencia Debida de 1987.

«Aniquilar a los delincuentes subversivos donde se encuentren (...) Cuando las Fuerzas Armadas entran en operaciones no deben interrumpir el combate ni aceptar rendición. También se podrá operar en forma semiindependiente y aún independiente, como fuerza de tareas (...) Como las acciones estarán a cargo de las menores fracciones, las órdenes deben aclarar, por ejemplo, si se detiene a todos o a algunos, si en caso de resistencia pasiva se los aniquila o se los detiene (...) Las operaciones serán ejecutadas por personal militar, encuadrado o no, en forma abierta o encubierta (...) Elementos a llevar: capuchones o vendas para el transporte de detenidos a fin de que los cabecillas detenidos no puedan ser reconocidos y no se sepa a dónde son conducidos (...) Los tiradores especiales podrán ser empleados para batir cabecillas de turbas o muchedumbres (...) La evacuación de los detenidos se producirá con la mayor rapidez, previa separación por grupos: jefes, hombres, mujeres y niños».

Directiva secreta firmada por el jefe del Estado Mayor General del Ejército, Gral. Roberto Viola, el 17 de diciembre de 1976.

10. sólo el 40 % de la educación fue financiada por el estado nacional a partir del golpe.

«El 8 de octubre de 1973, Osinde le organizó el cumpleaños a Perón. Se hizo una comida en Gaspar Campos y a esa comida

asistieron quinientos suboficiales de todo el país. Entre ellos, mi viejo con la delegación de Santa Fe...», contó Jorge Castro, militante revolucionario de los años setenta, sobreviviente e hijo de Saturnino, uno de aquellos convocados por el General el 8 de octubre de 1973.

«En esa comida Perón les da un discurso. Los saluda uno por uno y ejerció una presión política muy fuerte. En un momento Perón les dice que los va a necesitar, que de vuelta va a necesitar de suboficiales del ejército argentino. Que él sabía que habían resistido y que después Lopecito, por López Rega, se va a encargar de la organización de ellos...

«Quedaron entre 200 y 300 suboficiales de todo el país. Se reunieron en un salón aparte.

«Perón, Ossinde y López Rega están con ellos. Les pide que en los viajes de Isabelita conformaran grupos para custodiarla de los zurdos...

«Cuando mi viejo vuelve, justo se había producido el nacimiento de nuestra primer hija, Victoria, el 9 de octubre. Viene muy parco, no cuenta todo, no es ningún boludo. Y la cosa se destapa el 7 de noviembre, porque viene Isabelita a Paraná...

«Entonces ese día a la mañana, mi vieja estaba que trinaba. El viejo le había dicho que le planchara el traje, la camisa, y todo el día nosotros habíamos escuchado cruces de palabras entre ellos, hasta que como a las tres y media de la tarde viene un Falcon verde con tres tipos que yo conocía, que eran del Círculo de Suboficiales de Santa Fe y lo buscan a mi viejo...

«Entra al dormitorio, yo no lo veo, se pone la pistola y se va, y mi vieja queda llorando. Cuando se va, mi vieja nos agarra a nosotros y nos cuenta: 'Tenés que pararlo, está metido en cosas raras...'. Y se va de custodia de Isabelita a Paraná, entonces cuando vuelve, yo empiezo a hablar con mi viejo, y al principio mi viejo no quería reconocer.

«Nosotros ya teníamos conocimiento de que se estaban con-

formando grupos paramilitares, entonces ahí le dije realmente vas a estar en la vereda de enfrente, y ahí lo cagué: 'Vos en cualquier momento vas a dejar sin padre a tu nieta'. Eso fue directo a la mandíbula. No sabía qué contestar ante eso. Bueno, ahí viene un período de impás. Teníamos conversaciones hasta que llega el intento de copamiento al regimiento de Azul. Aparece Perón de uniforme por televisión y mi viejo golpeando la mesa. Nos fuimos de casa.»

11. 84 trabajadores de prensa fueron desaparecidos.

Dijo Osvaldo Bayer el 28 de diciembre de 1994 en Santiago 2815, en la ciudad de Rosario: «...Recuerdo bien ese mediodía caluroso en mi ciudad natal, Santa Fe, cuando me vinieron a ver nuestras queridas Madres de Plaza de Mayo. Entre ellas estaba la abuela, la Negrita, con mucha timidez pidió hablar conmigo y me fue dando uno a uno los detalles de la tragedia. Indignación, impotencia y profundo dolor me fueron invadiendo. Pensé en ese momento en los políticos que habían votado obediencia debida y punto final, pensé en Alfonsín y todos sus ministros y partidarios, pensé en el indultador Menem y todos sus ministros y partidarios. Me sentí sucio en una sociedad sucia. Egoísta, que no merecía tener niños ni pájaros ni cielos azules.

«Fue así que escribí mi denuncia que titulé 'La Mirada de los Ciegos'. Salió en contratapa de Página/12, el 5 de diciembre de 1992. De inmediato tomó en sus manos la denuncia Rosario/12 y su periodista Carlos del Frade fue destapando toda la suciedad visitando a gendarmes y militares que solo eran capaces de responder con el consabido no sé, no me consta o remítase a los superiores. Respuestas cobardes, inmorales que

reducen a la insignificancia a sus autores.

«El tema fue extendiéndose, difícil de parar. Fue Ricardo Molinas el primero en poner la cara y lo siguieron los concejales rosarinos Luis Cuello y Silvia Fernández León. Mientras las bancadas radicales y justicialistas se callaban la boca. El senador nacional Losada, del radicalismo, hizo viajar a la abuela Ravelo desde Santa Fe. Fui a acompañarla con las Madres de Plaza de Mayo y nuestros abogados, pero el senador no apareció. Nos atendió un amanuense que ponía cara de sorprendido frente a todo lo que decíamos. Recibimos la respuesta habitual de 'el senador se va a ocupar' y por siguiente se borró por el tiempo de los tiempos.

«Después fue aquel gran encuentro frente a la casa robada del 25 de marzo de 1993. Nosotros viajamos con las Madres y allí estaban los Organismos de Derechos Humanos de Rosario, el inquebrantable del Frade, amigos, vecinos, periodistas. Nunca olvidaré el discurso de Hebe y la cobardía de los gendarmes, de los cuales no se asomó ninguno.

«Mi imagen no es injusta ni se inspira en la ética del sermón de la montaña: se escondieron como las ratas. En el frente de esta casa quedó inscripta la indignación de la juventud. Y después prosiguió la labor ininterrumpida de nuestros abogados, de los cuales voy a nombrar a esta hermosa persona que es Beto Olivares, de esos seres sabios, sacrificados y silenciosos. Para ellos toda mi admiración y agradecimiento. Y mi recuerdo emocionado para todos aquellos abogados asesinados por sus principios éticos en la defensa de los derechos humanos.

«A raíz de eso publiqué una segunda contratapa que titulé 'Nuestra casa de Ana Frank', donde predecía que esta casa se convertiría en los tiempos maduros de la decencia en lugar de visita de niños, adolescentes y jóvenes de nuestras escuelas, colegios y universidades, para revivir con unción el destino de Emilio y María Esther y aquel pequeño Iván, hoy ya hombre, testimonio vivo de la memoria, el amor y la constante acusación contra los

asesinos de uniformes y sus secuaces civiles. En aquella nota elaboré el deseo de que esta casa fuera el monumento constante que recuerde a los miles de jóvenes víctimas de la impiedad, tal cual lo es en Amsterdam la casa de la niña que significa permanente vida ante el crimen y la discriminación, Ana Frank, la expresión de la inocencia y la alegría de vivir.

«Para mi, hoy es como entrar en el paraíso.

«No deseo otro paraíso que este.

«Que el de la verdad, el de la justicia, el de la eterna lucha por los valores éticos.

«Esta casa es un templo, mucho más que las iglesias que fueron manchadas con sangre al darle el sacramento a los asesinos.

«Un templo de la dignidad.

«Gracias Emilio Etelvino Vega. Gracias María Esther.

«Gracias a ustedes».

---

12. 606 maestros fueron desaparecidos.

Setiembre de 1976.

Marta Bertolino ya sabía que su compañero Oscar Mansur había muerto en la tortura en el Servicio de Informaciones. Ella es llevada a parir al segundo piso de la Maternidad Martin, en Moreno y Rioja. La esposan a la camilla y la vigilan, desde afuera, hombres armados.

«Yo estaba en una habitación de la Maternidad Martin, creo que en el segundo piso. Esposada a una cama, el único movimiento que podía hacer era mover la cabeza. A dos metros dormía en una cuna, arrimada contra la pared de enfrente, una beba recién nacida, dormía agotadísima, era mi hija. Yo no podía tocarla. Menos aún podía amamantarla. Tampoco me habían de-

jado darle un nombre. Recuerdo que habían cerrado la puerta de la habitación. Estaba celosamente custodiada por fuera por varios hombres armados. La única ventana había sido clausurada por un candado. De repente una oblicua luminosa viene y se instala ahí. Sólida, finita, increíble, delante de mis ojos... Recuerdo que me hizo reir la ocurrencia del sol, su desparpajo, su modo silencioso de colarse. El gesto fulgurante de ese instante ganado a las tinieblas. Eso es lo que retuve de esos momentos.

«Años después tematicé esto escrito con aspirinas a falta de tizas en un calabozo de Villa Devoto, sobre una de las paredes de ese encierro.

«Poca cosa había en el cuarto, apenas una cama, vos dormida y yo mirándote en silencio. Nadie ahí para contarle que existías y existías en un buitre acechándote furioso, en un aletear de pájaro, en una bata. Nadie para contárselo. De un domingo extrañamente ajeno transcurría la tarde y aquel rayo de luz abrió un atajo por donde se coló la risa», contó Marta, hoy psicóloga, docente y poeta.

Su hija Alejandra estudia música, canta y sueña.

---

13. 340 centros clandestinos de detención funcionaron en la geografía argentina.

Aurora.

El martes 12 de septiembre de 2006 murió la más luminosa mujer de Gualeguaychú. No se trata de la piba Carrozo, sino de Aurora Fraccarolli, Madre de Plaza de Mayo.

Su cara hecha grito atravesó las fronteras, los muros y se convirtió en símbolo de lo mejor de un pueblo.

Aquella fotografía que la muestra a Aurora seguirá conmo-

viendo porque tiene esa imagen el raro privilegio de haber captado el alma de la mamá de Humberto, militante revolucionario desaparecido en la ciudad de La Plata. Por eso fue tapa de suplementos especiales, vídeos y otras tantas formas de expresar la dignidad de las Madres.

Andará Máximo, su fiel compañero peronista de toda la vida y ex trabajador del frigorífico, intentando descifrar el misterio del último mate cebado bajo la parra del fondo de la casita, mientras Tacuara, bravo perro de rulos blancos y grises, también buscará la caricia de la mamá. Peleó contra todo pero no pudo evitar el dolor que le provocó la discusión con su querida y admirada Hebe. Nunca lo pudo superar. Varias veces lo dijo en confianza.

Le faltaba línea para transmitirle a decenas de pibas y pibes que la convirtieron en referente en una población que pocas veces la tuvo en cuenta.

El último veinticuatro de marzo, cuando se cumplieron treinta años del golpe, Aurora subió al escenario del viejo teatro municipal mientras afuera llovía con insistencia y con su voz calma y su mirada tranquila y profunda volvió a insistir en la justicia y en la pelea a fondo contra las impunidades.

Una vez mostró un crucifijo hecho de migas de pan, papel, sangre y sudor que Humberto le pudo hacer llegar antes de ser arrastrado a la última fosa a la que fue condenado. Ella, Aurora, la más luminosa mujer de Gualeguaychú, juntaba pesito por pesito para editar el periódico de las Madres, allí en ese hermoso pedazo de mapa entrerriano.

Decir «las Madres» de Gualeguaychú es una exageración. Ella era la única que permaneció siempre peleando y desafiando a los poderes. Recién en los últimos años asomaron los otros pañuelos blancos.

Su nieto le contó que cuando estaba muy mal, a orillas de un laguito cordobés, le pidió a las fuerzas de la naturaleza que le enviara un mensaje que confirmara que su padre, Humberto, el hijo de

Aurora y Máximo, estaba cerca. Fue entonces que un zorro blanco apareció de algún lugar, lo miró y después se fue. Aurora sabía, al igual que su nieto, que Humberto efectivamente andaba cerca.

El cáncer no la frenó y fue una de las primeras en encabezar las marchas contra las papeleras al mismo tiempo que se rebelaba contra la prepotencia policial siempre ensañada contra los pibes pobres de Gualeguaychú.

La noticia de su muerte vino de la voz de Matías, hijo de un matrimonio desaparecido, ambos nacidos en aquella ciudad que besa las aguas del Uruguay. Cuando la abracé por última vez me negué al presentimiento.

Ojalá que su pueblo reconozca la colosal dimensión de Aurora.

Su alma, su insistencia, su rebeldía mágica. Cuando me tocó hablar aquel 24 de marzo en el teatro dije que en caso de contradecir el viejo lugar común que pontifica que madre hay una sola, no tendría dudas en elegir a la más luminosa mujer de Gualeguaychú, Aurora Fraccarolli.

Sé que ahora andarán riéndose con Humberto, peleando por antiguas disputas en torno a la revolución e intentando darle ánimo a Máximo y Tacuara, como lo hicieron siempre. Ya no puedo seguir. Pero ella, Aurora, seguro que sigue peleando.

---

14. 3 mil eran los combatientes de las organizaciones armadas a la hora del golpe.

El 15 de agosto de 1967 se conoció el llamado «Manifiesto de 18 Obispos del Tercer Mundo».

Los 18 firmantes fueron Helder Camara, arzobispo de Olinda y Recife, del Brasil; Jean Baptiste Da Mota e Alburqueque, arzobispo de Vitoria, del Brasil; Luis Gonzaga Fernández, de Vito-

ria, Brasil; Georges Mercier, obispo de Laghouat, Sahara, Argelia; Michel Darmancier, obispo de Wallis et Futuna, Oceanía; Armand Hubert, Heliópolis, Egipto; Ángel Cuniberti, Florencia, Colombia; Serverino de Aguiar, Pernambuco, Brasil; Frank Franic, Split, Yugoslavia; Francisco Austregesilo de Mesquita, Pernambuco, Brasil; Gegoire Haddad, Melquita, Beirut, Líbano; Manuel Pereira da Costa, Paraibo, Brasil; Charles Van Melckebebke, China; Antonio Batista Fragoso, Ceará, Brasil; Etiene Loosdregt, Laos; Waldir Calheiros de Novais, Volta Redonda, Brasil; Jacques Grent, Maluku, Indonesia; y David Picao, obispo de Santos, Brasil.

«...en su peregrinación histórica terrenal, la Iglesia ha estado prácticamente siempre ligada al sistema político, social y económico que, en un momento de la historia, asegura el bien común o, al menos, cierto orden social. Por otra parte las Iglesias se encuentran de tal manera ligadas al sistema, que parecen estar confundidos, unidos en una sola carne como un matrimonio. Pero la Iglesia tiene un solo esposo, Cristo. La Iglesia no está casada con ningún sistema, cualquiera que éste sea, y menos con 'el imperialismo internacional del dinero' (Popularum Progressio), como lo estaba a la realeza, o al feudalismo del antiguo régimen y como tampoco lo estará mañana con tal o cual socialismo».

Definiciones como estas conmocionaron a los sacerdotes que se encontraban trabajando y desarrollando su pastoral en medio de barrios marginales de todas las naciones del Tercer Mundo.

La Argentina no fue la excepción.

La repercusión ideológica y política fue proporcional al contraste con la alianza establecida entre el cardenal Caggiano con el partido militar y los representantes de los intereses económicos que comenzaron a vaciar el estado en beneficio propio.

«En el momento en que un sistema deja de asegurar el bien común en beneficio del interés de unos cuantos, la Iglesia debe no solamente denunciar la injusticia sino además separarse del sistema inicuo, dispuesta a colaborar con otro sistema mejor

adaptado a las necesidades del tiempo y más justo», indicaba el documento de los 18 obispos del Tercer Mundo.

«El sistema económico en vigor actualmente permite a las naciones ricas seguir enriqueciéndose aunque incluso ayuden un poco a las naciones pobres que, proporcionalmente, se empobrecen. Estas tienen el deber de exigir, por todos los medios legítimos a su alcance, la instauración de un gobierno mundial, en el que todos los pueblos sin excepción están representados, y que sea capaz de exigir, incluso para imponer, una repartición equitativa de los bienes, condición indispensable para la paz», señalaba el punto 21 de aquel documento liminar.

15. 7 mil hábeas corpus se habían presentado hasta 1977.

«Cuando en la noche del 6 de diciembre de 1977 los secuestradores se llevaron a nuestra hija Marta y a su esposo Jorge, su hijo de nueve meses, Matías, quedó provisoriamente en manos de una vecina y amiga.

«Al otro día, a las seis de la mañana, la policía se llevó al bebé. La vecina puso en la muñequita del nene su nombre: 'Matías Ayastuy'.

«Nos hablaron de Buenos Aires los parientes: 'Venga ya; ante todo hay que correr tras el nene; los bebés desaparecen, pierden su identidad, entran a integrar otra familia y, a veces, hasta cruzan las fronteras'.

«Fuimos Enrique y yo y comenzamos la búsqueda, incesante, angustiosa. Ni amigos, ni allegados, ni parientas sabían nada. No había rastros del bebé. Días amargos aquellos en que recorríamos infructuosamente los sitios adonde podían haberlo llevado... casas cunas... hogares de niños... guarderías...

«De pronto recordamos que en su última carta, Marta nos decía: 'Está enfermito, hace días que tiene fiebre'. Se nos abrió una esperanza: ¡el Hospital de Niños! Lo recuerdo a Enrique recorriendo ansiosamente, cunita por cunita, sala por sala, guiado por el doctor que le había dicho: 'A veces llegan con otros nombres'.

«Y me veo allí sentada, largas horas esperando entre una nube de chiquitos de toda edad junto a sus madres o abuelas y diciéndome: '¿Es posible que lo perdamos para siempre al nuestro?' Tampoco estaba allí. Surge otra esperanza, un médico nos aconseja: 'Vayan a la Secretaría del Menor y la Familia; a veces llevan ahí a chicos de padres desaparecidos'.

«Y de nuevo la decepción, un empleado nos contesta: 'No, aquí no han traído ningún chico con ese nombre'. Y, entonces, el milagro. En ese mismo instante pasa por detrás una enfermera, e interrumpe: 'Si, aquí llegó este mes un chico con el nombre de Matías Ayastuy, y está en un lugar de esta dependencia, a cargo de una ama externa'. Un momento inolvidable de nuestra vida.

«Hicimos los trámites requeridos, vino el médico del lugar, le mostramos la foto, nos dijo: 'Si, es el chiquito que atiendo, pero lo van a encontrar muy disminuido'. Nos prometieron entregárnoslo pronto.

«Cuando volvimos al departamento de Tabita y Adriana, tras el grito de '¡Lo encontramos!', vino el llanto. Pienso que si un minuto antes o después hubiera aparecido la enfermera, quizás nunca hubiéramos vuelto a verlo.

«Después, gestiones de todo tipo, y un día memorable llegó a la Secretaría, en brazos del ama que lo cuidaba. Estaba, si, enflaquecido y palidito, pero estaba allí... ¡Podíamos alzarlo, besarlo, llevarlo de vuelta a casa! Le pregunté a la ciudadora: '¿Cómo pasó los primeros días?'. 'Lloró mucho y durante un tiempo apenas comió'. Era lógico: ese bebé vivía, de la mañana a la noche, pegado a su madre. Y luego pregunté a la Asistente Social: '¿Cómo llegó este nene aquí?'. Me contestó: 'Lo trajo la policía

con el parte de abandonado por sus padres en la vía pública». El ama externa que lo custodiaba me contó luego que, por la fiebre, no se le había buscado todavía el nuevo hogar. La fiebre, otro milagro. Nos habían autorizado su tenencia como abuelos. Nos lo entregaron el 23 de diciembre, diecisiete días después del secuestro. El 24 volvimos a Gualeguaychú, Tabita, Adriana, Enrique y yo, con él en brazos. Junto al niño Dios, pusimos nuestro niño recuperado. Fue una Nochebuena distinta, con lágrimas.

«Todos mis hijos lo pidieron. Nosotros también lo hubiéramos querido criar, pero ellos adujeron que era mejor que tuvieran padres jóvenes, y hermanitos, y la elección, por fundadas razones recayó en el hogar Almeida-Bugnone.

«En la medida en que pudo ir recibiéndola, se le contó su historia, se le dijo que un día sus padres verdaderos vendrían a llevárselo. Otro día, supimos nosotros que ya nunca vendrían a buscarlo, y se lo dijimos: que sus padres habían defendido con sus vidas, su compromiso y su opción por los pobres.

«Matías tiene ahora veinticuatro años. Estudia y trabaja. En estos días está preparando su tesis para graduarse de comunicador social. Es un muchacho reflexivo, maduro y muy querible.

«Sabe que tuvo la suerte de criarse con los de su sangre, junto a sus raíces. A menudo toma la guitarra y canta, como tantas veces lo hiciera Marta con sus hermanos y con su marido. Y nosotros sentimos que recuperamos en él un poco de nuestra querida Marta».

Esto escribió Elvira Cepeda de Bugnone, mamá de Marta, abuela de Matías Ayastuy, en el año 2001. Matías es uno de los chicos recuperados y, en la actualidad, busca a su hermano también secuestrado durante la dictadura.

16. 1.627 decretos de la dictadura siguen vigentes

Entre el 23 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983 se sancionaron 1774 leyes de las cuales 1627 no fueron derogadas.

Según un informe solicitado por Perfil.com a la Dirección de Referencia Legislativa del Senado de la Nación, basado en La Ley on line, existen muchas leyes que se sancionaron en la dictadura que aún están vigentes. Por estos días, fue el argumento oficialista para apurar la sanción de una nueva ley de medios en reemplazo de la polémica ley de radiodifusión. Pero hay otras de igual envergadura que intervienen en la vida cotidiana de los Argentinos.

Una de las más importantes es la de entidades financieras que fue sancionada en 1977 y pergeñada por Martínez de Hoz. Algunas de sus modificaciones fueron durante las presidencias de Menem, De la Rúa y Kirchner. Hoy se habla de reemplazarla por una nueva.

Si se quisiera registrar una marca o producto, la ley que rige esta actividad fue sancionada en 1981. Las modificaciones en los contratos de trabajo de la ley de hidrocarburos es de 1978, y dos años más tarde se reformó el código minero. El código aduanero, que establece las polémicas retenciones, es de 1981.

17. 40 por ciento fue la devaluación del salario real en el primer año de la dictadura.

Para el periodista inglés David Yallop, famoso por su investigación sobre el presunto asesinado del papa Juan Pablo I,

titulada «¿Por voluntad de Dios?», en su libro *¿Cómo se robaron la copa?*, no hay dudas.

«La orden de arreglar el resultado vino directamente del hombre que dirigía la Junta Militar, el general Jorge Videla. El hombre al que dio las órdenes fue Lacoste» que «realizó una serie de negociaciones detalladas con tres antiguos oficiales que viajaban con el equipo de Perú. Los sobornos tomaron una variedad de formas. Treinta y cinco mil toneladas de grano que se iban a embarcar de Argentina a Perú. También se pagaron sustanciales sobornos directamente a funcionarios de Perú de cuentas manejadas por la Armada argentina… Una parte sustancial del crédito de los 50 millones de dólares que estaría disponible fue distribuida entre los miembros de la junta militar de Perú… He hablado largamente con tres integrantes del equipo, los cuales independientemente confirmaron que les habían ofrecido dinero para asegurar el resultado correcto. Fueron contactados por un antiguo miembro de la junta en forma separada… En vista de lo que estaba en juego, la cantidad recibida por estos tres jugadores era lastimosamente pequeña: 20 mil dólares por hombre», sostuvo Yallop.

«Pero fue gracias a los periodistas que vinieron por el Mundial que tuvimos nuestros primeros grupos de apoyo» recuerda Mercedes Meronio, vicepresidenta de Madres de Plaza de Mayo. Una agrupación holandesa de solidaridad con las Madres (SAM) donó las primeras casas. Y un hogar que hoy permite vivir juntas a las Madres que van quedando sin familia lleva el nombre de Lizbeth, esposa del que por entonces era el primer ministro de Holanda, Joop den Uiyl. «¿Cómo no voy a comprender a la gente si en mi propia casa, mientras yo lloraba en la cocina, mi esposo gritaba los goles frente a la televisión?», contó alguna vez Hebe de Bonafini, presidenta de las Madres.

18. 2.818 días fue el tiempo del terrorismo de estado.

«Disponiendo, en cumplimiento del deber legal de denunciar, se ponga en conocimiento del Consejo Supremo de las

Fuerzas Armadas el contenido de esta sentencia y cuantas piezas de la causa sean pertinentes, a los efectos del enjuiciamiento de los oficiales superiores que ocuparon los comandos de zona y sub-zona de Defensa, durante la lucha contra la subversión y de todos aquellos que tuvieron responsabilidad operativa en las acciones», decía el punto 30 de la sentencia de la Cámara Federal de Apelaciones de Capital Federal leída por León Arslanián el 9 de diciembre de 1985.

El concepto de «responsabilidad operativa» parece haber sido ignorado por completo por los actuales juzgados federales que repiten los testimonios de las víctimas y entienden que deben volver a probar lo ya convertido en cosa juzgada.

Semejante omisión del punto 30 de la sentencia de la Cámara Federal de Apelaciones es directamente proporcional a la construcción de impunidad.

19. 40 por ciento más aumentaron los precios del consumo popular hacia 1977.

La primera mención sobre la actuación del «Tucu» apareció en el libro *Recuerdo de la muerte* de Miguel Bonasso.

Su identidad fue revelada por las declaraciones que desde el exterior hizo el ex servicio de inteligencia del Ejército, con actuación en el Comando del II Cuerpo de Ejército, Gustavo Francisco

Bueno, alias Germán Bueno o Banegas, ante el Centro de Estudios Legales y Sociales, en 1987. Allí informa sobre el personal que revistaba en la Quinta de Funes.

En la lista de represores confeccionada por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Rosario, en 1987, Eduardo Constanzo aparece como miembro de Inteligencia militar: «IN 14».

Al tiempo, sin imputación alguna en la causa federal 47.913, la denominada causa Feced, Constanzo se presentó al diario Rosario/12 para hablar sobre su actuación en Funes, diciendo que envolvía los cuerpos de los muertos, entre ellos algunos chicos y que después los trasladaba a las barrancas del río Paraná o por avión hasta la Bahía de Samborombón. Los datos fueron revelados por una entrevista que le hizo el periodista Reynaldo Sietecasse.

Su relato también apareció en la revista Gente a través del corresponsal rosarino de la misma, Raúl Acosta.

Al saberse su participación, los familiares de desaparecidos pidieron que se investigue lo relacionado con el supuesto fondeadero en las barrancas del Paraná, tarea que desarrolló el entonces juez provincial de instrucción de la 10ª nominación, Martínez Fermoselle, sin encontrarse ningún rastro positivo.

Aparece nombrado en el cuerpo 28 de la causa Feced al incluirselo como «Tucu» entre los torturadores y represores de la Quinta de Funes. Era finales de 1986.

En el cuerpo 43 de la causa, se anexan fotocopias del capítulo II al XI de la «Segunda Temporada», del libro *Recuerdo de la Muerte*, de Miguel Bonasso. El «Tucu» aparece en el apartado X «La Onda expansiva», señalado por Dri como «con la cachaza tucumana. Viejo. Experimentado. Ojo, es observador». Se repite el pedido de hábeas corpus presentado por María Adela Panelo de Forestello por el destino de su hija María Marta Forestello. Su nieta fue encontrada en la policía de menores de Rosario el 2 de diciembre de 1977. Estas actuaciones ya correspondían a febrero de 1987.

Hasta que llegó el lunes 15 de diciembre de 1997.

El «Tucu» Constanzo me recibe en el living que inventó en el viejo garaje de su casa de Pueyrredón 2931, a dos cuadras de la casita robada, aquella de Santiago 2815 donde vivía una pareja de ciegos, secuestrados, torturados y desaparecidos por las huestes de Galtieri y Feced el 17 de setiembre de 1977.

Impecable traje marrón y corbata con dibujos de Mickey y Tribilín. No le queda nada bien a quien supo torturar y envolver cuerpos para luego, según dijo, tirarlos al río.

«Usted escríbalo y después vea cómo podemos repartir lo que surja. Creí que me venía a ofrecer hacer una película. Hay que hacer negocios», dice mientras apostrofa contra los militares.

«Yo peleé por la patria, la bandera, esas cosas, pero ellos se quedaron con la plata», sostiene mientras confiesa que estuvo nueve años junto a Luis Rubeo.

Tiene un automóvil casi nuevo, dos camiones con los que trabaja en el Mercado de Productores de Fisherton trayendo fruta desde Tucumán. Su madre de noventa años tiene buena salud pero se está muriendo de vieja.

«Le di a cada uno de mis hijos casa y auto. Yo vine con mucho dinero de Tucumán. Después cometí el error de mi vida cuando trabajé con los militares», cuenta mientras toma un café.

Quiere dinero a cambio de su memoria.

«Tengo todo acá adentro», señalando su cabeza.

Toma pastillas de Tetrargill, «recuerdo de los montoneros», relata y señala unas ventanas que le quedaron de una casa en Tucumán cuando le metieron algunas granadas.

Dice que el coronel Fariña hizo mucho dinero, que trabaja frente al diario La Capital y le fue muy bien. «Hijo de una gran puta, le digo cuando lo veo y no me saluda. Ninguno de nosotros lo queríamos. Era muy prepotente. Ellos hicieron muy buen dinero», recuerda. Dice que Fariña fue el jefe de operaciones especiales del comando del II Cuerpo.

20. 30 por ciento era el índice la mortalidad infantil en las principales provincias argentinas.

El ex jefe del Ejército Cristino Nicolaides aseguró, el 7 de abril de 2005, ante la Justicia federal, que posee una serie de «reglamentos de operaciones» militares oficiales utilizados durante la última dictadura.

Según explicó la defensa del represor «quien declaró en Córdoba en una causa por la desaparición de ciudadanos correntinos», esos registros «demuestran que los procedimientos y la lucha antisubversiva librada contra bandas terroristas fueron en el marco de la legalidad vigente en la época».

Desde los Organismos de Derechos Humanos señalaron que la estrategia de Nicolaides es «tratar de dar un manto de legalidad a sus crímenes, pero no hace más que confirmar que la represión fue planificada desde el Estado».

Nicolaides declaró ante el juez federal de Corrientes, Carlos Soto Dávila, quien lo investiga por la desaparición de tres personas durante la última dictadura cuando él estaba al frente de la Séptima Brigada de Infantería de esa provincia.

Según explicó su abogado, Alejandro Zeverín, el ex jefe del Ejército dio «datos» sobre una serie de manuales oficiales impresos en 1966 por el Instituto Geográfico Militar (IGM) que «le permitían al Ejército detener, secuestrar, allanar domicilios, interrogar bajo compulsión física o psíquica, y hasta eliminar físicamente al enemigo».

En su declaración, Nicolaides aseguró que esos registros fueron destruidos por orden del ex titular del Ejército y actual embajador argentino en Colombia, Martín Balza. «Nunca se hicieron públicos porque en 1995, el señor Balza los quemó, los

incineró sin avisar a nadie», señaló el defensor con la clara intención de involucrar al ex jefe del Ejército. Sin embargo, el represor explicó que algunos ejemplares podrían encontrarse en los archivos del Congreso Nacional o en el IGM, y que él mismo conserva uno de ellos pero decidió no entregárselo al juez «por miedo a que se lo roben».

21. 25 por ciento terminó siendo la participación del salario en el PBI cuando en 1975 era del 43 por ciento.

«Los sueños son más fuertes que el cáncer.»
Ricardo Cáceres, Misiones

La militancia empezó tibiamente en los años setenta en Misiones. En realidad comenzaba por algún pensamiento que traíamos de chicos.

Mi viejo, Don Alejandro Cáceres, era mensú. Tenía que meterse en el monte y pelearle a las víboras y otras alimañas. Tenía diez años y sabía que lo poco que teníamos se lo debíamos al peronismo. Nos fuimos de Puerto Liberal a trabajar en las tierras de los Benberg, después a El Dorado, pasamos por las cataratas, hasta llegar a Posadas.

Por ese tiempo me acuerdo cuando cayó Perón y vi cómo arrastraban los bustos de Evita. Mi papá tuvo que volver al monte. Y cuando se enfermaba tenía que ocultarse porque si no lo echaban. Un compañero le cobraba el jornal para ir tirando. Mi mamá le hacía la ollita con el reviro, una especie de caldo muy flaco que apenas servía para gambetear el hambre y ahí se iba el viejo, otra vez, con su reviro, para adentro del monte.

Dos veces le picaron víboras cascabel.

Y hubo una en la que casi no cuenta el cuento.

Lo acompañé al médico y como éramos pobres nadie nos atendía. Pero él le pidió tanto que quería vivir porque necesitaba alimentar a sus cuatro hijos que el médico le hizo un tajo en la pierna. Fue tremendo todo lo que le salió. Pero se salvó.

Y hasta en una vuelta se agarró paludismo…

Y se curó solo… ¿Cómo se curan los pobres? Solos… Temblaba por el chucho que le daba el paludismo, pero se curó solo. Entonces todo eso me fue quedando. Mucha injusticia.

Y así nos juntamos con algunos compañeros y fuimos creciendo. Fue algo explosivo como crecimos. Y eso se dio en toda la Argentina y también en otras partes de Latinoamérica.

Tuve una militancia activa hasta octubre de 1976, cuando me detuvieron. Estábamos en la tendencia revolucionaria, en la JP, o la JTP hasta encuadrarnos en Montoneros. Hasta hoy en día me sigo manteniendo ideológicamente sano…

Creo que el sacrificio mío y de los compañeros que hoy no están y los que están muertos y desaparecidos es algo que nosotros no podemos olvidar ni negociar. Se pueden negociar y discutir un montón de cosas en esta etapa de la historia, porque también es cierto que hay que vivirla para después cuestionar y analizar.

Hoy sigo estando en el llano pero sigo militando y creo seguir siendo útil para mi país. Yo ofrecí mi vida, mi juventud y mi sacrificio y creo que vale la pena y en eso estoy.

Me casé muy tarde, cuando me dejaron libre.

Ando con cáncer, pero no me va a matar.

Sigo creyendo en lo mismo, en la dignidad del hombre y por eso sigo. ¡Qué me importa el cáncer!…

22. 4.300 civiles están imputados de haber colaborado con los delitos de lesa humanidad.

En 2006 comenzaron los juicios orales de lesa humanidad. A diciembre de 2015, los juicios llegaron a 153 con 660 condenados y 60 personas absueltas. Hay 116 causas ya elevadas a juicio oral que aún esperan fecha de comienzo de debate y otras 237 en instrucción. Durante 2015, hubo 19 sentencias contra las 25 sentencias de 2014: los datos indican una desaceleración de las horas de audiencia de los Tribunales Orales Federales, aún teniendo en cuenta que ahora hay 7 megajuicios en simultáneo con debates más largos. Las estadísticas que acaba de publicar la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad del ministerio público muestran parte de los avances y retrocesos del reconocido proceso de justicia por los crímenes de la dictadura en Argentina. Consultados por Página/12, integrantes de los Organismos de Derechos Humanos valoran en términos positivos que durante el 2015 se mantuvieron sostenidamente los juicios en buena parte del país. Y que existieron dos hitos fundamentales: la apertura del juicio a los jueces en Mendoza y del juicio al empresario Marcos Levín en Salta. La comisión bicameral para investigar responsabilidades civiles en el Congreso a partir de marzo, el informe de Flacso, el CELS y el Ministerio de Justicia sobre esos mismos actores asoman como ejes del 2016 para contrarrestar los golpes que recibieron este año las causas a los empresarios. Y también aparece en agenda el inicio del Juicio por el Operativo Independencia. En ese escenario con el nuevo contexto político, los organismos mantienen las alarmas encendidas por la continuidad de las políticas de Estado.

23. 297 civiles, solamente, han sido juzgados.

«Con esta política buscamos debilitar el enorme poder sindical que era uno de los grandes problemas del país. La Argentina tenía un poder sindical demasiado fuerte, frente al cual era imposible el florecimiento de cualquier partido político, porque todo el poder lo tenían ellos (...) Hemos debilitado el poder sindical y esta es la base para cualquier salida política en la Argentina».

Juan Alemann, Secretario de Hacienda, citado en Martin Andersen, Dossier Secreto, Planeta, 1993.

24. 37,4 por ciento fue el índice de la pobreza en el país luego que en 1974 solamente alcanzara al 5,8 por ciento de los habitantes.

Las persecuciones, la censura y la desaparición de personas se extendieron a todos los ámbitos de la vida y la educación no fue una excepción. A dos días del golpe, el contraalmirante César Guzzeti, delegado militar ante el Ministerio de Cultura y Educación, designaba uniformados en todas las direcciones nacionales y generales del Ministerio. Todas sus dependencias fueron ocupadas por miembros de las Fuerzas Armadas.

Se trataba de disciplinar al sistema educativo, y erradicar de él los elementos «subversivos». Así, el Ministerio de Educación publicó un panfleto denominado «Subversión en el ámbito educativo. Conozcamos a nuestro enemigo», que tenía por objetivo «erradicar la subversión del ámbito educativo y promover la vigencia de los valores de la moral cristiana, de la tradición nacio-

nal y de la dignidad de ser argentino». Por resolución Nº 538 del 27 de octubre de 1977, el folleto debía ser distribuido en todos los establecimientos educativos del país, entre personal docente, administrativos y alumnos, en caso de considerárselo adecuado. La desaparición forzada de personas fue muy extendida entre docentes, investigadores y estudiantes.

En 1978, al mando del coronel Agustín C. Valladares se llevó a cabo la «Operación Claridad», como se denominó al espionaje e investigación de funcionarios y personalidades vinculadas con la cultura y la educación. Valladares mantenía reuniones con directivos de los establecimientos educativos a fin de lograr que se cumplieran sus órdenes. Transcribimos a continuación el testimonio de Rubén Cacuzza, quien como rector de una institución educativa, participó en uno de aquellos encuentros:

Fue en 1978, en el salón de actos del Colegio San José de la Capital Federal, debajo de una bóveda cubierta de pinturas renacentistas.

Había concurrido como rector apenas electo de un Instituto de la Provincia de Buenos Aires...

A pesar de que el salón estaba a oscuras, por las hendijas de luz del retroproyector se podía ver que el coronel estaba con uniforme de fajina y con anteojos oscuros. En el salón, los rectores y rectoras de la enseñanza privada, en su gran mayoría monjas y sacerdotes, escucharon en silencio al coronel cuando agitando una revista Redacción lanzó improperios contra su director, Hugo Gambini, acusándolo de marxista, subversivo y otras del mismo tenor.

El coronel estaba exasperado.

En una rápida revisión retrospectiva de la historia de las ideas en occidente fustigó a Mao, a Marx y a Freud, al racionalismo iluminista dieciochesco, a Descartes por haber inventado la duda, a Santo Tomás por atreverse a intentar fundar la fe en la

razón y se quedó en San Agustín, en el concepto de guerra santa y en el de la guerra justa que enarbolaron los conquistadores españoles para imponer la encomienda y la evangelización. El coronel estaba furioso porque desde la primera reunión en 1977, no había recibido ninguna denuncia a pesar de que había dado no sólo los teléfonos del Ministerio sino los de su domicilio particular.

—¿Quiere decir que ni siquiera sospechan? —espetaba enojado y agregaba:

—Mientras ustedes están en la tranquilidad de sus despachos nosotros hemos matado, estamos matando y seguiremos matando. Estamos de barro y sangre hasta aquí —dijo señalando sus piernas más arriba de su rodilla.

Señaló con el dedo al auditorio silencioso y gritó:

—¡Basta de ombligos flojos!

Pasaron después una serie de acetatos con gráficos pertenecientes al folleto «Conozcamos a nuestro enemigo. Subversión en el ámbito educativo». Folleto que fue entregado a los presentes.

Y en el cierre hubo un documento filmado sobre las acciones del ejército contra la guerrilla en Tucumán.

Finalmente, toda esa masa comenzó a abandonar el salón en silencio, caminado sin mirarse hacia la puerta, lentamente, conscientes del terror en la piel, porque en un año no habían denunciado a ningún docente de sus escuelas.

Fuente: Pablo Pineau, Impactos de un asueto educacional. Las políticas educativas de la dictadura (1976-1983), en AA.VV., *El principio del fin. Políticas y memoria de la educación en la última dictadura militar (1976-1983)*, Buenos Aires, Editorial Colihue, 2006, págs. 56-57.

25. 25 por ciento fue el índice de la fuga de capitales en 1979.

Dos de las carpetas que forman este archivo (tituladas Sistema e Informe sobre la estructura funcional) sirven para reconstruir la historia. Tras el golpe, se creó en el Ministerio de Cultura y Educación (MCE) un organismo de inteligencia encubierto bajo el nombre Recursos Humanos. Así se lo recordaba a Jorge Videla el primer ministro de Educación del Proceso, Ricardo Pedro Bruera, en un memorándum «estrictamente confidencial y secreto» del 23 de noviembre de 1976: «La radicalización del accionar opositor de docentes, alumnos y no docentes en el quehacer educativo y de los elementos actuantes en el ámbito cultural y científico técnico, adquiere una importancia tradicionalmente relevante sobre lo cual resulta ocioso insistir». «Se creó entonces bajo el encubierto nombre de Recursos Humanos un área que funciona como dependencia del Departamento de Asesores del Ministro». «Imprescindible complemento (...) es el aporte de un grupo de personas especialistas en tareas de Inteligencia, destinados a manejar los aspectos técnicos del tema en cuestión. La necesidad aludida ha sido gestionada ante las autoridades de la SECRETARIA DE INTELIGENCIA DEL ESTADO (SIDE), quienes la han cubierto a entera satisfacción del suscripto». El verdadero sentido del mensaje de Bruera a Videla aparece en el anteúltimo párrafo, con el mismo lenguaje de memorándum: «El MCE necesita contar con una partida de fondos secretos que permita afrontar los gastos que insume el pago de los servicios del personal técnico y la creación de toda la infraestructura de apoyo a la labor informativa (pago de informantes ocasionales) todo lo cual ha sido evaluado por la SIDE y propuesto a su Excelencia para su aprobación». Otro documento llamado «La estructura orgánica funcional», revela

que el jefe de Recursos Humanos contó con un Estado Mayor en el que participaban tres delegados de las Fuerzas Armadas y un enlace técnico de Inteligencia. Allí se ordena usar una segunda máscara: «Adoptar, como cobertura, el cargo de 'Jefe de Asesores del Gabinete Ministerial' (resolución 449)». Ese Jefe de Asesores fue el coronel retirado Agustín Camilo Valladares, compañero de promoción y amigo del general Roberto Viola. El propio Valladares es autor de muchos de estos documentos de lectura densa y fascinante a la vez, incluyendo el que explica en el punto M que «Por la Resol. N 456/78 se designó al infrascripto como Asesor de Comunicación Social». Traducción: en el año '78 Valladares pasó a comandar la Asesoría de Comunicación Social, nueva cobertura de los servicios de espionaje en el área educativa. Permaneció en el cargo hasta fines del Proceso. En 1981 su principal obsesión aparecía en otro documento (Informe sobre la situación): «El ministerio propuso en 1979 y 1980 acrecentar la reunión de información, no solamente por ser una exigencia del PEN, sino por la circunstancia de que psicológicamente es conveniente acelerar la erradicación de ideólogos terroristas. La realidad del espectro sectorial nos muestra que, si bien los activistas terroristas fueron eliminados, quedan aún, especialmente en los niveles terciario y secundario, los activistas ideológicos». Las palabras están ahí: un miembro de un centro de estudiantes de un secundario, o un docente opuesto al Proceso, podía ser considerado «activista ideológico», equivalente en el texto a uno de los «ideólogos terroristas», que deben ser «erradicados» aunque también se utiliza la palabra «eliminados». Un opositor a la dictadura terminaba siendo considerado un terrorista, incluso en los memorándums de 1981, cuando ya no había guerrilla. El coronel Valladares actuaba obedeciendo órdenes. Por eso seguía en guerra, en medio de la Operación Claridad. Allí también se centralizaron las conocidas listas negras, aunque quedan dudas sobre si eran elaboradas en la SIDE y enviadas a Valladares, o si había cierta autonomía para

elaborarlas. Es sabido que los canales de televisión se repartían entre la Armada, Ejército y Aeronáutica. Pero un artista podía estar prohibido en uno y habilitado para actuar en otro. Fuentes que actuaron cerca de Valladares aseguran que los informes incluían a escritores como Julio Cortázar o Jorge Luis Borges, aunque en diferentes niveles. Cortázar estaba en la «Fórmula 4», la gente considerada más peligrosa. Borges estaba en la «Fórmula 1», sin «antecedentes marxistas» pero que convenía «seguir de cerca». Según la fuente, Ernesto Sábato figuraba como «Fórmula 3». Es sabido que hubo nóminas similares con otros actores (Héctor Alterio, Norma Aleandro, Norman Briski), escritores y periodistas (Osvaldo Bayer, Rogelio García Lupo, Abelardo Castillo, Dalmiro Sáenz). En el material obtenido por Clarín hay una de esas listas, y se informa textualmente: «La nómina surgió de una serie de expedientes enviados por la jefatura III de Operaciones del Estado Mayor General del Ejército, producidos por dicho organismo en el marco de la llamada Operación Claridad».

26. 20 por ciento menos de exportaciones se registraron en 1980.

Uno de sus antecedentes documentados más importantes es la «DIRECTIVA DEL COMANDANTE EN JEFE DEL EJÉRCITO Nro 507/78», con firma y sello de Roberto Eduardo Viola, entonces Jefe del Estado Mayor General del Ejército. Allí se plantea que las leyes para lograr la «inhabilitación y despido del personal jerárquico o de cuadros docentes o no docentes, laicos o confesionales, enrolados o simpatizantes de la ideología marxista no han logrado los resultados deseables». Entre las causas se menciona: «No haberse logrado la total comprensión del problema por parte de los rectores, decanos, supervisores y docentes de todos los

ciclos de enseñanza, quienes se han mostrado poco dispuestos a asumir tareas y responsabilidades acorde con las exigencias que impone el Proceso de Reorganización Nacional». Por lo tanto el informe ratifica que «interesan fundamentalmente aquellos informes referidos a: a) Funcionarios y directivos que, mediante acción o inacción favorecen la infiltración. b) Docentes religiosos o laicos que impriman a sus clases una clara o encubierta orientación marxista». El documento explica luego que se deben reunir hasta «Datos de familiares de cada causante». Luego define la relación entre los Comandos de Zona, la Jefatura III de Operaciones, la Jefatura II de Inteligencia, la forma de encarrilar la información entre el sector miitar y el ministerio de Educación. Un ítem del informe es breve. Dice: «Velo: mantiene su encubrimiento de OPERACION CLARIDAD», y más abajo: «SERVICIOS PARA APOYO DE COMBATE, de acuerdo con lo establecido en la directiva del CJE (Comando en Jefe del Ejército) 504/77 (Continuación de la ofensiva contra la subversión durante el período 1977/78)». La firma es de Viola. Es interesante mencionar que en ninguno de estos documentos aparece la palabra «guerra» para referirse al accionar antisubversivo, término que apareció mucho después, cuando lo encubierto empezó a conocerse, y los responsables del gobierno militar intentaron justificar los crímenes por los cuales se los acusaba.

27. 30 por ciento más de importaciones también en 1980.

El general Albano Harguindeguy era ministro del Interior pero asumió interinamente Cultura y Educación. En noviembre de 1978 emitió la resolución 1650 en la que ordena que el organismo encabezado por Valladares centralice toda la información

sobre «la detección de agentes propiciantes de la subversión y/o el terrorismo». ¿Qué hacer una vez que se detectaba a alguien a quien se creía peligroso? El punto 4.1.1. de la resolución de Harguindeguy dice: «Las autoridades educativas, culturales y de ciencia y tecnología deberán informar las novedades sobre la detección de agentes o presuntas actividades subversivas a que diere origen el personal a sus órdenes, a las autoridades militares de su jurisdicción». La forma de detectar enemigos ya había sido detallada por Valladares en uno de sus informes de mayo de 1977 donde, al hablar de la estrategia antisubversiva, propone: «Volcar el centro de gravedad específico, sobre los ciclos primario y secundario. En el primero, operar preferentemente a través de los cuadros de preceptores a seleccionar». Con respecto a la Universidad, planea crear «una red confidencial de reunión de información». Además ordena: «Infiltrar y penetrar las organizaciones CTERA, FAUDI, FRANJA MORADA Y MOR, especialmente». El primero es el gremio docente, y las otras son agrupaciones estudiantiles. El punto g) del trabajo dice que hay que «prever la adopción de un esquema de búsqueda dentro de las áreas de Cultura y de Ciencia y Tecnología», y explica de qué modo en el punto h): «Apelar, para estructurar el sistema de reunión de información, al aporte de los miembros de la familia del personal militar, de las fuerzas de seguridad y policiales, que se desempeñen en el sector educacional». Consultado sobre estas cuestiones, el ex ministro Bruera dijo a Clarín: «¿Y para qué carajo íbamos a querer infiltrar a CTERA, Franja Morada y esas cosas, si en ese momento no aparecían ni a placé? El problema podía ser Montoneros, pero tampoco estaban porque después de que Perón los echa de la plaza (en mayo de 1974) entraron en una bancarrota impresionante». Las dudas de Bruera parecen razonables, pero reflejan que lo razonable no estaba incluído en estos planes: aunque en los informes se hablase de «terroristas» y «subversivos», las acciones militares apuntaban contra cualquier persona opuesta,

aún potencialmente, al Proceso. (Investigaciones recientes han revelado, por ejemplo, que más del 90 por ciento de los desaparecidos no eran guerrilleros).

28. 37 entidades financieras quebraron en el período.

A fines de 1978 Horacio Guarany volvió a la Argentina, lo que motivó un parte de la SIDE. Se menciona que Guarany firmó una solicitada por el fin de la guerra en Vietnam (1968) y otra contra la dictadura de Augusto Pinochet (1973). Se menciona que fue autor de canciones de «apoyatura a la subversión ideológica» tales como Recital a la Paz y Recital a la Infancia. «Se estima conveniente seguir de cerca sus actividades a efectos de que el causante no pueda volver a difundir, a través de sus actuaciones, mensajes ideológicos comprometidos con la subversión marxista». El «memo» incluye una copia del volante que promocionaba la reaparición de Guarany en el Club Atlanta, de Junín, junto a conjuntos que ya no están de moda: Los Duques Negros y Los Espectros. El siguiente parte (enero de 1979) está dedicado al actor Carlos Carella. Se lo califica como «Fórmula 4», el mayor grado de peligrosidad en los informes de la SIDE, se enumeran solicitadas firmadas por él y se plantea también «seguir de cerca sus actividades a efectos de evitar que pueda convertirse en un 'COMUNICADOR LLAVE' que sirva, posteriormente, a la difusión de mensajes con connotaciones ideológicas ajenas a nuestro sentir nacional». Sin embargo el parte de la SIDE nació «al tomarse conocimiento que recientemente se presentó con su versión escénica de MARTÍN FIERRO». La documentación posiblemente sea infinita. En algunos casos sólo sirve para ver en qué se gastaban las partidas secretas. Hay un informe secreto de enero de 1980

sobre «infiltración a una secta esotérica» en Bahía Blanca. Se dice que «la vida privada de algunos de sus miembros denota lo pernicioso de sus actividades». Se menciona el programa de estudio (las materias eran «El bien y el mal», «Karma» y «Seres infernales» entre otras). Los «servicios» detectaron a todos los adherentes, incluyendo a María Adela Scilingo, hermana del marino que el año pasado confesó haber participado en los vuelos que su arma organizaba para arrojar a personas al mar. La califican en 1973 como «incursa en actividades de extrema izquierda, participa en pegatina de afiches», y en 1978 sólo «miembro de la secta esotérica».

29. 22.285 fue el número del decreto que desde 1981 reglamentaba los servicios audiovisuales en Argentina hasta bien entrado el tercer milenio.

Desde el primer día, la Junta Militar dispuso una comitiva para analizar la aptitud ideológica de centenares de personalidades públicas. Para eso fue creado el Equipo Compatibilizador Interfuerzas (ECI), un organismo que tenía el deber de coordinar reuniones semanales donde confluían representantes de la Secretaría de Información Pública (SIP), la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y representantes de cada una de las tres armas.

El ECI no era un organismo permanente: se conformaba para cada ocasión. «Aún no hemos encontrado responsables directos. Los ECI se conformaban para cada tarea. Para mí es un término nuevo, a pesar de los años que llevo investigando el funcionamiento administrativo de la dictadura. Creo que estaban en el ámbito de la Junta Militar, y generalmente quedaban bajo la órbita de los secretarios generales de cada fuerza», concluyó la

Directora de Derechos Humanos de la Cartera.

Si bien fueron encontrados muchos más de tres listados —el primero el 18 de junio del '76— el ministerio de Defensa destacó tres paradigmáticos: uno fechado el 6 de abril de 1979, el segundo el 31 de enero de 1980, y el tercero el 21 de septiembre de 1982.

En esos listados el ECI definió cuatro «fórmulas» para calificar a las personas que entraban o salían de las listas:

Fórmula 1: la integraban quienes no tenían «antecedentes ideológicos marxistas».

Fórmula 2: La escala de peligrosidad era mayor para quienes sus antecedentes «no permiten calificarlo desfavorablemente desde el punto de vista ideológico marxista».

Fórmula 3: registraban «algunos antecedentes ideológicos marxistas» pero los mismos no son suficientes para que se constituyan en un elemento insalvables para su nombramiento, promoción, otorgamiento de beca, etc...

Fórmula 4: «antecedentes ideológicos marxistas que hacen aconsejable su no ingreso y/o permanencia en la administración pública. No se le proporcione colaboración», ordenaban a esta cuarta categoría, la más «peligrosa».

En este contexto, la definición del «marxismo» respondía a la propaganda de la dictadura: sin rigor teórico, era un criterio amplio que buscaba la legitimación de los horrores que se cometían. «Eran todos marxistas prácticamente. Montoneros era marxista. Y eso era utilizado deliberadamente: decirle a este pueblo que alguien era marxista no era lo mismo que decirles que eran peronistas», explica Segado.

La primera lista, doce páginas mecanografiadas, incluyen 285 nombres de «Fórmula 4» de todos los oficios posibles: locutores, pintores, escritores, periodistas, concertistas, actrices y actores, directores teatrales, abogados, profesores de bellas artes, docentes, músicos, escultores, críticos de arte, guionistas, publicistas, escenógrafos, compositores, cineastas, dibujantes. Hasta

titiriteros, médicos pediatras y psicólogos. Entre los hombres peligrosos para los ojos del régimen, había artistas reconocidos como Pino Solanas, Juan Carlos Gené, Rogelio García Lupo, Jacobo Timerman, Marilina Ross, José Octavio Getino y Leonardo Favio, entre muchísimos otros.

La segunda aumentaba los ranqueados F4 a 331 nombres, con algunas recomendaciones sobre ellos: no debían ser difun-

didos y, en última instancia, debían «ser incinerados». Las reuniones semanales del ECI aumentaban o filtraban esa lista: como insumos, las mentes militares utilizaban informes de la SIDE. Pero también se discutían casos individuales acercados por los representantes de las Fuerzas, o a pedido de los mismos interesados. Norma Aleandro, Héctor Alterio, Osvaldo Bayer y Jorge Luis Bernetti figuraban en esta.

---

30. 6 de cada diez desaparecidos tenían entre 21 y 30 años
(32,62 por ciento entre 21 y 25 años y 25,90 por ciento entre 26 y 30 años, sumando un total de 58,52 por ciento).

El último listado, fechado el 21 de septiembre de 1982, tuvo un carácter distinto: luego de la Guerra de Malvinas, y el deterioro de la imagen pública de la dictadura, una nota de la Secretaría de Información Pública destaca la directiva del gobierno de «marcar una transición hacia la vida institucional plena del país». Por ello, propone «evitar medidas y actitudes oficiales que atenten contra esa imagen en el campo de la comunicación». El 14 de octubre de 1982, el tema fue tratado en el seno de la Junta. El acta N° 236 —que integra el corpus hallado— refleja que los dictadores deciden «proceder en forma gradual a desafectar per-

sonas (del listado de Fórmula 4) siguiendo el criterio propuesto para la variante 2 de la SIP».

Esa gradualidad se tradujo en la conformación de cuatro sub grupos dentro del universo de 199 personas que aún continuaban inhibidas dentro del listado de «Fórmula 4». La reincorporación iba a ser escalonada: 41 de ellas debían pasar a «contratables» a fines de 1982; otras 60 personas debían dejar de estar en el listado en el primer semestre de 1983; y otras 52 en el segundo semestre de ese año. «Finalmente, la SIP recomendaba (y la Junta Militar así lo decidió) que 46 argentinos, bajo ningún punto de vista, salieran del listado de «Fórmula 4». Nunca dejaría que «un grupo de argentinos puedan ser contratados para trabajar», explica el comunicado del Ministerio de Defensa. Entre ellos, estaban los actores Norman Briski y Nacha Guevara, el cineasta Justo Octavio Getino, el músico Miguel Ángel Estrella —que había estado secuestrado en la ESMA— y el poeta popular Armando Tejada Gómez.

---

31. 6 de cada diez desparecidos eran obreros, empleados, profesionales y docentes, es decir trabajadores
(obreros 30,2 por ciento; empleados 17,9 por ciento; profesionales 10,7 por ciento y 5 por ciento, docentes; haciendo un total de 63,8 por ciento del total de desaparecidos).

«Milagros no hay», eran las palabras del gerente de producción de Mercedes-Benz Argentina, Juan Tasselkraut, cuando en el Juicio por la Verdad el juez le preguntó si había relación entre la desaparición de 14 obreros durante la dictadura militar y el

aumento significativo de la productividad en la fábrica. Este documental fue emitido por varios canales de televisión en América Latina, pero los canales alemanes nunca se atrevieron a hacerlo. Un documental de Gaby Weber.

32. 21 por ciento de los desaparecidos eran estudiantes.

El 21 de abril de 1977, el obispo de Viedma, Miguel Esteban Hesayne intentó presentar a Harguindeguy, de visita en Río Negro, los casos de secuestros y torturas que se denunciaban en el Obispado. «Regresé de dicha entrevista, angustiado, apenado y embargado de un gran temor por el futuro inmediato de nuestro país», escribió tres días después Hesayne en una carta dirigida a Harguindeguy. El ministro «a cargo del orden interno admite por principio la tortura como instrumento», recapitula Hesayne. En ese diálogo «no sólo encontré errores», agrega, «sino abierta declaración de principios de acción contrarios a lo más elemental de la moral cristiana». Hesayne dejó constancia por escrito de que «la tortura es inmoral la emplee quien la emplee. Es violencia y la violencia es antihumana y anticristiana, en frase célebre de Paulo VI para sintetizar la doctrina católica, al respecto». El obispo decía haber comprobado con angustia que las Fuerzas Armadas «optan para ganar una batalla muy dura y peligrosa por los principios maquiavélicos, renunciando de hecho a Cristo y a su Evangelio, no obstante los actos de culto católico que programen». Había comprobado que no se trataba de «errores cometidos por algunos» sino que «desde la alta oficialidad se reniega prácticamente del Evangelio al ordenar o admitir la tortura como medio indispensable». Ante esta «triste realidad, Dios no puede seguir bendiciendo a Fuerzas Armadas que ultrajan cria-

turas suyas, bajo el pretexto que fuere. Sigue siendo válido siempre aquello afirmado rotundamente por Jesús: Lo que hiciereis al más pequeño, a mí me lo hacéis». Con una clarividencia que pocos tuvieron, Hesayne advierte que «una victoria a costa de actos indignos se convierte pronto en derrota, porque nadie construye ni al margen ni contra Dios. Fuerzas Armadas que torturan no saldrán impunes ante Dios Creador». Si en la historia argentina «hubo pena de excomunión para quienes violaron templos materiales, ¿qué pena merecen los que violan torturando los templos vivos de Dios, que son todo hombre o mujer?», concluye.

33. 3,8 por ciento de los desaparecidos eran amas de casa.

«Señores jueces:

«Se ha probado durante este juicio la existencia de un plan criminal que no concluyó cuando fueron reemplazados los procesados Galtieri, Anaya y Lami Dozo. La crisis interna que produjo entre las autoridades del Proceso de Reorganización Nacional la derrota militar sufrida en las Islas Malvinas, no importó ningún cambio en las directivas dadas a raíz de la lucha contra la subversión.

«(...)

«Este proceso ha significado, para quienes hemos tenido el doloroso privilegio de conocerlo íntimamente, una suerte de descenso a zonas tenebrosas del alma humana, donde la miseria, la abyección y el horror registran profundidades difíciles de imaginar antes y de comprender después.

«Dante Alighieri —en *La Divina Comedia*— reservaba el séptimo círculo del infierno para los violentos: para todos aquellos que hicieran un daño a los demás mediante la fuerza. Y dentro

de ese mismo recinto, sumergía en un río de sangre hirviente y nauseabunda a cierto género de condenados, así descriptos por el poeta: «Estos son los tiranos que vivieron de sangre y de rapiña. Aquí se lloran sus despiadadas faltas».

«Yo no vengo ahora a propiciar tan tremenda condena para los procesados, si bien no puedo descartar que otro tribunal, de aún más elevada jerarquía que el presente, se haga oportuna-

mente cargo de ello.

«Me limitaré pues a fundamentar brevemente la humana conveniencia y necesidad del castigo. Sigo a Oliva Wondell Holmes, cuando afirma: «La ley amenaza con ciertos males si uno hace ciertas cosas. Si uno persiste en hacerlas, la ley debe infligir estos males con el objeto de que sus amenazas continúen siendo creídas».

«El castigo —que según ciertas interpretaciones no es más que venganza institucionalizada— se opone, de esta manera, a la venganza incontrolada. Si esta posición nos vale ser tenidos como pertinaces retribucionistas, asumiremos el riesgo de la seguridad de que no estamos solos en la búsqueda de la deseada ecuanimidad. Aún los juristas que más escépticos se muestran respecto de la justificación de la pena, pese a relativizar la finalidad retributiva, terminan por rendirse ante la realidad.

«Podemos afirmar entonces con Gunther Stratenwerth que aún cuando la función retributiva de la pena resulte dudosa, tácticamente no es sino una realidad: «La necesidad de retribución, en el caso de delitos conmovedores de la opinión pública, no podrá eliminarse sin más. Si estas necesidades no son satisfechas, es decir, si fracasa aunque sólo sea supuestamente la administración de la justicia penal, estaremos siempre ante la amenaza de la recaída en el derecho de propia mano o en la justicia de Lynch».

«Por todo ello, señor presidente, este juicio y esta condena son importantes y necesarios para la Nación argentina, que ha sido ofendida por crímenes atroces. Su propia atrocidad torna monstruosa la mera hipótesis de la impunidad. Salvo que la con-

ciencia moral de los argentinos haya descendido a niveles tribales, nadie puede admitir que el secuestro, la tortura o el asesinato constituyan «hechos políticos» o «contingencias del combate». Ahora que el pueblo argentino ha recuperado el gobierno y control de sus instituciones, yo asumo la responsabilidad de declarar en su nombre que el sadismo no es una ideología política ni una estrategia bélica, sino una perversión moral. A partir de este juicio y esta condena, el pueblo argentino recuperará su autoestima, su fe en los valores sobre la base de los cuales se constituyó la Nación y su imagen internacional severamente dañada por los crímenes de la represión ilegal...

«Los argentinos hemos tratado de obtener la paz fundándola en el olvido, y fracasamos: ya hemos hablado de pasadas y frustradas amnistías.

«Hemos tratado de buscar la paz por la vía de la violencia y el exterminio del adversario, y fracasamos: me remito al período que acabamos de describir.

«A partir de este juicio y de la condena que propugno, nos cabe la responsabilidad de fundar una paz basada no en el olvido sino en la memoria; no en la violencia sino en la justicia.

«Esta es nuestra oportunidad: quizá sea la última.

«(...)

«Señores jueces: quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria.

«Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino.

«Señores jueces: Nunca más», dijo el entonces fiscal federal, Julio César Strassera, en diciembre de 1985.

34. 120 ex soldados argentinos en Malvinas presentaron denuncias por haber sido torturados por sus superiores durante la guerra.

Una de las actas da cuenta del testimonio de un teniente primero que relata que un oficial «lo ató de pies y manos a la espalda, colocándolo de cara al suelo, en la arena mojada de la playa, desde las 9 hasta las 17 horas», u otro de un sargento que recibió patadas en los testículos por lo cual debió ser operado.

Otro documento secreto —firmado por el entonces comandante en jefe del Ejército, teniente general Cristino Nicolaides, el 30 de diciembre de 1982, seis meses después de terminada la guerra— revela un plan de la dictadura para ocultar esos delitos cometidos en las islas.

En el texto —rotulado como secreto por el Ejército— Nicolaides dejó asentados los lineamientos para ocultar las torturas y vejámenes que aplicaron a los conscriptos, en una nota dirigida al comandante del v Cuerpo del Ejército.

En esa nota, a la que también pudo acceder Télam, se indica que a la hora de impulsar una investigación interna, los vejámenes fueran considerados como simples «faltas disciplinarias» y que en los casos en que sea imposible por la gravedad del hecho, que se le informe la situación a él en persona para resolver el problema.

«En los casos en que se acreditare alguna infracción las respectivas resoluciones no excederán el ámbito disciplinario, dentro de pautas de mesura, guardando la adecuada reserva», fue la orden escrita por Nicolaides, a fin de evitar filtraciones a la sociedad en un momento en que los dictadores procuraban conservar el poder tras la derrota en la guerra.

«Esta documentación demuestra que hubo una planifica-

ción de Inteligencia para evitar que los relatos de los soldados trascendieran cuando volvieran al continente», explicó Alonso, quien adelantó que todo el material desclasificado también será remitido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Los ex combatientes recurrieron a esta instancia por «negación de justicia» luego de que la Corte Suprema de Justicia declarara prescripta la causa y clausurara la investigación.

35. 517 mil por ciento fue la inflación acumulada entre 1976 y 1983.

Gómez Alcorta sostuvo en la presentación del informe sobre empresas y dictadura que los orígenes de este trabajo situado a comienzos de 2014 comenzó a entenderse una necesidad: «Una vez reconstruida las características del aparato represivo, identificamos que no estaba disponible un insumo para entender el universo del colectivo de víctimas entre los trabajadores». «Ante la lectura de todos los casos juntos nos encontramos en condiciones de explicar la clara responsabilidad de un sector del empresariado en los crímenes que tuvieron a estas víctimas», explicó. «Por eso decimos que la palabra 'participación' o 'complicidad' a priori no resulta correcta para la comprensión de los crímenes en estas intervenciones.» El informe encontró «un patrón común en las prácticas represivas y una estrategia común de disciplinamiento laboral de terrorismo de estado». Marca distintas formas de disciplinamiento de las fábricas en las que se encuentra el extremo de haber tenido centros clandestinos de detención. Pero también hubo formas más invisibilizadas, como la entrega de listas, el señalamiento de blancos o delegados, listas de direcciones, fotos, legajos personales o apoyo de logísticas. En esos «patrones de recurrencia» encontraron que en el 88 por ciento de las

empresas hubo secuestros o despedidos; el 76 por ciento entregó información privada de los trabajadores; el 72 por ciento tuvo presencia de actividad militar, control y amedrentamiento y en el 52 por ciento de las firmas hubo presencia de cuadros empresariales en la detención, secuestro y tortura de los trabajadores. «En este sentido, evidencian las distintas formas de combinación de prácticas empresariales y militares del terrorismo de estado que tuvieron como víctimas a los trabajadores.»

36. 21.526 es el número de la llamada ley de entidades financieras que rige desde el 14 de febrero de 1977.

«Se identificaron casi 900 trabajadores que resultaron víctimas del terrorismo de Estado. 354 víctimas están desaparecidas, 65 fueron asesinadas y más de 450 sufrieron formas diversas de represión y fueron luego liberadas. La mayoría eran trabajadores/as y ex trabajadores/as de las empresas analizadas al momento de los hechos», indica el informe.

Y agrega: «entre los últimos, fueron incluidos quienes participaron de los procesos de conflicto y organización obrera hasta los últimos tiempos antes de iniciada la dictadura y fueron despedidos o debieron renunciar a raíz de la represión y para preservar su seguridad. También fueron incluidos casos 'conexos', tratándose de personas que sufrieron la represión a raíz de su vinculación con trabajadores o ex trabajadores o distintas formas de conexión con la empresa, pero no tenían un vínculo laboral».

Mediante distintos criterios de selección, se elaboraron veintidós informes donde se investiga a las siguientes empresas: minera El Aguilar, La Veloz del Norte, Grafanor, ingenios Ledesma, La Fronterita y Concepción (NOA); Alpargatas, Molinos Río

de la Plata, Swift, Propulsora Siderúrgica, Astillero Río Santiago y Petroquímica Sudamericana (cordones del conurbano sur bonaerense); Grafa, Ford, Mercedes-Benz, Lozadur y Cattáneo, astilleros Astarsa y Mestrina, Dálmine-Siderca y Acindar (norte y oeste de la provincia de Buenos Aires y sur de Santa Fe); FIAT (zona Centro); Las Marías (NEA); Loma Negra y La Nueva Provincia (interior de Buenos Aires).

Algunas causas tienen imputados a dueños o cuadros empresariales, al tiempo que en otras los imputados son militares. También existen causas que incluyen casos de obreros víctimas de delitos de lesa humanidad como parte de un cuerpo de víctimas más numeroso y heterogéneo. Actualmente, el caso más avanzado contra un empresario es el de La Veloz del Norte de Salta, cuyo ex dueño, Marcos Levín, se encuentra enfrentando el juicio oral y público.

En cinco de los casos existieron entre sesenta y más de cien trabajadores víctimas de la represión: Astillero Río Santiago, Dálmine-Siderca, Acindar, ingenio Ledesma y FIAT. En otros cinco, las víctimas fueron entre treinta y cuarenta, al tiempo que en otras catorce empresas existieron entre diez y treinta trabajadores víctimas. Una sola empresa de este conjunto analizado, el taller gráfico de La Nueva Provincia, tuvo dos trabajadores víctimas.

37. 1,6 por ciento de los desaparecidos fueron periodistas.

Citados por la oficina de prensa del III Cuerpo de ejército, el 29 de abril de 1976, periodistas de distintos medios de Córdoba llegaron al Regimiento 14 de Infantería, situado justo en frente del despacho que el general Luciano Benjamín Menéndez tenía en los cuarteles de camino a La Calera. Ante su presencia y la del

teniente coronel Gorleri, Jefe del Regimiento, los trabajadores de prensa empezaron a ver cómo centenares de libros previamente confiscados de las librerías de Córdoba ardían en una gran fogata. Fue entonces cuando Gorleri hizo uso de la palabra para justificar una acción propia de la Inquisición, cuando además de libros, la Iglesia Católica quemaba personas en la plaza pública: «Incineramos esta documentación perniciosa que afecta al intelecto, a nuestra manera de ser cristiana..., y en fin a nuestro más tradicional acervo espiritual sintetizado en Dios, Patria y Hogar».

38. 1.500.000 de libros fueron quemados

El 30 de agosto de 1980 la policía bonaerense quemó en un baldío de Sarandí un millón y medio de ejemplares del Centro Editor de América Latina, retirados de los depósitos por orden del juez federal de La Plata, Héctor Gustavo de la Serna. Los libros ardieron durante tres días. Cabe aclarar que no fue esa la única vez que la dictadura quemó libros. El 29 de abril de 1976, Luciano Benjamín Menéndez, jefe del III Cuerpo de Ejército con asiento en Córdoba, ordenó una quema colectiva de libros, entre los que se hallaban obras de Proust, García Márquez, Cortázar, Neruda, Vargas Llosa, Saint-Exupéry, Galeano... Dijo que lo hacía «a fin de que no quede ninguna parte de estos libros, folletos, revistas... para que con este material no se siga engañando a nuestros hijos». Y agregó: «De la misma manera que destruimos por el fuego la documentación perniciosa que afecta al intelecto y nuestra manera de ser cristiana, serán destruidos los enemigos del alma argentina». (Diario La Opinión, 30 de abril de 1976).

39. 700 millones de dólares costó el Mundial 1978.

Así, con secuestrados por todo el país, en junio del '78 los argentinos que podían caminar sin preocupaciones por la calle se sentaban en un sillón para ver los partidos del Mundial, ese en el que la dictadura gastó 700 millones de dólares, una cifra sideral y envuelta de corrupción. Lo primero en crearse fue el Ente Autárquico Mundial 78 (EAM 78), que les facilitaba a los militares el control absoluto del torneo. El primer presidente fue el general Omar Actis, del Ejército y enfrentado con Carlos Lacoste —un íntimo de Emilio Massera, de la Armada e integrante de la Junta—. Fue Lacoste quien finalmente terminó controlando el EAM 78 ante la sospechosa y nunca esclarecida muerte de Actis en 1976, en un hecho que se trató de atribuir oficialmente a la guerrilla pero sobre el que siempre sobrevoló la sombra de Massera. Eso favoreció el gasto millonario en el que se incluyó la remodelación total del edificio de ATC, con el declamado objetivo de garantizar la mejor calidad de transmisión, como también la terminación de los estadios de River, Vélez y Central y la realización de los de Córdoba, Mar del Plata y Mendoza.

40. 160 por ciento fue la inflación del año del Mundial, en 1978.

El 25 de marzo la Junta recibió de manos del deporte una de las primeras adhesiones. La dio el presidente de la Confederación Brasileña de Deportes (CBD), almirante Heleno Nunes. «Tal vez sea la mejor garantía de la Copa del Mundo en Argentina»,

dijo Nunes. Al día siguiente arribó a Buenos Aires una comisión de la FIFA, para inspeccionar las obras del Mundial, encabezada por el alemán Hermann Neuberg, SS en los tiempos de Hitler. «El cambio de Gobierno no tiene nada que ver con el Mundial. Somos gente de fútbol y no políticos», dijo Neuberger. Más claro aún fue el propio mandamás de la FIFA, Joao Havelange. El 28 de marzo decía desde el exterior que «la Argentina está ahora más apta que nunca para organizar el mundial». Recibiendo a la FIFA en Ezeiza aquel 25 de marzo estaba ya el almirante Carlos Lacoste, la bota que Massera puso dentro del deporte, para manejar el poder y los negocios. •

Epílogo

Cuarenta años después del golpe del 24 de marzo de 1976, el sueño colectivo inconcluso de la igualdad continúa siendo el gran proyecto todavía no alcanzado.

Somos lo que soñamos.

Y lo que hacemos en función de transformar la realidad para concretar esos ideales.

La ferocidad del capitalismo se demuestra en la vida cotidiana y también en la depredación de la naturaleza.

Tal como lo decían desde los sacerdotes por el tercer mundo a todos y cada uno de los militantes revolucionarios de los años setenta, no hay posibilidad de un futuro para los que son más en esta cápsula espacial llamada planeta Tierra dentro del actual sistema de dominación económica, política y cultural.

Las actuales luchas contra el narcotráfico y los modelos extractivistas a través de sus múltiples caretas (desde el sojalismo exacerbado a la minería a cielo abierto) son peleas contra el capitalismo.

Construcciones colectivas de respuestas que surgen desde abajo como verdaderas alternativas ante los negocios que se imponen desde diferentes nichos corruptos de los gobiernos nacionales, provinciales y municipales.

La generalización, sin embargo, es un problema.

Precisión, socialización de la información, construcción de espacios sociales y políticos en lo cercano, amplitud, humildad y tolerancia parecen ser etapas de un proceso que vaya asomándose ante las mayorías como una real posibilidad de un presente mejor, necesariamente mejor.

El país dependiente que sigue siendo la Argentina (el 60 por ciento de las principales cincuenta empresas que concentran la economía son extranjeras) tiene, al mismo tiempo, el problema histórico de la imposición de visiones políticas, económicas y culturales que viene desde Buenos Aires. Somos una nación que se dice federal pero que es profundamente unitaria, según las claves políticas jamás desechas del siglo diecinueve.

Los apuros y los atajos, generalmente, llevan a la inmolación. Rodolfo Walsh advertía, hacia 1975, el dramático problema político de las vanguardias que, al separarse del pueblo, terminan convirtiéndose en patrullas perdidas.

La palabra paciencia debe tener una dimensión política de importancia para todos aquellos que consideran la necesidad de construir un socialismo que permita vivir en igualdad y también en libertad.

Las diferencias políticas que parecen insalvables entre organizaciones del llamado campo popular deberían pensarse de acuerdo a los ojos de los desaparecedores. Algunos sobrevivientes de los centros de detención han confesado que bajo la mirada de los torturadores, trotskistas, comunistas, peronistas, cristianos, radicales, socialistas e independientes eran todos iguales. Eran tratados como «mutantes», una especia subhumana que había desafiado el supuesto orden natural impuesto por las clases

dominantes. Alguna vez habrá que tener en cuenta estas cosas a la hora de pensar y construir herramientas políticas de verdadera transformación social, tanto a nivel municipal, provincial, regional y nacional.

A cuarenta años del golpe de estado más sanguinario de la historia argentina es preciso construir puentes entre las diferentes generaciones.

El individualismo y el consumismo, principales valores del capitalismo, deben ser combatidos desde la práctica concreta y la valoración de aciertos y errores de experiencias colectivas anteriores.

Cuarenta años después, los negocios de los titiriteros, de los delincuentes de guante blanco, parecen gozar de buena salud.

Sin embargo acá estamos nosotros.

Emocionados testigos de las luchas anteriores, conmovidos receptores de mensajes revolucionarios que aún tienen vigencia, enamorados de nuestras hijas y comprometidos con los nuevos protagonistas de la historia para que sigan creyendo que lo humano está por encima de cualquier negocio.

Por eso, cuarenta años después, seguimos peleando.

No nos han vencido.

Carlos del Frade
Rosario, enero de 2016.

Fuentes

Entrevistas

AGUIRRE, Osvaldo (periodista).
ALOI, Jorge (sacerdote católico).
AMADOR, Manuel (ex detenido).
AMELONG, Fernando (ex directivo de Duperial).
AMELONG, Daniel (ex integrante de los Servicios de Inteligencia del Ejército e imputado de distintos delitos de lesa humanidad).
ARAMBURU, José (sacerdote).
ARANCEDO, José (arzobispo de Santa Fe).
ARANDA, Carlos (militante social).
ARAYA, Dolores (integrante de HIJOS).
ARIZAGA, Susana (maestra).
ARROYO, Juan (ex sacerdote).
AUZMENDI, Armando (dirigente político).
AYALA, María del Rosario (militante social).

AYALA, Néstor (militante social).
AYASTUI, Matías (HIJOS).
AZUM, José (ex directivo de PASA).
BALBI, Víctor (sobreviviente de varios apremios ilegales en democracia).
BARBERO, Edgardo (dirigente sindical).
BARELLO, Raúl (empresario).
BARRIONUEVO, Oscar (dirigente sindical).

BAYER, Osvaldo (historiador y escritor).
BELFER, Jaime (juez federal).
BELLO, Osmar (militante social).
BERERCIARTUA, Roberto (dirigente político).
BERNADU (coronel del II Cuerpo).
BERTOLINO, Marta (psicóloga y sobreviviente del Servicio de Informaciones).
BERRA, José (sobreviviente del Servicio de Informaciones).
BLANDO, Manuel (abogado).
BONAFINI, Hebe de (Madre de la Plaza).
BONASSO, Miguel (periodista, escritor).
BONGELLI, Oscar (dirigente gremial).
BORDA, Graciela (sobreviviente).
BORGONOVO, Esteban (ex subsecretario de asuntos legislativos).
BORNEMANN, Jorge (directivo de Dow Chemical).
BRACACCINI, Gladys (ama de casa).
BRUERA, Matilde (abogada).
BUGNA, Anatilde (militante de Organismos de Derechos Humanos).
CABRERA, Sandra (dirigente sindical asesinada el 27 de enero de 2004).
CABRERA HANSEN, Olga (abogada y sobreviviente del Servicio de Informaciones).
CACERES, Ricardo (militante político misionero).
CAGGIANO, María Eugenia (abogada).
CAMARA, Ana (sobreviviente).
CAPELLA, José Luis (abogado ambientalista).
CARRA, Osvaldo (ex obrero de PASA).
CARRILLO, Carlos (juez federal).
CARRIO, Elisa (dirigente política).

CASCO, Judit (trabajadora social).
CASTRO, Jorge (ex preso político).
CATERINA, Luis (juez de instrucción).
CAVALLERO, Héctor (diputado nacional).
CENSABELLA, José (dirigente empresarial).
CENSI, Mario (abogado).
CERUTI, Leónidas (historiador).
CEVALLO, Eduardo (dirigente político y ex ministro de gobierno de Santa Fe).
CLARA, Mirta (militante social).
CORTES, Alberto (concejal rosarino).
COSIDOY, Laura (jueza federal rosarina).
CONSTANZO, Eduardo (asesino y ex servicio de inteligencia).
CRIPPA García, Oto (camarista provincial).
CRACOGNA, Horacio (militante social).
CHABABO, Rubén (director del Museo de la Memoria).
DAMBROSIO, Ángel (dirigente político).
DAMICO, Roberto (sacerdote católico).
DE LA TORRE, Carlos (miembro de la APDH).
DIGERONIMO, Omar (juez federal).
DUNDA, Rubén (ex diputado provincial).
ECHEGOY, Lilián (miembro de Familiares).
EL KADRI, Envar (militante de la vida, hoy fallecido).
ENZ, Daniel (periodista).
FALCON, Ricardo (sociólogo).
FERMOSELLE (ex policía y nombrado en la Causa Feced)
FERHMANN, Marta (docente).
FERNÁNDEZ, Reynaldo (militante social).
FIGUEROA, Marta (ex mujer del «Gato» Saichuck).
FORESTELLO, Victoria (estudiante).
FORESTELLO, María Adela (jubilada).
FOUSSAL, Raúl (docente).
FRACCAROLLI, Aurora (Madres, Gualeguaychú).
FRAGUEYRO, Ricardo (empresario).

GALANZINO, Luis (ex policía).
GALASSO, Norberto (historiador).
GALICCHIO, Darwinia (Abuela de Plaza de Mayo).
GARCÍA, Guillermo (directivo de Celulosa).
GENOLET, Rubén (ex directivo de Duperial).
GERMANO, Guillermo (funcionario de Entre Ríos).
GHIOLDI, Rubén (dirigente gremial).
GIGLIONE, Daniel (sobreviviente del Servicio de Informaciones).
GONZÁLEZ, Josefina (HIJOS).
GORRIARAN MERLO, Enrique (ex dirigente del ERP)
GOYA, Emilio (Hijos).
GROSSO, Jorge (dirigente sindical).
GUALLANE, Carolina (hija de desaparecidos).
GUILLERMO (sobreviviente del Servicio de Informaciones).
GUTIÉRREZ, Alicia (dirigente política).
HERNÁNDEZ, Ester Andrea (Jueza Federal).
HERNÁNDEZ LARGUÍA, Mariana (dirigente de Derechos Humanos).
HERRERA, Manuel (ex directivo de PASA).
HESAYNE, Miguel (sacerdote católico).
HOURCADE, Eduardo (historiador).
ISERN, María José (miembro de comunidades de base).
ISERN, Omar (dirigente social y funcionario rosarino).
JALIL, Nelma (Madre de Plaza de Mayo).
JUAREZ, Jorge (juez de instrucción provincial).
KARAMAN, José (sacerdote).
KOFMAN, Celina (Madre de Plaza de Mayo de Santa Fe).
KOFMAN, Hugo (dirigente social).
KOHAN, Alberto (ex funcionario menemista).
KOHAN, Judith (cientista social).
KOZAMEH, Alicia (escritora y militante).
LAURA (vecina de la calle Santiago al 2800).
LEGUIZAMÓN, Ramón (abogado).
LENSCAK, Juan (militante político).

LEONE, Carlos (empresario).
LO FIEGO, José (torturador).
LÓPEZ MAYORGA, Ricardo (empresario).
LOZANO, Claudio (economista).
LUCERO, Carmen (militante de Organismos de Derechos Humanos).
LUCERO, Juan (sobreviviente y exiliado).
LUENGO, Alejandro (fiscal federal de Santa Fe).
LUNA, Daniel (ex concejal).
LUNA, Élida (militante de Organismos de Derechos Humanos).
MAC GUIRE, Santiago (sacerdote católico).
MADERNA, Horacio (ex oficial del Ejército).
MAGGI, José (periodista).
MANCUSSO, Lorenzo (sacerdote católico).
MANSUR, Alejandra (artista e hija de desaparecido nacida en cautiverio).
MARCOTE, Mario (torturador).
MARTÍNEZ, Gustavo (dirigente sindical)
MARTÍNEZ DE HOZ, José (ex ministro de economía).
MAS, Gerardo (dirigente sindical).
MELLADO, Fernando (abogado penalista).
MÉNDEZ, Héctor (periodista).
MENESES, Carlos (dirigente sindical).
MIDON, Hugo (militante social).
MIGUELES, Jorge (militante social).
MINELLA, Alberto (médico, Los Surgentes).
MIRAS, Eduardo (arzobispo de Rosario).
MONTALDO, Edgardo (sacerdote católico).
MURRAY, Juan (fiscal federal de San Nicolás).
NARANJO, Rubén (artista y dirigente de Derechos Humanos).
NATALE, Alberto (diputado nacional).
NAZABAL, Cecilia (docente).
NUÑEZ, Joaquín (sacerdote católico).
OLIVARES, Norberto (dirigente de Derechos Humanos).
OLIVEROS, Amadeo (comandante mayor de Gendarmería).

OPERTO, Walter (periodista).
OSCAR M. (ex empleado de la tesorería de la Jefatura de Policía).
OYARZABAL, Francisco (contador).
PAGURA, Federico (obispo metodista).
PALADINI, Roberto (empresario).
PAPALARDO, Hugo (sobreviviente).
PAULON, Victorio (dirigente sindical).

PEDRAZA, Jorge (abogado y sobreviviente).
PENDINO, Jorge (dirigente gremial).
PFEIFFER, Beatriz (sobreviviente).
PERAZZO, Leyla (jefa de la policía provincial).
PERDIA, Roberto (ex conducción de Montoneros).
PÉREZ VARA, Liliana (jueza de instrucción de Rosario).
PETERS, Bárbara (HIJOS).
PICCININI, Alberto (dirigente gremial y político).
PIOLA, Juan Carlos (toxicólogo).
POCHETINO, Domingo (funcionario provincial).
POLES, José (ex dirigente sindical).
PONCE DE LEON, Ana (familiar de desaparecidos).
PORCU, Ángel (ex dirigente sindical de Acindar).
PRESELLO, Ángel (docente).
PRESMAN, Hilda (militante social).
PUYOL, Lucía (integrante de HIJOS).
QUAGLIARO, Héctor (dirigente sindical).
QUINTANA, Gregorio (militante social).
QUIROGA, Edgardo (dirigente sindical).
RAIMONDI, Miguel (dirigente político).
RAVELO, Alejandra Leoncio de (Abuela de la Plaza).
RAZZETI, Carlos (comerciante).
REMONDINO, Marcelo (dirigente social).
RIVERO, Juan (dirigente político y social).
RODRÍGUEZ, Pedro (concejal de San Lorenzo).
RODRIGUEZ ARAYA, Lisandro (estudiante).

ROLDÁN, Carlos (ex directivo de Acindar).
ROSARIO (ex concubina de Agustín Feced).
ROSENVAIG, Eduardo (escritor e historiador).
ROSUA, Roberto (ex ministro de Gobierno de Santa Fe).
RUOPPOLO, Antonio (ex policía).
SAENZ, Elsa (maestra).
SAICHUCK, Marcelo (hijo del ex titular del Servicio de Informaciones de la policía rosarina).
SALAMI, Víctor (sobreviviente).
SALCEDO, Sebastián (dirigente sindical).
SANTILLÁN, Daniel (dirigente sindical).
SANTISO, Agustín (dirigente cristiano) .
SEMINARA, «Pochi» (ama de casa).
SHILLMAN, Raúl (sobreviviente del Servicio de Informaciones).
SHULLMAN, Eduardo (ex detenido y actual periodista).
SIÑERIZ, Daniel (sacerdote).
SOBKO, Clarisa (hija de desaparecido).
SOSO, Elías (dirigente empresario).
TESSA, José (dirigente gremial).
TESAN, Dionisio (camionero de Los Surgentes).
TIZZIANI, Juan (periodista).
TRUCCO, Edgardo (sacerdote católico).
TONIOLLI, Eduardo (integrante de HIJOS).
TONIOLLI, Fidel (padre de desaparecido).
TOSETTO, Josefina (hija de desaparecidos).
TRIGLIA, Carlos (juez de instrucción).
VACS, Raúl (dirigente social de San Nicolás).
VALLINA, Cecilia (periodista).
VEGA, Iván (hijo de desaparecidos).
VEGA, Santa Isabel Gianfelice de (abuela).
VENESIA, Gualberto (ex vicegobernador de la provincia).
VERMEULEN, Norma (Madre de la Plaza 25 de Mayo).
VERNET, José (ex gobernador de Santa Fe).

VITIELLO, Juan José (concejal y ex detenido).
VANRELL, Antonio (ex vicegobernador de Santa Fe).
YACO, Salvador (sacerdote católico).
YANUZZI, María de los Ángeles (socióloga).
ZAMBONI, Horacio (abogado laboralista).
ZINNA, Gabriela (periodista).
ZOTTO, Edgardo (ex ministro de gobierno de Santa Fe).

Documentos Judiciales

Causa federal 47.913, «Agustín Feced y otros», 49 cuerpos depositados en el subsuelo de los Tribunales Federales de Rosario.

Comisión Bicameral, Caso Brandazza, Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, 1975.

Legajos de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, en el subsuelo de los Tribunales Federales de Rosario.

Presentaciones sobre los casos Cambiasso-Pereyra Rossi, Quinta de Funes (testimonio de Jaime Dri).

Usurpación del domicilio de Santiago 2815, Causa Shillman, autos de procesamientos de las causas Halford, Arzamendia y Lascurain —vinculadas al narcotráfico y su relación con la policía provincial de Santa Fe—, Caso Galanzino, entre otras.

Presentaciones por las causas por la verdad histórica en los juzgados federales de Santa Fe y Rosario.

Pericia caligráfica que demuestra que Agustín Feced estaba vivo en 1988, dos años después de su oficial muerte por la que se cerró el expediente 47.913.

Bibliografía

Diarios: El Litoral; La Capital; Rosario/12; Clarín, La Nación y Página/12.

Portales informativos: Postales del sur; El Consultor Web; Notife, Siempre Tarde, Regionnet y distintos organismos oficiales nacionales, provinciales y municipales.

ABOS, Alvaro, *Las organizaciones sindicales y el poder militar*, Centro Editor de América Latina, Buenos Aires, 1984.

ABUELAS DE PLAZA DE MAYO, *Niños desaparecidos. Jóvenes localizados*, Temas Grupo Editorial, Buenos Aires, 1999.

ABUELAS DE PLAZA DE MAYO y otros Organismos de Derechos Humanos, *Culpables para la sociedad. Impunes por la ley*, María Teresa Piñero, Buenos Aires, 1988.

AGUILA, Gabriela; GUEVARA, Gustavo; VIANO, Cristina, *Rosario en la historia (de 1930 a nuestros días) Tomo 2,* UNR Editora, Rosario, 2000.

AGUIRRE, Osvaldo, *Los pasos de la memoria*, Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, Rosario, 1996.

ANDERSEN, Martín, *Dossier secreto*, Planeta, Buenos Aires, 1993.

ANDINO, Mario; ESPINACO, Miguel, *Hay un positivo*, Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, 2002.

ANGUITA, Eduardo, *La compañía de monte*, Planeta, Buenos Aires, 2004.

ANZORENA, Oscar, *Tiempos de violencia y utopía*, Contrapunto, Buenos Aires, 1988.

ASOCIACIÓN AMERICANA DE JURISTAS, *Juicio a los militares*, Buenos Aires, 1988.

BASCHETTI, Roberto, *Documentos. De la guerrilla peronista al gobierno popular*, De la Campana, Buenos Aires, 1995.

BASUALDO, Eduardo; LOZANO, Claudio, *El conflicto de Villa Constitución*, IDEP, Buenos Aires, 1991.

BAYER, Osvaldo, *La Patagonia Rebelde*, Planeta, Buenos Aires, 2002.

BLAUSTEIN, Eduardo; ZUBIETA, Martín; *Decíamos ayer*, Colihue, Buenos Aires, 1998.

BONASSO, Miguel, *Diario de un clandestino*, Editorial Planeta, Buenos Aires, 2000.

BONASSO, Miguel, *El presidente que no fue*, Editorial Planeta, Buenos Aires, 1997.

BONASSO, Miguel, *Recuerdo de la muerte*, Planeta, Buenos Aires, 1994.

BONNET, Carlos, *Sobre héroes y mártires*, Pergamino, 1994.

BORSATTI, Raúl, *Solo digo compañeros*, Reconquista, 2005.

BRA, Gerardo, *El gobierno de Onganía*, Centro Editor de América Latina, Buenos Aires, 1985.

BRESCI, Domingo, *Movimiento de sacerdotes para el Tercer Mundo*, Centro Salesiano de Estudios de San Juan Bosco, Buenos Aires, 1994.

CALVEIRO, Pilar, *Política y/o violencia*, Grupo Editorial Norma, Buenos Aires, 2005.

CARDOSO, Oscar; KIRSCHBAUM, Ricardo; VAN DER KOOY, Eduardo, *Malvinas, la trama secreta*, Planeta, Buenos Aires, 1992.

CARPENA, Ricardo; JACQUELIN, Claudio; *El intocable*, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1994.

CERRUTI, Leonidas; RESELS, Mariano, *Los obreros petroquímicos*, Facultad de Humanidades y Artes, Rosario, 1991.

CIANCAGLINI, Sergio; GRANOVSKY, Martín, *Nada más que la verdad*, Planeta, Buenos Aires, 1995.

CONADEP, *Nunca Más*, Editorial de la Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 1984.

CHERÑAVSKY, Moisés, *La seguridad nacional y el fundamentalismo democrático*, Centro Editor de América Latina, Buenos Aires, 1993.

D'ANDREA MOHR, José Luis, *Memoria debida*, Colihue, Buenos Aires, 1999.

D'ANDREA MOHR, José Luis, *El escuadrón perdido*, Planeta, Buenos Aires, 1998.

DARGOLTZ, Raúl, *Hacha y quebracho*, Ediciones del Mar Dulce, Buenos Aires, 1985.

DE FELIPE, Rodolfo; GUBERMAN, Lucio; MUGICA, Tomás; *Más allá del acero. La identidad nicoleña frente al desafío del desarrollo local*, Laborde editor, Rosario, 1999.

DEHEZA, José, *¿Quiénes derrocaron a Isabel Perón?*, Ediciones Cuenca del Plata, Buenos Aires, 1981.

DEL FRADE, Carlos, *Desaparecidos, desocupados*, Fantasía Industrial II, Rosario, 1996.

DEL FRADE, Carlos, *El Rosario de Galtieri y Feced*, El Eslabón, Rosario, 2000.

DEL FRADE, Carlos, *Santa Fue. Una provincia robada*, Editorial Ciudad Gótica, Rosario, 2003.

DEL FRADE, Carlos, *La iglesia y la construcción de la impunidad*, Fantasía Industrial II, Rosario, 1995.

DRI, Rubén, *Proceso a la iglesia argentina*, Editorial Biblos, Buenos Aires, 1997.

DUTIL, Carlos; RAGENDORFER, Ricardo, *La bonaerense*, Planeta, Buenos Aires, 1997.

ELIAS, Ángel, *Las lecciones del caso Acindar*, UNR Editora, Rosario, 1991.

ENZ, Daniel, *Rebeldes y ejecutores*, Imprenta Luz, Santa Fe, 1995.

FEHRMANN, Marta, *Literatura y derechos humanos*, Editorial Ciudad Gótica, Rosario, 2005.

FUCHS, Jaime, *Las transnacionales en la Argentina* 1 y 2, Centro Editor de América latina, Buenos Aires, 1993.

GALANZINO, Luis, *Poder, justicia y drogas*, Edición del autor, Santa Fe, 2005.

García, Alicia, *La doctrina de la seguridad nacional*, Centro Editor de América Latina, Buenos Aires, 1991.

García LUPO, Rogelio, *Mercenarios y monopolios en la Argentina*, Achavalsolo, Buenos Aires, 1973.

González JANSEN, Ignacio, *La Triple A*, Contrapunto, 1986.

GORBATO, Viviana, *Montoneros, soldados de Menem, ¿soldados de Duhalde?,* Sudamericana, Buenos Aires, 1999.

GORRIARAN MERLO, Enrique, *Memorias*, Planeta, Buenos Aires, 2003.

GURUCHARRI, Eduardo, *Un militar entre obreros y guerrilleros*, Ediciones Colihue, Buenos Aires, 2001.

HERRERA, Matilde; TENEMBAUM, Ernesto; *Identidad, despojo y restitución*, Abuelas de Plaza de Mayo, Buenos Aires, 2001.

INDEC, *Anuario estadístico de la República Argentina, 2004*, Buenos Aires, 2004.

ISLA, César, *El movimiento de mujeres en lucha y el plan de convertibilidad*, UNR Editora, Rosario, 2004.

JUVENAL, Carlos, *Buenos muchachos*, Planeta, Buenos Aires, 1994.

KORDON, Diana, *Efectos psicológicos de la represión política*, Sudamericana-Planeta, Buenos Aires, 1986.

KORDON, Diana, *La impunidad*, Sudamericana, Buenos Aires, 1995.

KOZAMEH, Alicia, *Ofrenda de propia piel*, Alción Editora, Córdoba, 2004.

LAFFORGUE, Carlos, *A quién no votar*, La cartonera, Buenos Aires, 2003.

LAMBERTO, Oscar, *Los cien peores días*, Editorial Biblos, Buenos Aires, 2003.

LANNOT, Jorge; AMANTEA, Adriana; SGUIGLIA, Eduardo; *Tosco. Escritos y discursos*, Editorial Contrapunto, Buenos Aires, 1985.

LANUSSE, Alejandro, *Mi testimonio*, Lasserre Editores, Buenos Aires, 1977.

LARRAQUY, Marcelo, *López Rega*, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 2004.

LAZZARI, Juan José, GRACIANO, Severo; *Del acero al agua bendita*, San Nicolás, 1998.

LOMBARI, Mario, *Vientre feroz de la pampa*, Pergamino, 2002.

MAC GUIRE, Santiago, *Personas y conceptos*, Editorial Buenas Ondas, Rosario, 1997.

MADRES DE PLAZA DE MAYO, *Nuestros hijos*, Buenos Aires, 1992.

MARONNA, Mauricio, *Del derrumbe a la ilusión*, Konrad Adenauer, Buenos Aires, 2005.

MATTINI, Luis, *Hombres y mujeres del PRT-ERP*, De la Campana, Buenos Aires, 1996.

MENDEZ, Eugenio, *Aramburu, el crimen imperfecto*, Sudamericana, Buenos Aires, 1987.

MENDOZA, Ramón, *Cartas pastorales* I y II, Editora Patria Grande, Goya, 2004.

MENDOZA, Ramón, *Testimonios*, Editora Patria Grande, Goya, 2004.

MENDOZA, Ramón, *Crónicas conciliares*, Editora Patria Grande, Goya, 2004.

MIGNONE, Emilio, *Iglesia y dictadura*, Ediciones del Pensamiento Nacional, Buenos Aires, 1986.

MITTELBACH, Federico, *Informe sobre desaparecedores*, Ediciones de la Urraca, Buenos Aires, 1988.

MONTINI, Jorge; ZERVA, Marcelo, *Vicente Zazpe. El corazón de un pastor*, San Pablo, Buenos Aires, 2000.

NATALE, Alberto, *Privatizaciones en privado*, Planeta, Buenos Aires, 1993.

NUEVO MUNDO, *El movimiento de sacerdotes para el tercer mundo*, Buenos Aires, 1991.

PALAZZINI, José, *Somisa, ¿reconversión o muerte?,* Editorial El otro mundo, Buenos Aires, 1993.

PAOLETTI, Alipio, *Como los nazis, como en Vietnam*, Asociación Madres de Plaza de Mayo, Buenos Aires, 1996.

PERDIA, Roberto, *La otra historia*, Grupo Agora, Buenos Aires, 1997.

PETROCELLI, Héctor, *Apuntes de historia de la iglesia en Argentina*, Fudación Mater Dei, Rosario.

PLIS-STERENBERG, Gustavo, *Monte Chingolo. La mayor batalla de la guerrilla argentina*, Planeta, Buenos Aires, 2003.

PORTELA, Huri, *La noche del chancho*, Libros del rescoldo, Buenos Aires, 2004.

POZZI, Pablo, *Oposición obrera a la dictadura*, Contrapunto, Buenos Aires, 1996.

RESTIVO, Néstor; DELATORRE, Raúl, *El rodrigazo, 30 años después*, Capital Intelectual, Buenos Aires, 2005.

ROMERO, Francisco, *Culturicidio. Historia de la educación argentina (1966-2004),* Librería de la Paz, Córdoba, 2005.

RONGA, Marta, *Seda cruda*, Laborde Editor, Rosario 2003.

ROSENBERG, Tina, *Astiz, la estirpe de Caín*, Editora/12, Buenos Aires, 1998.

ROSENVAIG, Eduardo, *El sexo del azúcar*, Ediciones Letra Buena, Buenos Aires, 1991.

SAGEN GIL, Guillermo, *La CGT de los Argentinos en Rosario*, UNR Editora, Rosario, 2005.

SANTUCHO, Blanca Rina, *Nosotros, los Santucho*, Córdoba, 2002.

SARAVIA, Mariano, *La sombra azul*, Ediciones del boulevar, Córdoba, 2005.

SEOANE, María, *El burgués maldito*, Planeta, Buenos Aires, 1998.

SEOANE, María, *Todo o nada*, Planeta, Buenos Aires, 1991.

SIVAK, Martín, *El asesinato de Juan José Torres. Banzer y el MERCOSUR de la muerte*, Ediciones del Pensamiento Nacional, Buenos Aires, 1998.

SIWAK, Pedro, *Víctimas y mártires de la década del setenta en la Argentina*, Editorial Guadalupe, Buenos Aires, 2000.

TEPPER, Guillermo; AHUMADA, Maximiliano; BERLANGA, Juan; *Monseñor*, Entre Líneas, Santa Fe, 2002.

TERRAGNO, Rodolfo, *El peronismo de los 70*, Capital Intelectual, Buenos Aires, 2005.

TRONCOSO, Oscar; *El proceso de reorganización nacional*, Centro Editor de América Latina, del 1 al 6, Buenos Aires, 1984.

TRUCCO, Edgardo, *Escritos*, Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, 2003.

URIARTE, Claudio, *Almirante Cero*, Planeta, Buenos Aires, 1995.

VERBITSKY, Horacio, *El vuelo*, Planeta, Buenos Aires, 1995.

VERBITSKY, Horacio, *Ezeiza*, Planeta, Buenos Aires, 1995.

VERBITSKY, Horacio, *Robo para la corona*, Planeta, Buenos Aires, 1991.

YANUZZI, María, *Los años oscuros del proceso*, UNR Editora, Rosario, 1991.

YANUZZI, María, *Política y dictadura*, Fundación Ross, Rosario, 1996.

WALSH, Rodolfo, *Ese hombre*, Seix Barral, Buenos Aires, 1996.

WORNAT, Olga, *Nuestra Santa Madre*, Ediciones B, Buenos Aires, 2002.

ZAZPE, Vicente, *La Argentina secreta*, Fundación Zazpe, Buenos Aires, 1989.

ZAZPE, Vicente, *Una Argentina que marcha a la pobreza*, Buenos Aires, 1993.

ZINNI, Héctor, *El Rosario de Satanás*, Editorial Centauro, Rosario, 1980.

ZUKER, Cristina, *El tren de la victoria*, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 2003.

Dedicatorias

A Victoria y Lucía, mis hijas.
A Sandra, mi amor compañera.
A mis padres que creyeron que sólo bastaba con ser buenos y fueron ninguneados.
A los amigos de siempre y a sus hijos.
A todos los pibes de estos arrabales del mundo.
A los hijos de los desaparecidos y de los desocupados.
A los que luchan todos los días contra la impunidad y la censura.

Entre lucha y opresión transcurre la historia de los pueblos. «La noche es más oscura antes del amanecer» dicen los zapatistas, ¿Será que la historia es iluminada por las generaciones que no se doblegan? ¿Será que la oscura muerte es la única herramienta de quienes en vano intentan acabar con los proyectos de revolución del pueblo?

Lxs 30.000 compañerxs que nos faltan eran trabajadorxs, eran jóvenes y eran militantes, su exterminio fue el intento de matar las ideas que encarnaban... Pero las ideas no murieron y sus luchas no acabaron. La muerte no fue final sino punto de partida para quienes levantamos sus banderas hoy.

Si es destino de la historia repetirse, con renovadas y maliciosas estrategias de opresión, la resistencia de los pueblos también será obligatoria.

Juventud y revolución son hermanas y recorren la historia hacia el único final posible: la victoria del pueblo. Un pueblo que sabe de oscuridad y muerte pero sin embargo renace todos los días para volver a vencer.

CAUSA
organización popular